

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS  
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS  
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE  
INCONSTITUCIONALIDAD**



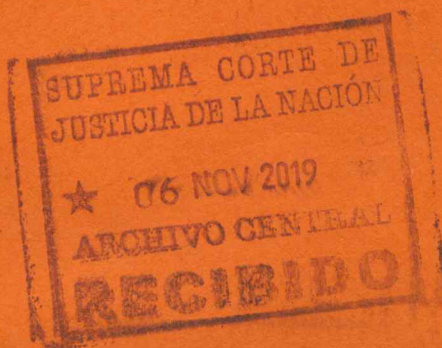
**CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL  
269/2019**

**ACTOR:** MUNICIPIO DE TIJUANA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

**DEMANDADO:** PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

**ACTO IMPUGNADO:** *"La omisión del Congreso del Estado de Baja California (XXII LEGISLATURA) de convocar al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a la Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, en la cual aprobaron una dispensa de trámite, con la consecuencia de no convocar a mi representada a los trabajos deliberativos de la misma y teniendo perjuicio tanto en los interés de la autoridad que represento, como en los derechos de los habitantes que representa el municipio respecto de la iniciativa en comento, transgrediendo el estado de derecho."*

**MINISTRO INSTRUCTOR: JAVIER LAYNEZ POTISEK**



REGISTRO: 027034  
Ext. 2309  
EHC/EDBG





**SUPREMA CORTE**  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Folio: 00105729

Expediente: CC-269/2019

Firma: \_\_\_\_\_

**SE PROMUEVE CONTROVERSIDAD  
CONSTITUCIONAL.**

**ACTOR: AYUNTAMIENTO DE  
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.**

**PARTE DEMANDADA: XXII  
LEGISLATURA DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA.**

Ciudad de México, a 19 de julio del 2019

**H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACIÓN, SECCIÓN DE  
TRÁMITE DE CONTROVERSIAS  
CONSTITUCIONALES Y DE  
ACCIONES DE  
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA  
SUBSECRETARÍA GENERAL DE  
ACUERDOS, CIUDAD DE  
MÉXICO.-  
P R E S E N T E.-**

**Lic. Ana Marcela Guzmán Valverde**, en mi carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, personalidad que se acredita en mérito de los documentos públicos que se anexan, denominado Bando Solemne publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, de fecha 30 de noviembre de 2016, Tomo CVVIII, numero 53, de dicho órgano de difusión, y mediante el cual el Instituto Estatal Electoral de Baja California, declaró la validez de la elección de municipales por el Ayuntamiento de Tijuana, celebrado el 5 de junio de 2016, y conforme a la cual se designó a la suscrito como Sindico Procuradora, propietaria del XXII Ayuntamiento de Tijuana, para el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2016 al 30 de septiembre de 2019; así como el acta 01, de la primera sesión de Cabildo, en la que se hizo constar la instalación del Ayuntamiento de Tijuana, y conforme a lo dispuesto por el artículo 8, fracción I, de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Calle Nubes Norte 120, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 06700, autorizando indistintamente como delegados en los términos amplios del segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los licenciados

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS  
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS  
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE  
INCONSTITUCIONALIDAD**

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D  
SUPREMA CORTE DE J  
SECRETARÍA GEN  
REGISTRACIÓN DE TRÁMITE  
CONSTITUCIONALES  
INCOSTITUC



Mtro. Leonardo Martínez Delgado, Lidia Z. Flores, Manuel Tapia, y Lic. Delia Luz Méndez Valles; ante esta Corte Suprema comparezco para exponer:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 105 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 10 y 21 fracción I de la Ley Reglamentaria del las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro con la personalidad que ostento a promover **CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL**, en contra de la omisión, actos y órganos de poder que precisaré a continuación.

A efecto de satisfacer los extremos del artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proporcionan los datos siguientes:

**I. ENTIDAD, PODER U ÓRGANO ACTOR, SU DOMICILIO Y EL NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO QUE LOS REPRESENTA:**

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, por conducto de su representante jurídico LIC. ANA MARCELA GÚZMAN VALVERDE, con el carácter de Síndico Procurador.



EL LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
ERAL DE ACUERDOS  
DE CONTROVERSIA  
Y DE ACCIONES DE  
NACIONALIDAD

**II. ENTIDAD, PODER U ÓRGANO DEMANDADO Y SU DOMICILIO:**

LA XXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, (Congreso del Estado) con domicilio ubicado en Edificio del Poder Legislativo, Calzada Independencia, No. 994, Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, Baja California.

**III. ENTIDADES, PODERES Y ÓRGANOS TERCEROS INTERESADOS, Y SUS DOMICILIOS:**

No existen.

**IV. NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA, ASÍ COMO EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE PUBLICÓ:**

La omisión del Congreso del Estado de Baja California (XXII LEGISLATURA) de convocar al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a la Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución Política del Estado Libre y

1  
2  
[Handwritten signature]



SIN TEXID



PODER JUDICIAL I  
SUPREMA CORTE DE J  
SUBSECRETARIA GE  
SECCION DE TRAMITI  
CONSTITUCIONALE  
INCOSTITU



Soberano del Estado de Baja California, en la cual aprobaron una dispensa de trámite, con la consecuencia de no convocar a mi representada a los trabajos deliberativos de la misma y teniendo perjuicio tanto en los interés de la autoridad que represento, como en los derechos de los habitantes que representa el municipio respecto de la iniciativa en comento, transgrediendo el estado de derecho.

## PROCEDIBILIDAD DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

En virtud que el acto reclamado constituye una omisión (acción negativa), contra la cual no existe recurso ordinario ni extraordinario alguno para modificarlo o anularlo; y que la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos específicamente en su artículo 21, no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones; razón por lo cual es aplicable la siguiente jurisprudencia del Pleno:

Novena Época

Núm. de Registro: 183581

Instancia: Pleno Jurisprudencia.

En: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Agosto de 2003.

Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 43/2003 Página: 1296

**CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.** El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.



SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE  
SUBSECRETARÍA GE  
RECCIÓN DE TRÁMI  
CONSTITUCIONALI  
— INCOSTITU

Controversia constitucional 10/2001. Celestino Pérez Arroyo, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, Estado de Michoacán, contra el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 22 de abril de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y María Amparo Hernández Chong Cuy. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de julio en curso, aprobó, con el número 43/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de julio de dos mil tres.

#### V. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS:

Artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 39, 40, 115 primer párrafo, fracciones I y III apartado i último párrafo; 116 fracción I, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 29, 30, 31 y 82, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

#### VI. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE MANIFIESTAN LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTAN A LA PARTE ACTORA Y QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO IMPUGNADO.

1. Que a fin de dar cumplimiento a lo que mandata el artículo 116, fracción IV, inciso n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante Decreto Número 112, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 17 de octubre de 2014, se aprobaron entre otras, la reforma al artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

El Transitorio **OCTAVO** del Decreto apenas referido dispuso lo que para mejor comprensión se transcribe literalmente:

**"OCTAVO.-** Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, El Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de diciembre de 2021.

La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2027. Por única ocasión el



SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE J  
SECRETARÍA GEN  
SECCIÓN DE TRÁMITE  
CONSTITUCIONALES  
INCOSTITUC

*Gobernador del Estado electo en el proceso electoral de 2021, iniciará funciones el primero de noviembre de 2021 y concluirá el 31 de agosto de 2027."*

2. Es el caso, que a las 20:06 horas del día 08 de julio de 2019, la XXII Legislatura del Estado de Baja California, celebró sesión extraordinaria y durante el desarrollo de la misma se presentó a la Presidencia de la Mesa Directiva un documento identificado como "*iniciativa de decreto que reforma el artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California*", aprobado mediante el decreto número 112 ya precisado en el punto precedente.
3. Cabe de mencionar que en el acta en comento no se desprende que se hubiese mandado previamente a los diputados los dictámenes correspondientes de dicha iniciativa en términos del artículo 18, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
4. Por otra parte, antes de la lectura de la iniciativa, la Legislatura demandada dispensó indebidamente el trámite de turnarla a la Comisión de Dictamen Legislativo; ello a pesar de que no se sustentó las razones que dieran lugar a la necesidad o a la urgencia para discutir el asunto dispensando el proceso a comisión, tal y como le requiere el **artículo 31 de la Constitución Política de Baja California**, que establece: "ARTÍCULO 31.- En los casos de urgencia notoria calificada por mayoría de votos, de los diputados presentes, el Congreso puede dispensar los trámites reglamentarios para la aprobación de las leyes y decretos."; así como en relación con el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California, que establece: "ARTICULO 119. Solo podrá dispensarse del trámite de ser turnada una iniciativa o proposición de acuerdo económico a la Comisión competente, en los asuntos que por acuerdo del Pleno del Congreso del Estado, por mayoría simple y en votación económica, se califiquen de urgente y de obvia resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Local, la presente ley y su reglamento. **Además de lo señalado en el párrafo anterior, para la procedencia de la dispensa de trámite resultará necesario cuando menos la existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto, que de no realizarse traería**



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LA FEDERACIÓN  
 JUSTICIA DE LA PAZ  
 TRIBUNAL DE ACUERDOS  
 DE CONTROVERSIAS  
 Y DE ACCIONES DE  
 INCONSTITUCIONALIDAD

*[Firma manuscrita]*

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL I  
SUPREMA CORTE DE J  
SECRETARÍA GEI  
SECCIÓN DE TRAMITE  
CONSTITUCIONALES  
INCOSTITUC



consecuencias negativas para la sociedad. Así mismo, la condición de urgencia deberá evidenciar la necesidad de omitirse los trámites parlamentarios correspondientes, sin que esto implique la afectación a principios o valores democráticos.

5. Lo anterior, fractura el procedimiento y actualiza un daño a la certeza de los Ayuntamientos, pues, al no existir un argumento que actualice la urgencia o la obvia resolución, se tuvo que dar vista al Ayuntamiento de Tijuana Baja California cuando menos cinco días de anticipación para asistir y participar en el análisis en la comisión respectiva, lo cual no sucedió, pues el mismo 08 de julio de 2019 se aprobó la misma; sin cumplir con las formalidades constitucionales y legales requeridas.
6. De la exposición de motivos de la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio mencionada, se advierte que tiene como finalidad ampliar el periodo para la gubernatura del gobernador que fue electo a 2 años 10 meses; el inicialista expone, que "resulta imperante ampliar el periodo de duración del encargo del Gobernador a 5 años", esto es, de 2 a 5 años, y al tratarse de una modificación a la Constitución local, los Ayuntamientos, como lo es el de Tijuana, Baja California, tiene el derecho y la atribución de participar en la comisión de dictaminación de dicha medida legislativa, pues así lo disponen los artículos 30 fracción II y 82 apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.



Lo anterior en vinculación con el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en sus artículos 115 y 116, establecen:

"Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de **gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular**, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

[...]

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE L  
MEXICANA CORTE DE JUST  
FEDERAL SECRETARÍA GENET  
SECCIÓN DE TRÁMITE DE  
CONSTITUCIONALES Y  
INCONSTITUCIO

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. Los gobernadores de los Estados, **cuyo origen sea la elección popular**, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y **por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo**, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.

**Nunca podrán ser electos para el período inmediato:**

- a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación;
- b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo."

De las normas constitucionales se deduce que las legislaturas de los estados deben de respetar los principios de la forma de gobierno constitucional, establecidos en el régimen interior de los Estados la cual debe ser una forma de **gobierno republicano, representativo, democrático, y popular**, entonces, al omitir el Congreso del Estado discutir la iniciativa en Comisión ni mandar llamar a los Ayuntamientos del Estado en la cual consideró el Poder Legislativo ampliar el periodo de un Gobernador Electo, tal omisión trastoca la forma de Gobierno Republicana, ya que este principio implica que los gobernantes sólo pueden ejercer el poder por el tiempo para el que fueron electos, y no pueden prorrogarse en ese ejercicio del poder público por ley ni por omisión o acto de autoridad; igualmente viola los principios de democracia y popular; ya que el pueblo que integra el Municipio de

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

A FEDERACIÓN  
CIA DE LA UNIÓN  
AL DE ACUERDO  
CONTRAVENIR  
E ACCIONES DE  
VALIDAD



SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE  
SUPREMA CORTE DE JU  
SUBSECRETARÍA GEN  
SECCIÓN DE TRÁMITE  
CONSTITUCIONALES  
INCOSTITUCI

Tijuana, se ve representado por el Ayuntamiento de Tijuana, y tiene el derecho de participar en la discusión de una reforma de hondo calado, como fue el caso de la ampliación de una gubernatura ya votada. De ahí el agravio que irroga el Congreso del Estado contra el Ayuntamiento de Tijuana, ya que al omitir involucrarlo en la fase de discusión de la reforma afecta de una manera sustancial la vida democrática de la entidad.

Por otra parte, el acuerdo del Congreso del Estado de Baja California, viola lo establecido en el artículo 116 Constitucional, ya que establece que un Gobernador que haya sido electo para un periodo de gobierno, por ningún motivo puede volver a ocupar el cargo de Gobernador, y que no podrá ser electo para periodo inmediato anterior; esto es, el que el Congreso del Estado amplíe el plazo para gobernar están decidiendo por los millones de electores de la entidad y en contra del texto de la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos.



7. Mediante oficio número 15795 de fecha 08 de julio de 2019, signado por el Diputado Presidente Edgar Benjamín Gómez Macías y Diputada Iraís María Vázquez Aguiar, ambos integrantes de la XXII Legislatura del Estado de Baja California, notificaron al Municipio de Tijuana, Baja California, una copia certificada de la iniciativa que hoy se impugna en esta instancia constitucional, para los efectos del artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Siendo la materia de impugnación en la presente controversia constitucional **la omisión**, derivada de la indebida dispensa de trámite aprobada del Congreso, **de convocar al Ayuntamiento de Tijuana a Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos** que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112, pues como se expondrá más adelante, la XXII Legislatura demandada tenía la obligación de celebrar la Comisión de dictaminación de la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio y convocar al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, cuando menos cinco días de anticipación a la fecha de la Sesión, a efecto de que concurran al desahogo de las sesiones si lo estiman conveniente, así como también tenía

SIN TEXTO



SECRETARÍA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN  
INSTITUCIONALES  
INCOSTITUC



la obligación de substanciar el proceso legislativo en las fases subsiguientes a dicha dictaminación.

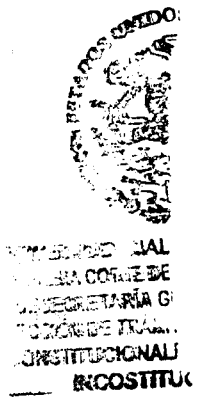
Al no hacerlo así, se excluyó indebidamente al municipio actor de participar en los trabajos en los se decidieron cuestiones relevantes para la vida política del Estado de Baja California.

## VII. CONCEPTOS DE INVALIDEZ.

**ÚNICO.-** La XXII Legislatura del Estado de Baja California, no remitió previamente a los diputados los dictámenes correspondientes de la multicitada iniciativa, por ende, no cumplió con lo establecido en el artículo 18, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; así también, omitió convocar al Ayuntamiento de Tijuana a Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución del Estado, ello derivado de la indebida dispensa de trámite de dicha iniciativa, violando así gravemente el proceso legislativo y por ende el principio de legalidad y debido proceso, contenido en el artículo 14 párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, en su vertiente de indebida motivación, y con esto provocando la invalidez de dicha norma.

Lo anterior, ya que con dicha omisión privó sin justificación alguna al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, de su derecho a ser escuchado en la fase de dictaminación, sin justificar la razón por la que se dispensaba el trámite legislativo ordinario que debía seguir dicha iniciativa conforme a las reglas aplicables. Ello, porque al no ser turnada la iniciativa a la Comisión de Dictamen Legislativo correspondiente, y dejar de hacer un serie de actos correspondientes a las fases del proceso legislativo ordinario, **como lo es convocar a los Ayuntamientos a dicha comisión de dictaminación para formar parte de los trabajos legislativos relativos a reformas a la Constitución local, en términos de los artículos 30 fracción II y 82 apartado A, fracción III, de la Constitución local y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, sin razonar ni justificar que la dispensa de trámite de la iniciativa se aprobaba por tratarse de un caso de urgencia notoria y obvia resolución a que se refiere los artículos 31 y 119 de dichos ordenamientos, justificación que para**

SIN TEXTO



la procedencia de dicha dispensa era indispensable, en términos del artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, de conformidad con la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, número 36/2009, de rubro: **DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. PARA SU PROCEDENCIA DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE.**

Es así, que el Congreso violó de manera grave el proceso legislativo instituido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, lo que impidió al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, ejercer su derecho de audiencia para opinar, discutir y hacerse representar en el seno de la Comisión de Dictamen legislativo para analizar dicha iniciativa que a la brevedad trascendió a la decisión plenaria adoptada sin tener un razonamiento en el sentido del porqué se omitió la turnación a Comisión y por la escases de un análisis de impacto por el tema en cuestión, ello, a pesar de ser un asunto de suma trascendencia para nuestra entidad.



ESTADO DE LA FEDERACIÓN  
SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS  
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DE ACCIONES  
SECRETARÍA DE FISCALÍA

Omisión que invadió la esfera de atribuciones del orden municipal que represento, debido a la exclusión del Ayuntamiento de Tijuana Baja California por parte del Congreso, de participar en la fase de dictaminación de la iniciativa de referencia, a efecto de ser escuchado, intervención que es un derecho de mi representado y fue soslayada en detrimento del orden constitucional, y cuya observancia a la vez constituye una obligación para el Congreso, de conformidad con los artículos 30, fracción II, y 82, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado, y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

Así, resulta evidente que el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California al ser un municipio situado en el Estado de Baja California, debió haber sido convocado a participar y manifestar lo que su derecho conviniera en la fase de dictaminación y toda vez que la medida legislativa incide de manera directa en la vida política de la entidad, y por lo tanto la omisión de referencia afecta un aspecto de su competencia municipal, como lo es participar en las reformas que se pretendan llevar a cabo a la Constitución del Estado, soslayando su derecho y atribución de formar parte de los trabajos legislativos en la comisión de dictamen legislativo que se deriva de los artículos 31 y 82, apartado A, fracción III, de la Constitución local.



SIN TEXIO



En consecuencia, la XXII Legislatura trastocó el ámbito competencial del orden de gobierno municipal, ya que al omitir, sin causa justificada, convocar al Ayuntamiento de Tijuana de Baja California a la Comisión de dictamen legislativo y a participar en torno a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución local, infringió en perjuicio del Municipio su **derecho de audiencia, debido proceso y legalidad contenidos en los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quebrantándose los artículos 29, 30, fracción II, 31 y 82, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como los numerales 116, 118, 119 y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.**

Al efecto, y para advertir la forma en que fueron infringidos los preceptos de la Constitución General, a continuación se transcribe en la parte que interesa, la iniciativa de decreto legislativo que contiene la reforma cuya invalidez se pretende.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DE LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
GENERAL DE ACUERDOS  
TE DE CONTROVERSIAS  
ES Y DE ACCIONES DE  
JICIONALIDAD

### **"ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

#### **PRIMERO AL SÉPTIMO.-...**

**OCTAVO.-** Para efecto de la concurrencia de la elección de Gubernatura del Estado con el proceso electoral federal de 2024, la Gubernatura electa en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024."

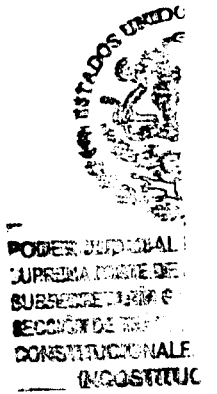
La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2030, iniciará funciones el primero de noviembre de 2024 y concluirá el treinta y uno de agosto de 2030.

Para iniciar el estudio de constitucionalidad, previamente es necesario analizar las normas secundarias que rigen el procedimiento legislativo en el Estado de Baja California; porciones normativas que disponen lo siguiente:

**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y  
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA**

12

SIN TEXTO



**ARTÍCULO 29.-** Las iniciativas de ley o decreto deberán sujetarse a los trámites siguientes:

- I.- Dictamen de Comisiones;
- II.- Discusión;
- III.- Votación.

**ARTÍCULO 30.-** Las comisiones de dictamen legislativo anunciarán al Ejecutivo del Estado, cuando menos con cinco días de anticipación, la fecha de la sesión cuando haya de discutirse un proyecto, a fin de que pueda enviar un representante que, sin voto tome parte en los trabajos.

El mismo procedimiento se seguirá con:

I.- El Poder Judicial, cuando la iniciativa se refiere a asuntos relativos a la organización, funcionamiento y competencia del ramo de la Administración de Justicia; y

II.- Los ayuntamientos, cuando la iniciativa se refiera a los asuntos de carácter municipal, en los términos de esta Constitución.

**ARTÍCULO 31.-** En los casos de urgencia notoria calificada por mayoría de votos, de los diputados presentes, el Congreso puede dispensar los trámites reglamentarios para la aprobación de las leyes y decretos.

**ARTÍCULO 82.-** Para el mejor desempeño de las facultades que le son propias, así como para la prestación de los servicios públicos y el ejercicio de las funciones que le son inherentes, los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes:

#### **A. ATRIBUCIONES:**

III.- Participar en las reformas de esta Constitución, en los términos previstos por la misma;

#### **LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

**ARTÍCULO 116.** Las Iniciativas de Ley o Decreto deberán sujetarse a los trámites siguientes:

- I. Dictamen de Comisiones;
- II. Discusión; y,
- II. Votación.

**ARTÍCULO 118.** Todo proyecto se turnará por el Presidente del Congreso a la Comisión que corresponda según la naturaleza del asunto de que se trate.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
E LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
IERAL DE ACUERDO  
DE CONTROVERSIAS  
Y DE ACCIONES DE  
JONALIDAD

*[Firma manuscrita]*

SIN TEXTO

RECEIVED  
BUREAU OF THE  
RECORDS AND  
COMMUNICATIONS  
SECTION  
JAN 11 1961

Si del estudio y análisis de las iniciativas dentro de las Comisiones de dictamen legislativo es necesario complementarlas o clarificarlas, bastará con que así lo manifieste su inicialista o algunos de los integrantes de la Comisión, a través de una adenda en forma escrita, hasta antes de que sean dictaminados por la Comisión respectiva.

El dictamen se presentará al Pleno del Congreso en los plazos señalados en el Artículo 124 de esta Ley, para el cumplimiento de las fracciones II y III del Artículo 29 Constitucional.

**ARTÍCULO 119.** Solo podrá dispensarse del trámite de ser turnada una iniciativa o proposición de acuerdo económico a la Comisión competente, en los asuntos que por acuerdo del Pleno del Congreso del Estado, por mayoría simple y en votación económica, se califiquen de urgente y de obvia resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Local, la presente ley y su reglamento.

Además de lo señalado en el párrafo anterior, para la procedencia de la dispensa de trámite resultará necesario cuando menos la existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto, que de no realizarse traería consecuencias negativas para la sociedad. Así mismo, la condición de urgencia deberá evidenciar la necesidad de omitirse los trámites parlamentarios correspondientes, sin que esto implique la afectación a principios o valores democráticos.

No podrá dispensarse el trámite a comisiones de ninguna cuenta pública.

**ARTÍCULO 120.** Las Comisiones de Dictamen Legislativo respectivas, anunciarán al Ejecutivo del Estado, a los Ayuntamientos y al Poder Judicial, cuando menos con cinco días de anticipación la fecha de la Sesión, a efecto de que concurran al desahogo de las sesiones si lo estiman conveniente; a presentar o hacer valer sus opiniones o alegatos, tal y como lo establece el Artículo 30 de la Constitución Local; además de que el mismo procedimiento se seguirá con el Tribunal de Justicia Electoral y el Instituto Estatal Electoral, cuando la Iniciativa se refiera a los asuntos de carácter Electoral.

Del análisis sistemático de las porciones normativas previamente citadas, es posible advertir que las iniciativas de ley o decreto deben sujetarse a los trámites de dictamen de comisiones, discusión y votación, por disposición Constitucional.

ESTADOS MEXICANOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUJARAT  
SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS  
COMITÉ DE CONTROL VERIFICACIÓN  
DE LEYES Y DE ACCIONES CONSTITUCIONALES



SW TEXT10



**SECRET**  
**ARMED AND DANGEROUS**  
**UNSUBS CRIMINAL RECORD**  
**RECORD OF VIOLATIONS**  
**MINISTERIAL OFFICE**

Dentro del **trámite relativo al dictamen en comisiones**, éstas se encuentran obligadas a anunciar a los municipios, **cuando menos con cinco días de anticipación**, la fecha de la sesión cuando haya de discutirse un proyecto, a fin de que pueda enviar un representante que, sin voto, **tome parte en los trabajos**, cuando la iniciativa se refiera a **los asuntos de carácter municipal**, tal y como debió suceder a la luz de lo expuesto, en los términos de la Constitución del Estado de Baja California.

Ahora, si bien es cierto la Constitución de Baja California prevé la posibilidad de dispensar los trámites reglamentarios para la aprobación de las leyes y decretos, también es verdad que como ya se mencionó, esto sólo es en los casos de que exista urgencia notoria calificada por mayoría de votos de los diputados presentes, para lo cual forzosamente deberá acreditarse en términos del artículo 119 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, lo siguiente:

- La existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto.
- Que de no realizarse traería consecuencias negativas para la sociedad.
- Así mismo, la condición de urgencia deberá evidenciar la necesidad de omitirse los trámites parlamentarios correspondientes, sin que esto implique la afectación a principios o valores democráticos.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
D. LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
GENERAL DE ACUERDOS  
TE DE CONTROVERSIAS  
ES Y DE ACCIONES D  
CIONALIDAD

Así lo ha establecido la Suprema Corte en diversas jurisprudencias y sentencias, entre ellas la referida 36/2009, de rubro: **DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. PARA SU PROCEDENCIA DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE**; previendo al efecto la condicionantes referidas que actualmente se encuentran positivadas en el artículo 119 párrafo segundo, aludido con antelación, y así lo dispuso además al resolver la Controversia Constitucional número 58/2013 planteada justamente por el Municipio de Tijuana Baja California, sentando el criterio, que **para la procedencia de la dispensa de los trámites legislativos resulta menester motivar las razones que lleven a calificar un asunto como urgente.**

*[Handwritten signature and scribbles]*

SIN TEXTO

PODER JUDICIAL  
SUPLENTE  
SUBSECRETARÍA  
SECCIÓN CENTRAL  
CONSTITUCIONAL  
— INSTITUTO

Empero, la indebida omisión reclamada al Congreso, de convocar al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a comisión de dictaminación de la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio presentada por el Grupo Parlamentario del partido MORENA, es consecuencia de la indebida dispensa de trámite de la misma, (que cabe mencionar se vota la dispensa antes de dar lectura a la iniciativa y orden del día) pues aunque el día 08 de julio de 2019, el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández solicitó su dispensa de trámite, y en su exposición de motivos planteó consideraciones del por qué la reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112, ninguna justificación hizo sobre la urgencia de su aprobación sin seguir los trámites legislativos ordinarios previstos en el orden jurídico estatal. Lo anterior provocó que no se discutiera por el Ayuntamiento de Tijuana, ni por ningún otro Ayuntamiento tal iniciativa, es más, tampoco fue discutida por ningún diputado del Congreso del Estado.

Cabe de mencionar que en el acta en comento no se desprende que se hubiese mandado previamente a los diputados los dictámenes correspondientes de dicha iniciativa en términos del artículo 18, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE ENERGÍA  
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
SECRETARÍA DE INTERIORES  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA  
SECRETARÍA DE SALUD  
SECRETARÍA DE TRABAJO  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE DEFENSA  
SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES  
SECRETARÍA DE CULTURA  
SECRETARÍA DE TURISMO  
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
SECRETARÍA DE INTERIORES  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA  
SECRETARÍA DE SALUD  
SECRETARÍA DE TRABAJO  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE DEFENSA  
SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES  
SECRETARÍA DE CULTURA  
SECRETARÍA DE TURISMO

Asimismo, nada se dijo y/o discutió sobre la urgencia del tema y de la necesidad de aprobar con dispensa de trámite la iniciativa de reforma, lo cual derivó en la indebida omisión que se reclama de convocar al Ayuntamiento de Tijuana a comisión de dictaminación y desde luego celebrar ésta para participar en los trabajos legislativos, así como realizar los demás actos conducentes parte del proceso legislativo, y patentiza la irregularidad grave en el desarrollo del mismo que se traduce en su invalidez.

Así, con la omisión reclamada a la XXII Legislatura del Estado de Baja California de no convocar al Ayuntamiento de Tijuana a la comisión de dictaminación que se tendría que haber efectuado conforme a las reglas del proceso legislativo para expresarse con relación a la iniciativa de reforma ya expuesta, se vulneraron los derechos constitucionales del Municipio, consagrados en los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen:

**Artículo 14.** A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

SIN TEXTO



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
UFFICIO DEL REGISTRO  
E DEL TRIBUNALE  
DI ROMA

*Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o **derechos**, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.*

**Artículo 16.** *Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.*

En efecto, el artículo 14 Constitucional establece la garantía de debido proceso que obliga a las autoridades a cumplir con los procedimientos que las leyes establezcan antes de emitir una resolución que pueda producir una afectación.

En tratándose de actos legislativos, esta garantía se traduce en que las autoridades que participan en el proceso de creación de las normas observen cada una de las etapas previamente establecidas.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
E LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
ERAL DE ACUERDO  
DE CONTROVERSIAS  
Y DE ACCIONES DE  
NACIONALIDAD

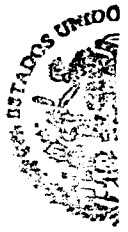
Asimismo, en el artículo 16 Constitucional contiene el **principio de legalidad**, mismo que consiste en que, cuando se refiere a actos entre personas de derecho público, exista una norma legal que atribuya a favor de la entidad respectiva la facultad para actuar en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley; esto es, la autoridad debe ajustar su actuación a la norma legal en la que encuentra fundamento la conducta desarrollada.

Conviene señalar que las disposiciones sobre el proceso legislativo, se encuentran ampliamente reguladas en la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, pues en los numerales 110 al 164 se señala el trámite que debe dársele a las iniciativas que se presenten ante el Congreso.

Entonces, como se anticipó, para cumplir con estas bases normativas que surgen tanto de la Constitución Local como de la Ley Orgánica mencionada, la XXII Legislatura del Estado de Baja California estaba obligada a turnar la iniciativa de reforma a la Comisión Legislativa correspondiente para su dictamen; pudiendo dispensarse este trámite solo si efectivamente se tratara de un asunto de urgente necesidad y de obvia resolución, conforme lo disponen los artículos 29 y 31 de la Constitución Política del Estado Libre y



SIN TEXTO



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA  
SECRETARIA DE JUSTICIA  
SECCION DE TRABAJO  
CONSTITUCIONAL  
INSTITUTO

Soberano de Baja California, en relación con los numerales 116, 118 y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, para lo cual se tienen que reunir los estándares contenidos en el párrafo segundo del artículo 119 de referencia, que positivaron lo ya definido al respecto por la propia Suprema Corte en la jurisprudencia número 36/2009, ya referida, y justificarse ello en la iniciativa que se apruebe.

Ahora, turnado el asunto a la Comisión de dictaminación, ésta debió anunciar al municipio, cuando menos con cinco días de anticipación, la fecha de la sesión en que se discutirá la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio, a efecto de que el municipio estuviera en posibilidad de concurrir a la sesión, presentar o hacer valer sus opiniones o alegatos, derivado de las atribuciones que al efecto le confiere el orden jurídico, y el interés con motivo de su ámbito competencial que ésta autoridad municipal actora tiene interés jurídico en participar en las decisiones que atañen a la vida política del Estado de Baja California, por ser precisamente su participación con voz un derecho con el que cuenta en el proceso legislativo que le corresponde acorde al orden jurídico estatal respecto a reformas constitucionales locales, así como por tratarse de un tema de colaboración armónica de los poderes públicos del Estado de Baja California, tal y como lo disponen los artículos 30, fracción II, y 82, apartado A, fracción III, de la Constitución Local, y el diverso 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE LA FEDERACIÓN  
SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL DE ASUNTOS  
SECRETARÍA DE CONTROVERSIA  
SECRETARÍA DE ACORDADA  
SECRETARÍA DE CONCILIACIÓN

De ahí que con la omisión del Congreso de convocar a los Ayuntamientos a participar con voz en los trabajos parlamentarios, y demás actos y fases del proceso legislativo, derivado de la injustificada dispensa de trámite de la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio precitado, al no expresarse las razones, motivos o causas para poder calificar que se trataba de un caso urgente y obvia resolución, tal omisión infringió los artículos 30, fracción II, y 82, apartado A, fracción III, ambos en relación con el 31, de la Constitución del Estado de Baja California, así como el 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

Trascendiendo ello al ámbito competencial del municipio, pues se trastocaron sus derechos constitucionales de audiencia previa del municipio, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de las consideraciones expuestas.

SIN  
TEXTIO



DEN JUDICIAL  
 REIA CORTE DE  
 SECRETARIA GE  
 CION DE TRAM  
 INSTITUCIONAL  
 INSTITU

Esto, porque con motivo de la omisión que se reclama, se impidió al Municipio de Tijuana, Baja California, ejercer su derecho constitucional de audiencia para opinar, discutir y hacerse representar en los trabajos de la Comisión de Dictamen, tal y como lo prevé el artículo 30, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y el 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la propia entidad federativa.

De ahí que convocar el Congreso a los Ayuntamientos a comisión de dictaminación para que manifiesten lo conducente, en tratándose de reformas a la Constitución del Estado, no constituye una facultad del Congreso, ni tampoco sea optativo para éste invitarlo, ya que es un derecho de participación de los Ayuntamientos, entre ellos del de Tijuana, en el procedimiento legislativo, el cual está obligado a respetar el órgano parlamentario en términos del propio artículo 30, fracción II y 82, apartado A, fracción III, de la Constitución local, así como 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, pues como lo dijo esencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Controversia Constitucional número 58/2013, **la observancia del artículo 30 de la Constitución de Baja California en modo alguno es optativa para el Congreso del Estado de Baja California.**



Al respecto, en dicha Controversia Constitucional la Suprema Corte reiteró lo sostenido en la 94/2011, señalando al efecto literalmente que en dicha controversia constitucional *"incluso se aclaró por parte de este Alto Tribunal que ello no significaba que la falta de invitación oportuna a los Municipios del Estado de Baja California a participar en el procedimiento legislativo fuera siempre una violación intrascendente, pues el pronunciamiento de dicho fallo tomaba en cuenta toda la serie de peculiaridades fácticas y normativas del caso concreto, para llegar a la conclusión de que, analizada en sus méritos, la violación en que se incurrió no había trascendido a la validez de la norma, pero sin que ello implicara, en modo alguno, que la observancia del artículo 30 de la Constitución Local fuera optativa para el Congreso del Estado de Baja California".<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Consideración que rigió al resolutivo tercero de la sentencia de la Controversia Constitucional citada, aprobada por mayoría de ocho votos, y que resulta de observancia obligatoria y constituye jurisprudencia en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de conformidad con la jurisprudencia número 2/2004 de la Suprema Corte, de rubro: JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER LAS RAZONES CONTENIDAS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS RESOLUTIVOS DE LAS SENTENCIAS EN CONTROVERSIAS

SIN TEXTO



PODER EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARIA DE JUSTICIA Y  
FEDERACION DE ESTADOS  
SECCION DE TRAMITE DE  
CONSTITUCIONALES Y  
INCONSTITUCIONALES

Por ende, la omisión reclamada al Congreso del Estado incide en el ámbito de competencia municipal, pues es claro que existe un interés jurídico de los Ayuntamientos<sup>2</sup> derivado de su atribución que le confiere la Constitución local para participar con voz en los trabajos legislativos en el seno de las comisiones del Congreso, en lo concerniente entre otras cuestiones a reformas a la constitución local.

Ello, porque el derecho con el que cuenta el municipio busca garantizar su participación en las deliberaciones de la Comisión de Dictamen Legislativo, para la aportación de sus opiniones, puntos de vista e información, en observancia al principio democrático que se deriva de los artículos 39 y 40 de la Constitución Federal.

Participación que como se ha expuesto, se debe verificar en una fase previa a la discusión plenaria y resulta trascendente porque los argumentos o alegatos que exponga el municipio influyen, tanto en la elaboración del dictamen de la Comisión, como en la particular opinión de los diputados que la integran, pues finalmente se somete a votación y son estos quienes ocurren con voz y voto a sesión plenaria.



A FEDERACIÓN  
CIA DE LA NACIÓN  
AL DE ACUERDO  
CONTROVERSIAS  
DE ACCIONES DE  
VALIDAD

En ese contexto, al lado de la participación de las fuerzas políticas con representación partidaria representada por los diputados y que tienen derecho a deliberar y votar una iniciativa de ley tanto en las comisiones de dictaminación como en el Pleno del Congreso, coexiste un derecho del municipio para participar en el proceso legislativo, en la fase de los trabajos de la Comisión de Dictamen Legislativo, preparatorios a la discusión plenaria, y con el fin de aportar sus opiniones, puntos de vista e información para enriquecer el dictamen que posteriormente se votará.

Así, ambos derechos previstos en la Constitución se complementan para perfeccionar e integrar la voluntad parlamentaria, por lo que deben de respetarse y observarse.

CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, POR LO QUE SON OBLIGATORIAS PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

<sup>2</sup>En términos de lo dispuesto en los artículos 30, fracción II y 82, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.



SIN TEXTO



OSER JUDICIAL  
APROPIADO DE  
SECRETARIA G  
CIÓN DE TRAM  
CONSTITUCIONAL  
INCOSTITI

Por el contrario, si se sostiene equivocadamente que por el sólo ejercicio del derecho de los diputados de deliberar y votar la reforma, no se anula o hace intrascendente el derecho del municipio para ejercer sus atribuciones legales en el proceso legislativo, ello implicaría desconocer y privar a éste de sus derechos constitucionales para participar en la vida política del estado, lo cual a su vez representaría una trasgresión a la legalidad que debe imperar en el proceso de creación normativa.

Lo anterior puede sustentarse en mayor medida con las siguientes jurisprudencias:

Décima Época Núm. de Registro: 2002365 Instancia: Primera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común, Constitucional Tesis: 1a. CCLXVIII/2012 (10a.) Página: 580

**PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE LOS ACTOS QUE LO INTEGRAN TRATÁNDOSE DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL O UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.**



En la jurisprudencia P./J. 35/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ACTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.", el Tribunal en Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que en la acción de inconstitucionalidad los actos integrantes del procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general resultante, por lo que es improcedente impugnar individualmente cada fase de éste, pues no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través de su análisis conjunto con motivo de la publicación de la norma, porque es hasta ese momento cuando los actos adquieren definitividad. Ahora bien, a diferencia de lo anterior, en la controversia constitucional las fases del procedimiento legislativo pueden reclamarse sin que pueda alegarse falta de definitividad, ya que en este medio de control no hay limitación a la impugnación de normas generales, lo que permite atacar actos concretos que integran cada una de las fases del procedimiento legislativo, siempre que lo hagan los poderes

SIN TEXTO



REGISTRO JUDICIAL  
SECRETARIA DE JUSTICIA  
DIRECCION DE TRAMITACION  
CONSTITUCIONAL  
INCOSTITI

legitimados por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y éstos aleguen una transgresión a su ámbito constitucional de competencias asignado.

Recurso de reclamación 36/2012-CA, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 68/2012. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 19 de septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 35/2004 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, junio de 2004, página 864.

Novena Época Núm. de Registro: 183581 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Agosto de 2003 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 43/2003 Página: 1296

**CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.**



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DE LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN  
TRIBUNAL SUPLENTE  
GENERAL DE ACUERDO  
DE CONTROVERSIA  
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES D  
CONSTITUCIONALES

El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.

Controversia constitucional 10/2001. Celestino Pérez Arroyo, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, Estado de Michoacán, contra el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 22 de abril de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y María Amparo Hernández Chong Cuy. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de julio en curso, aprobó, con el

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE D  
SUBSECRETARIA  
SECCION DE TRANS  
CONSTITUCIONA  
— INCOSTIT

número 43/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de julio de dos mil tres.

## CAPITULO DE SUSPENSIÓN

Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 14, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15 de dicho ordenamiento interpretado a contrario sensu, solicito desde este momento **suspensión con los siguientes alcances:**

1. No se declare la incorporación a la Constitución Política del Estado de Baja California la modificación del artículo octavo transitorio del Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, cuya reforma se aprobó por el Congreso del Estado de Baja California, en sesión extraordinaria de fecha 8 de julio de 2019, y con posterioridad por los Ayuntamientos de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, en tanto se resuelve la materia de la controversia.

2. No se promulgue ni se publique en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, Decreto alguno mediante el cual se reforma el artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución Política del Estado de Baja California, de fecha 11 de septiembre de 2014, en tanto se resuelve la materia de la controversia.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS  
COMITÉ DE CONTROVERSIA  
LEYES Y DE ACCIONES DE  
CONSTITUCIONALIDAD

Lo anterior es factible, toda vez que dichos actos no se han llevado a cabo, y en virtud de que con la concesión de la medida cautelar solicitada no se pone en peligro la seguridad o economía de la nación, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ni mucho menos puede afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el municipio actor, y en cambio, al concederse la medida cautelar solicitada:

1) Se salvaguarda el orden constitucional evitando la incorporación a la Constitución, promulgación y publicación de un Decreto derivado de un proceso legislativo en el que conforme a los elementos expuestos, se estima que es probable se haya violado este gravemente como consecuencia de la omisión injustificada de convocar al Ayuntamiento de Tijuana a comisión de

55

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE  
SUBSECRETARIA G  
SECCION DE TRAMI  
CONSTITUCIONAL  
INCOSTITI



dictaminación, inobservándose las normas constitucionales y legales que rigen a dicho proceso, y

2) Se protege a la sociedad en mayor grado que al propio solicitante, en tanto existe un interés general en que el procedimiento legislativo respectivo se apegue a las reglas aplicables.<sup>3</sup>

De lo contrario, esto es de no otorgarse la suspensión solicitada, en el momento conducente se terminaría declarando la incorporación, promulgando y publicando, quedando sin materia la controversia constitucional.

Asimismo, se solicita la concesión de la medida cautelar con base en la figura de la apariencia del buen derecho, ya que como se podrá apreciar de un análisis superficial de la materia objeto de impugnación, existe un alto grado de probabilidad de que la omisión reclamada resulte violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales por no haber sido convocado el Ayuntamiento de Tijuana a participar en la fase del proceso legislativo de dictaminación de la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112, por parte de la comisión correspondiente del congreso, derivado de una injustificada dispensa del trámite legislativo, siendo que existe claramente la atribución y el derecho de los Ayuntamientos a ser convocado y participaren dicha comisión, en términos de los artículos 30, fracción II y 82, apartado A, fracción III, ambos de la Constitución Política del Estado y 120 de la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

### **PETICIÓN EN LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE CONTROVERSIDAD CONSTITUCIONAL**

Si bien en principio de acuerdo con el artículo 105 fracción I último párrafo de la Constitución cuando una controversia constitucional es promovida por un municipio en contra del acto de un estado, los efectos de invalidez únicamente se surtirían respecto de las partes en la controversia.

<sup>3</sup> Sustenta lo anterior en lo aplicable, la jurisprudencia número 160/2000 del Pleno de la Suprema Corte, de rubro: SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIDAD CONSTITUCIONAL. ES FACTIBLE SUOTORGAMIENTO CONTRA LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE UNA NORMA ELECTORAL, CUANDO ESTOS ACTOS NO SE HAN EJECUTADO Y SE ALEGA, POR EL PODER EJECUTIVO, VIOLACIÓN AL DERECHO DE VETO.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA  
SECRETARIA G  
REGION DE TRAM  
CONSTITUCIONAL  
INCOSTIT

En el presente caso, además de estar ante una violación competencial, también se actualiza una omisión de dar participación a un órgano previsto en el proceso de creación normativa, lo que genera un vicio formal del desarrollo del proceso legislativo que trasciende a la validez del mismo y a la postre de la norma producto de éste, por lo que resulta inconstitucional y no puede surtir efectos, razón por la cual respetuosamente **se solicita la que en su momento la eventual declaración de invalidez que se resuelva, sea con efectos generales**, dado que la norma general tendría como consecuencia jurídica su inexistencia, derivado de la omisión del vicio sustantivo suscitado en el proceso legislativo.

En mérito de las consideraciones anteriores, procede que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación declare procedente y fundada la presente Controversia Constitucional, con todos los efectos y consecuencias que material y jurídicamente deriven y sean resultado directo o indirecto, de la misma.

#### V.- CAPITULO DE PRUEBAS

Con fundamento en los artículos 31 y 32, párrafo primero de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, se ofrecen como pruebas las siguientes:



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES ELECTORALES

**I) DOCUMENTAL PÚBLICA.-** Bando Solemne publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, de fecha 30 de noviembre de 2016, Tomo CVVIII, numero 53, de dicho órgano de difusión, y mediante el cual el Instituto Estatal Electoral de Baja California, declaró la validez de la elección de munícipes por el Ayuntamiento de Tijuana.

**II) DOCUMENTAL PÚBLICA.-** Acta 01, de la primera sesión de Cabildo, en la que se hizo constar la instalación del Ayuntamiento de Tijuana.

**III) DOCUMENTAL PÚBLICA.-** Oficio No. 15795, de fecha 8 de julio de 2019, suscrito por los diputados Edgar Benjamín Gómez Macías e Irías Maria Vázquez Aguiar, en su carácter de Presidente y Secretario respectivamente del Congreso del Estado de Baja California, mediante la cual remiten copia certificada de la iniciativa de Decreto que reforma el artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante Decreto 112 de

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE  
SUBSECRETARÍA DE  
SECCIÓN DE TRÁMITE  
CONSTITUCIONAL  
INCOSTITUT

fecha 11 de septiembre de 2014, de igual manera se anexa la certificación del extracto del acta de fecha 08 de julio de 2019, y demás anexos remitidos en copia.

**IV) PRESUNCIONAL.-** En su doble aspecto legal y humana, en todo lo que favorezca los intereses de esta autoridad.

**V) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.** Consistente en la convicción que surja del análisis de la totalidad de las constancias que obran agregadas al expediente en que se actúa.

Con las anteriores documentales, se acredita que los actos impugnados, afectan la esfera de atribuciones y causan un perjuicio en la esfera del municipio actor.

Las anteriores documentales se deberán desahogar por su propia y especial naturaleza, no obstante se solicita se les dé el justo valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 130, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia.

Por lo antes expuesto y fundado, a esa Suprema Corte, por su digno conducto, respetuosamente solicito:



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DE LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
GENERAL DE ACUERDO  
DE CONTROVERSIA  
ES Y DE ACCIONES DE  
CONSTITUCIONALIDAD

**PRIMERO.-** Tenerme por presentado en los términos del presente escrito con la personalidad que ostento, de conformidad con la documental que se exhibe en original y se describe en el inciso I) del Capítulo de Pruebas, **CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL** en contra de la omisión de convocar al Ayuntamiento de Tijuana a Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma de 08 de julio de 2019, mediante la cual se modificó el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, de fecha 11 de septiembre de 2014.

**SEGUNDO.-** Se me tenga por ofreciendo las probanzas descritas en el capítulo correspondiente y por exhibiendo las documentales que se indican, solicitando se admitan en la forma y términos planteados por no ser contrarias a la moral y al derecho.

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE  
SUBSECRETARIA G  
SECCION DE TRAMI  
CONSTITUCIONAL  
INCOSTITI

30 PRO AMERQUE

CIUDAD DE TIJUANA

**TERCERO.-** Tener como delegados a los profesionistas indicados en el proemio de este escrito, para los efectos precisados y por señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México el indicado en el mismo.

20 11 20 11 20

TRAMITE

**CUARTO.-** Otorgar la medida cautelar solicitada con los alcances expuestos.

20 11 20 11 20

**QUINTO.-** Darle trámite de ley a la demanda planteada y en su oportunidad declararla procedente y fundada para los efectos a que haya lugar.

Ciudad de México, a fecha de su presentación.

**PROTESTO LO NECESARIO**



**ANA MARCELA GUZMÁN VALVERDE**



**SÍNDICO PROCURADORA DEL XXII AYUNTAMIENTO  
DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.**



DE LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACION  
GENERAL DE ACUERDOS  
DE CONTROVERSIA  
ES Y DE ACCIONES DE  
JURISDICCIONALIDAD

20 11 20 11 20

RECIBIDO  
COMISIÓN DE  
DEFENSA  
20 11 20 11 20

**SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACION**

**2009 JUL 19 AM 11 09**

**OFICINA DE  
CERTIFICACIÓN JUDICIAL  
Y CORRESPONDENCIA**

*Recibi de un enviado en (26) Folios*

*Cont:*

- un oficio impreso a Colon en (1) Folio
- Copia certificada de iniciativa de decreto en (10) Folios
- Copia simple de acta de sesión (19) Folios
- Copia certificada de acta de sesión de Cabildo en (3) Folios, incluida su certificación
- Copia certificada de Periódico Oficial del Gobierno del estado de BAJA CALIFORNIA de fecha 30 de Noviembre de 2016 en (6) Folios, según sus certificaciones
- Así como (7) copias de traslado

**VICTOR JUAN RUIZ BARCENAS**



**PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE J  
SUBSECRETARÍA DE  
SECCIÓN DE TRAMITE  
CONSTITUCIONAL  
INSTITUTO**

**SECCION DE TRAMITE DE  
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES  
Y DE ACCIONES DE  
INCONSTITUCIONALIDAD**

**2009 JUL 19 AM 11 50**

**TRIBUNAL SUPLENTE DE  
JUSTICIA DE LA NACION  
SUBSENA. GRAL. ACIDYS.**





# Periódico Oficial

del Estado de Baja California

Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Baja California.



**Francisco Arturo Vega de Lamadrid**  
Gobernador del Estado

**Loreto Quintero Quintero**  
Director

Autorizado como correspondencia de segunda clase por la Dirección General de Correos el 25 de Marzo de 1958.

Las Leyes y demás disposiciones obligan por el solo hecho de publicarse en este periódico.

**Tomo CXXIII Mexicali, Baja California, 30 de noviembre de 2016. No. 53**

**Índice**

## NÚMERO ESPECIAL

### PODER LEGISLATIVO ESTATAL

#### **H. XXII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

**BANDO SOLEMNE DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA** mediante el cual se hace saber la integración de los mismos, para el periodo Constitucional comprendido del día 1 de Diciembre del año 2016 al 30 de Septiembre del año 2019..... **3**

**BANDO SOLEMNE DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA** mediante el cual se hace saber la integración de los mismos, para el periodo Constitucional comprendido del día 1 de Diciembre del año 2016 al 30 de Septiembre del año 2019..... **8**

**BANDO SOLEMNE DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA** mediante el cual se hace saber la integración de los mismos, para el periodo Constitucional comprendido del día 1 de Diciembre del año 2016 al 30 de Septiembre del año 2019..... **13**

**BANDO SOLEMNE DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA** mediante el cual se hace saber la integración de los mismos, para el periodo Constitucional comprendido del día 1 de Diciembre del año 2016 al 30 de Septiembre del año 2019..... **18**

**BANDO SOLEMNE DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA** mediante el cual se hace saber la integración de los mismos, para el periodo Constitucional comprendido del día 1 de Diciembre del año 2016 al 30 de Septiembre del año 2019..... **22**

**COTEJADO**

DE LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA PAZ  
MERAL DE ACUERDO  
DE CONTROVERSIAS  
Y DE ACORDADA  
CONCORDANCIA

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
SUBSECRETARIA GENERAL  
REGISTRACION DE TRAMITE D  
CONSTITUCIONALES Y  
INCONSTITUCIONALES



**XXII LEGISLATURA**  
El Poder Ciudadano



**A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, SE LES HACE SABER QUE LA HONORABLE XXII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN VIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 15 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 36 DE LA LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EXPIDE EL SIGUIENTE:**

**BANDO SOLEMNE  
PARA DAR A CONOCER LA DECLARACIÓN DE MUNÍCIPIES  
ELECTOS HECHA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE  
BAJA CALIFORNIA**

**PRIMERO.-** El Instituto Estatal Electoral de Baja California, declara la validez de la elección de Municipales por el Ayuntamiento de Tijuana, celebrada el 5 de junio de dos mil dieciséis en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016.

**SEGUNDO.-** De acuerdo con el cómputo de la elección y conforme a la "Constancia de Mayoría" a la planilla que obtuvo el mayor número de votos en la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Tijuana, a las "Constancias de Asignación de Regidores por el Principio de Representación Proporcional", así como del Oficio Número CGE/6333/2016 del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral, documentación recibida en Oficialía de Partes del Congreso del Estado el 20 de junio, 11 y 29 de noviembre de la presente anualidad, respectivamente, los siguientes ciudadanos se declaran electos para ser miembros del Ayuntamiento de Tijuana para el período comprendido del 1 de diciembre del año 2016 al 30 de septiembre del año 2019:

LA FEDERACIÓN  
NACIONAL DE LA NACIÓN  
DE ACUERDO  
CON CONTROVERSIAS  
DE ACCIONES DE  
INVALIDACIÓN

**COTEJADO**

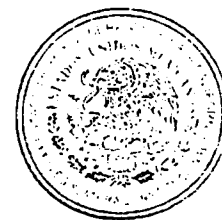
SIN TEXTO



ESTADOS UNIDOS  
DE AMERICA  
NORTE  
INSTITUCIONALES  
INSTITUCIONALES



**XXII LEGISLATURA**  
El Poder Ciudadano



**JUAN MANUEL GASTELUM BUENROSTRO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO

**EDUARDO ALEJANDRO TERREROS MARTÍNEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

**ANA MARCELA GUZMÁN VALVERDE**  
SÍNDICO PROCURADOR PROPIETARIO

**GEORGINA SUSANA ESCOBEDO LARROQUE**  
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE

**ARNULFO GUERRERO LEÓN**  
REGIDOR PROPIETARIO

**DAVID MONDACA CAMACHO**  
REGIDOR SUPLENTE

**MYRNA GONZÁLEZ MEDINA**  
REGIDOR PROPIETARIO

**MARÍA DE LA LUZ MORALES RICO**  
REGIDOR SUPLENTE

**ROGELIO PALOMERA HERNÁNDEZ**  
REGIDOR PROPIETARIO

**EDGAR VILLALVAZO MELENDREZ**  
REGIDOR SUPLENTE

**ELVIA RANGEL GARCÍA**  
REGIDOR PROPIETARIO

**KARLA YITZEL SALAS VÁSQUEZ**  
REGIDOR SUPLENTE

**COTEJADO**

DE LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
GENERAL DE ACUERDO  
DE CONTROVERSIAS  
Y DE ACCIONES DE  
NACIONALIDAD

SIN TEXTO



ESTADOS UNIDOS  
PODER EJECUTIVO  
SUBSECRETARÍA DE  
SEGURIDAD INTERIOR  
COMANDO EN JEFE  
FISCALÍA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
GOBIERNO EJECUTIVO  
GOBERNADOR  
CIUDAD DE Tijuana, B.C.



**XXII LEGISLATURA**  
El Poder Ciudadano



**LUIS PÉREZ SAUCEDO**  
REGIDOR PROPIETARIO

**CÉSAR ANIBAL PALENCIA CHÁVEZ**  
REGIDOR SUPLENTE

**KARINA FERNANDA DEL REAL ORONA**  
REGIDOR PROPIETARIO

**VANESSA CHÁVEZ CANTÚ**  
REGIDOR SUPLENTE

**LUIS TORRES SANTILLÁN**  
REGIDOR PROPIETARIO

**JOSÉ VICENTE JIMÉNEZ OCEGUERA**  
REGIDOR SUPLENTE

**MARIBEL IVETTE CASILLAS RIVERA**  
REGIDOR PROPIETARIO

**INES CHÁVEZ RUÍZ**  
REGIDOR SUPLENTE

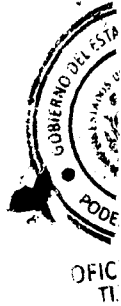
**JOSÉ MANUEL DE JESÚS ORTÍZ AMPUDIA**  
REGIDOR PROPIETARIO

**JOSÉ SANTOS CASTAÑEDA ULLOA**  
REGIDOR SUPLENTE

**MÓNICA JULIANA VEGA AGUIRRE**  
REGIDOR PROPIETARIO

**TERESA DE JESÚS ESCOBAR GÜEMES**  
REGIDOR SUPLENTE

COPIA  
DE LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
GENERAL DE ACUERDOS  
E DE CONTROVERSIA  
S DE ACCIONES D  
CIONALIDAD



SIN TEXTO

SECRETARIA DE  
INTERIORES  
SECRETARIA DE  
GOBIERNO  
SECRETARIA DE  
JUSTICIA





XXII LEGISLATURA

El Poder Ciudadano



COTEJADO

**MANUEL FRANCISCO RODRÍGUEZ MONARREZ**  
REGIDOR PROPIETARIO

**CONSTANTINO MARTÍN PRESA SIORDIA**  
REGIDOR SUPLENTE

**ELIGIO VALENCIA LÓPEZ**  
REGIDOR PROPIETARIO

**MIGUEL PÉREZ TORRES**  
REGIDOR SUPLENTE

**JULIETA AGUILERA CASTRO**  
REGIDOR PROPIETARIO

**ADRIANA ORNELAS MARAVILLA**  
REGIDOR SUPLENTE

**MARCO ANTONIO ROMERO ARIZPE**  
REGIDOR PROPIETARIO

**OSCAR MANUEL MONTES DE OCA RODRÍGUEZ**  
REGIDOR SUPLENTE

**ROBERTO JOSÉ QUIJANO SOSA**  
REGIDOR PROPIETARIO

**JUAN CARLOS REYNA SORIA**  
REGIDOR SUPLENTE



LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
INSTITUTO FEDERAL DE LA FEDERACIÓN  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
GENERAL DE ACUERDOS  
DE CONTROVERSIA  
ELECTORAL Y DE ACCIONES DE  
NULIDAD

**TERCERO.-** De conformidad con la declaración hecha por el Instituto Estatal Electoral de Baja California, los Municipales electos reúnen los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución Local y la Ley Electoral.



**SIN TEXTO**



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE  
SUBSECRETARÍA G  
SECCIÓN DE TRAM  
CONSTITUCIONAL  
— INCOSTIT



XXII LEGISLATURA

El Poder Ciudadano



**MANUEL FRANCISCO RODRÍGUEZ MONARREZ**  
REGIDOR PROPIETARIO

**CONSTANTINO MARTÍN PRESA SIORDIA**  
REGIDOR SUPLENTE

**ELIGIO VALENCIA LÓPEZ**  
REGIDOR PROPIETARIO

**MIGUEL PÉREZ TORRES**  
REGIDOR SUPLENTE

**JULIETA AGUILERA CASTRO**  
REGIDOR PROPIETARIO

**ADRIANA ORNELAS MARAVILLA**  
REGIDOR SUPLENTE

**MARCO ANTONIO ROMERO ARIZPE**  
REGIDOR PROPIETARIO

**OSCAR MANUEL MONTES DE OCA RODRÍGUEZ**  
REGIDOR SUPLENTE

**ROBERTO JOSÉ QUIJANO SOSA**  
REGIDOR PROPIETARIO

**JUAN CARLOS REYNA SORIA**  
REGIDOR SUPLENTE

**TERCERO.-** De conformidad con la declaración hecha por el Instituto Estatal Electoral de Baja California, los Municipales electos reúnen los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución Local y la Ley Electoral.

78



SIN TEXTO



SECRETARÍA DE  
GOBIERNO Y JUSTICIA  
SECRETARÍA DE  
GOBIERNO Y JUSTICIA  
SECRETARÍA DE  
GOBIERNO Y JUSTICIA  
SECRETARÍA DE  
GOBIERNO Y JUSTICIA



**XXII LEGISLATURA**  
El Poder Ciudadano

**CUARTO.-** Se cita a los Municipales que resultaron electos para integrar el XXII Ayuntamiento del Municipio de Tijuana, Baja California, a presentarse el día 30 de noviembre del 2016 a la hora y lugar donde se declare Recinto Oficial Municipal, de conformidad a la Convocatoria que emita el Ayuntamiento saliente, a efecto de protestar el fiel ejercicio de sus cargos, en Sesión Solemne.

**QUINTO.-** Remítase el presente Bando Solemne al Titular del Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**SEXTO.-** Publíquese el presente Bando Solemne en la Gaceta Parlamentaria y en el portal de internet del Congreso del Estado.

La información que se da a conocer en el punto **SEGUNDO** del presente Bando Solemne, corresponde a la que fue notificada por el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California al Congreso del Estado, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, la cual en su caso, estará sujeta a las resoluciones que se emitan por la autoridad jurisdiccional en la materia.

**ATENTAMENTE**

Mexicali, B.C., a 29 de noviembre de 2016.

**Por la Mesa Directiva**

DE LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
GENERAL DE ACUERDO  
DE CONTROVERSIAS  
Y DE ACCIONES DE  
CONSTITUCIONALIDAD

DIP. RAUL CASTAÑEDA POMERO  
Presidente

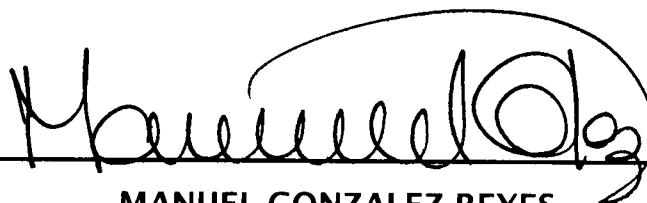
DIP. MARIA TRINIDAD VACA CHACÓN  
Prosecretario

EL SUSCRITO **MANUEL GONZALEZ REYES**, DELEGADO DE OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO EN FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, ASI COMO TAMBIEN EN EL ARTICULO 58 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERNO DE OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011.

## **CERTIFICA:**

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS SON COPIA FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO. MISMO QUE SE ENCUENTRA EN CUSTODIA EN ESTA OFICINA A MI CARGO, SE EXPIDE EN SEIS HOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS.

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 13 DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE



**MANUEL GONZALEZ REYES**  
**DELEGADO DE OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO**  
**EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**



OFICIALIA MAYOR  
TIJUANA, B.C.

OFICIALIA MAYOR  
TIJUANA, B.C.  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
SECRETARIA DE GOBIERNO



**TIJUANA**

**---ACTA 01.-** En la Ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las catorce horas con quince minutos del día treinta de noviembre de dos mil dieciséis, constituidos en el Patio Central de Palacio Municipal, habilitado como recinto oficial para celebrar **Sesión Solemne de Cabildo para la Instalación del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California**, los integrantes del Honorable Ayuntamiento electo para ejercer los cargos del periodo comprendido del uno de diciembre de dos mil dieciséis al treinta de septiembre de dos mil diecinueve; cuyos nombres y firmas constan en la lista de asistencia que corre agregada a la presente acta como apéndice número uno, presididos por el Presidente Municipal Electo, C. Juan Manuel Gastelum Buenrostro y ante la fe del Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Carlos Mejía López, proceden a su desahogo bajo el Orden del Día contenido en la Convocatoria emitida por el Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento Constitucional de Tijuana, Baja California, C. Jorge Astiazarán Orci y publicada en el diario de mayor circulación en el Municipio, bajo el tenor siguiente: 1.- Honores a la Bandera, entonación del Himno Nacional, juramento a la Bandera y Canto a Baja California; 2.- Presentación de Invitados Especiales y testigos de honor; 3.- Toma de lista nominal asistencia de los Múicipes entrantes y declaración de quórum legal; 4.- Rendición de protesta legal de los miembros del Ayuntamiento ante la representación del Congreso del Estado (Presidente o representante) y la comunidad del territorio municipal; 5.- Declaratoria de instalación del H. Ayuntamiento Constitucional de Tijuana, Baja California por el Presidente Municipal, Lic. Juan Manuel Gastelum Buenrostro; 6.- Designación por parte del Cabildo, del ciudadano que ejercerá el cargo de Secretario de Gobierno Municipal; 7.- Toma de protesta al Secretario de Gobierno Municipal y otorgamiento de posesión del cargo de Secretario Fedatario del Ayuntamiento; 8.- Uso de la voz de los Ciudadanos Regidores Coordinadores de cada una de las fracciones políticas representadas en este H. Ayuntamiento, para los efectos de que realicen sus posicionamientos respecto de las políticas públicas que deberán regir a la nueva administración: 8 a).- Regidor representante del Partido del Trabajo; 8 b) Regidor representante del Partido Encuentro Social; 8 c) Regidor representante del Partido Movimiento Regeneración Nacional; 8 d) Regidor representante Independiente; 8 e) Regidor representante del Partido Revolucionario Institucional; 8 f) Regidor representante del Partido Acción Nacional; 9.- Mensaje del Presidente Municipal, Juan Manuel Gastelum Buenrostro; 10.- Clausura de la Sesión Solemne. -----



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DE ACOSO  
SECRETARÍA DE CONTROVERSIAS Y DE ACCIÓN  
JUDICIAL

GOBIERNO

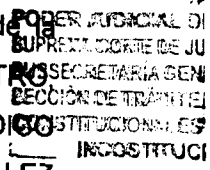
COTEADO

En desahogo del **Punto 1** del Orden del Día, se rindieron los honores cívicos a nuestra Enseña Nacional contando con la participación de la Escolta y Banda de Guerra del 28º. Batallón de Infantería, para acto seguido entonar el Himno Nacional y el Canto a Baja California.-----

Tocante al **Punto 2** del Orden del Día, se hace la presentación de los invitados especiales y testigos de honor, entre los que se encuentra el Lic. Francisco Vega de la Madrid, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California; Sra. Brenda Ruachode Vega, Presidenta del Patronato Del DIF de Baja California; Diputado Raúl Castañeda Pomposo, Presidente de la mesa directiva de la XXII Legislatura del Estado de Baja California; Coronel de Infantería Raúl Olvera Sumano, Comandante del 28 Batallón de Infantería; Francisco Rueda Gómez, Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California; Loreto Quintero Quintero, Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Baja California; Jorge Astiazarán Orcí, Presidente Municipal del XXI Ayuntamiento de Tijuana, funcionarios de los órdenes de gobierno, varios ex presidentes municipales, así como representantes de la sociedad civil y medios de comunicación.-----

Acto seguido se cede el uso de la voz al Secretario Fedatario Lic. Carlos Mejía López para que continúe con el desahogo del Orden del Día. El Secretario Fedatario dió lectura al Orden del día, antes descrito, haciendo la aclaración que toda vez que el Bando Solemne emitido por el H. Congreso de Baja California no asigne regiduría al Partido del Trabajo, se hará caso omiso al punto 8 inciso a) del Orden del día.---

Respecto al **Punto 3**, el Secretario Fedatario del XXI Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Lic. Carlos Mejía López, tomó lista de los presentes, dando fe de la asistencia de los Ciudadanos JUAN MANUEL GASTELUM BUENROSTRO, PRESIDENTE MUNICIPAL; ANA MARCELA GUZMÁN VALVERDE, SINDICO PROCURADOR, ARNULFO GUERRERO LEÓN, REGIDOR; MYRNA GONZÁLEZ MEDINA, REGIDOR; ROGELIO PALOMERA HERNÁNDEZ, REGIDOR; ELVIA RANGEL GARCÍA, REGIDOR; LUIS PÉREZ SAUCEDO, REGIDOR; KARINA FERNANDA DEL REAL ORONA, REGIDOR; LUIS TORRES SANTILLÁN, REGIDOR; MARIBEL IVETTE CASILLAS RIVERA, REGIDOR; JOSE MANUEL DE JESÚS ORTÍZ AMPUDIA, REGIDOR; MÓNICA JULIANA VEGA AGUIRRE, REGIDOR; MANUEL FRANCISCO RODRÍGUEZ MONARREZ, REGIDOR, ELIGIO VALENCIA LÓPEZ, REGIDOR; MARCO ANTONIO ROMERO ARIZPE, REGIDOR;





ROBERTO JOSÉ QUIJANO SOSA, REGIDOR; estando presentes 16 de los 17 integrantes del XXII Ayuntamiento de Tijuana, con lo que se declaró quórum legal para celebrar la Sesión Solemne-----

Pasando al **Punto 4** del Orden del Día, los miembros del Ayuntamiento entrante Presidente Municipal, Síndico Procurador y regidores presentes, rindieron formal y protocolariamente la protesta legal ante el representante del Congreso del Estado y la comunidad tijuanense.-----

En atención al contenido del **Punto 5** del Orden del Día, el C. Juan Manuel Gastelum Buenrostro, Presidente Municipal de Tijuana, Baja California, declara legal y formalmente instalado el Ayuntamiento que funcionará del uno de diciembre de dos mil dieciséis al treinta de septiembre de dos mil diecinueve.-----

En desahogo del **Punto 6** del Orden del Día, se sometió a consideración del Cuerpo Edilicio una terna para la designación del ciudadano que ejercerá el cargo de Secretario de Gobierno Municipal, la que fue leída por el Presidente Municipal, procediendo el Secretario de Gobierno Municipal a tomar la votación nominal respecto a la primera propuesta con lo que los Regidores Arnulfo Guerrero León, Myrna González Median, Rogelio Palomera Hernández, Elvia Rangel García, Luis Pérez Saucedo, Karina Fernanda Del Real Orona, Luis Torres Santillán, Maribel Ivette Casillas Rivera, José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia, Mónica Juliana Vega Aguirre, Manuel Francisco Rodríguez Monarrez, Eligio Valencia López, Marco Antonio Romero Arizpe, Roberto José Quijano Sosa, la Síndico Procurador Ana Marcela Guzmán Valverde y el Presidente Municipal Juan Manuel Gastelum Buenrostro, emitieron su voto a favor de esta primera propuesta a efecto de nombrar al C. Lic. Raúl Felipe Luévano Ruiz para ejercer el cargo mencionado.-----

Acto seguido se procedió al desahogo del **Punto 7** del Orden del Día, pidiéndose al Lic. Raúl Felipe Luévano Ruiz su presencia frente al Presídium con la finalidad de tomarle la protesta de Ley, y una vez habiendo protestado cumplir leal y patrióticamente el cargo de Secretario de Gobierno Municipal, el Presidente Municipal le otorgó la posesión de Secretario Fedatario del Ayuntamiento, para ejercer sus funciones a partir de ese momento en términos de la reglamentación municipal, agradeciendo al Lic. Carlos Mejía López, Secretario Fedatario saliente las gestiones realizadas a favor del Ayuntamiento.-----

En Desahogado del **Punto 8** del Orden del Día, los Regidores Mónica Juliana Vega Aguirre en representación de la fracción del Partido Encuentro Social; Regidor

CONTINUO

COTEADO

Marco Antonio Romero Arizpe representante de la fracción del Partido Movimiento Regeneración Nacional; Roberto José Quijano Sosa representante Independiente; Eligio Valencia López representante de la fracción del Partido Revolucionario Institucional y Arnulfo Guerrero León representante de la fracción del Partido Acción Nacional, hicieron uso de la palabra para fijar las posiciones de cada fracción política representada en el Cabildo, respecto a las políticas públicas que consideran deberán regir a la nueva administración. El Regidor Marco Antonio Romero Arizpe al hacer uso de la voz, hizo la aclaración que el nombre correcto del Partido que representa es Partido Movimiento Regeneración Nacional.-----

Acto continuo, en desahogo del **Punto 9** del Orden del Día, el Presidente Municipal Juan Manuel Gastelum Buenrostro, dirigió su Mensaje a la Comunidad Tijuanaense.- Por lo que corresponde al **Punto 10** del Orden del Día, relativo a la clausura de la sesión, habiéndose desahogado todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, el Presidente Municipal agradeció a los presentes el haber honrado el acto, para declarar formalmente clausurada la Sesión Solemne de Instalación del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a las quince horas con quince minutos del día treinta de noviembre de dos mil dieciséis y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente Municipal da por formalmente clausurada esta Sesión Solemne de instalación del Ayuntamiento Constitucional de Tijuana, Baja California. DOY FE.---



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION  
SECRETARIA DE JUSTICIA  
SECCION DE TRAMITE  
CONSTITUCIONALES  
INSTITUCION

**LIC. LEOPOLDO GUERRERO DÍAZ**, Secretario de Gobierno Municipal del H. Ayuntamiento de Tijuana Baja California, con fundamento en el artículo 5 Fracción III de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California y artículo 17 fracción I del Reglamento de la Administración Pública del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. -----

**CERTIFICA:**

Que el presente legajo es copia fiel y exacta de su original que tuve a la vista y que corresponde al acta de la sesión solemne de cabildo para la instalación del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, la cual obra en los archivos generales de la Dirección de Asuntos de Cabildo de esta Secretaría de Gobierno Municipal, bajo el numeral uno (01) y consta de dos (02) fojas útiles escritas por el anverso y el reverso. -----

Para todos los efectos legales a que haya lugar, se extiende la presente **CERTIFICACIÓN**, en la Ciudad de Tijuana, Baja California, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil dieciocho.-

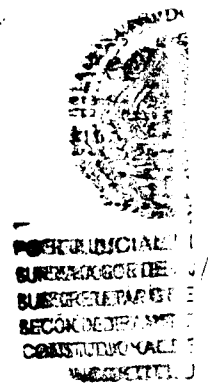
**SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

**LIC. LEOPOLDO GUERRERO DÍAZ**



LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACION  
ERAL DE ACUERDO  
DE CONTROVERSIAS  
Y DE ACCIONES DE  
ONALIDAD

SIN TEXTO





DEPENDENCIA: CONGRESO DEL ESTADO

SECCION: PRESIDENCIA

OFICIO No.

EXPEDIENTE:

15795

**ASUNTO:** Se remite para su opinión Iniciativa de Decreto que reforma el artículo octavo transitorio de la Constitución Local.

**LIC. JUAN MANUEL GASTÉLUM BUENROSTRO**  
 Presidente Municipal del H. XXII Ayuntamiento de Tijuana  
 Presente

Por este conducto, y para los efectos constitucionales establecidos en el Artículo 112 de la Constitución Política de nuestro Estado, nos permitimos remitir copia debidamente certificada de la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante Decreto número 112 de fecha 11 de septiembre de 2014; de igual manera se anexa la certificación del extracto del acta en la cual se originaron los debates que dieron origen a dicha reforma en la Sesión Extraordinaria celebrada el día 08 de julio de 2019, en la cual se aprobó el documento de referencia.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi distinguida consideración y respeto.

ATENTAMENTE

Mexicali, B.C., a 08 de julio de 2019  
 Por la Mesa Directiva

**DIP. EDGAR BENJAMÍN GÓMEZ MACÍAS**  
 Presidente

**DIP. IRAÍS MARÍA VÁZQUEZ AGUIAR**  
 Secretaria

DE LA FECHA DE  
 JUSTICIA EN LA  
 VERBAL DE LA  
 E DE CONTROVERSIAS  
 Y DE ACCIONES DE  
 NACIONALIDAD



C.c.p.- Dip. Víctor Manuel Morán Hernández.- Integrante de la H. XXII Legislatura del Estado.  
 C.c.p.- Lic. Daniel de León Ramos.- Director de Procesos Parlamentarios de la H. XXII Legislatura.  
 C.c.p.- Lic. Javier Sánchez Chacón.- Coordinador de Órganos de Gobierno  
 C.c.p. Lic. Anwar Ramos Gaona, Director de Consultoría Legislativa de la H. XXII Legislatura.  
 EBGMI/IMVA/Js'

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE  
SUBSECRETARÍA DE  
SECCIÓN DE TRÁMIT  
CONSTITUCIONALE  
NOCOSTITU



JUL 09 2019

**INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA  
EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
BAJA CALIFORNIA, APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 112  
DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014**

DIRECCIÓN DE PROCESOS PARLAMENTARIOS  
DEPTO. DE PROCESOS PARLAMENTARIOS

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

APROBADO EN VOTACIÓN CON  
CEQUA CON LOS RESULTADOS  
A FAVOR 21 CONTRA 0  
ASTENCIÓN 1

El pueblo de Baja California acudió a las urnas confirmando su vocación democrática y su convicción que sólo por las vías pacíficas, institucionales y libres se podrá establecer un sistema de gobierno viable, legítimo y con sustento en el interés colectivo de un estado que construye un destino diferente y está empeñado en acabar con la injusticia social, con la incertidumbre y con los obstáculos que impiden el progreso.

Apegados a derecho, atendiendo el mandato constitucional y, sobre todo, privilegiando el derecho y la libertad de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes, nuestro estado ha realizado un proceso electoral ejemplar, un proceso electoral donde todos los ciudadanos votaron y eligieron un gobierno que permita transitar al desarrollo, a la justicia y equidad.

Son los procesos democráticos los que legitiman una sociedad y un gobierno empeñados en transformar su realidad por un futuro más digno y más justo. Esto parte de la vocación primaria de nuestro pueblo por construir una entidad fuerte, unida y comprometida.

Nadie puede atentar contra esta aspiración legítima del pueblo de Baja California. Nadie puede ir contra una decisión soberana de romper ataduras que condenan a los pueblos a vivir en la pobreza, en la injusticia y en la marginación. Es una obligación ver hacia adelante, abrir las puertas de la justicia y establecer las condiciones sociales, democráticas y legales para que el sueño colectivo de dignificación social sea una realidad.

Baja California es hoy una convocatoria social y un reto colectivo. No hay espacio para las exclusiones, no hay tiempo para los debates estériles, no hay motivos para detener la marcha de nuestra historia como pueblo dedicado al trabajo y a la transformación.

El futuro se construye mirando y trabajando hacia adelante, retomando la grandeza de nuestro pasado y estando a la altura de las exigencias y aspiraciones de la sociedad actual y de las nuevas generaciones. Este es el único objetivo que

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE  
SUBSECRETARÍA DE  
SECCIÓN DE TRABAJO  
CONSTITUCIONAL  
EXCOSTITI





como sociedad y como pueblo organizado nos debe convocar. El llamado es a la suma, es a poner por delante el interés superior de los habitantes de este Estado generoso y noble.

Mirando hacia adelante y hacia el futuro que estamos obligados a crear, no se puede pensar en tiempos cortados, en procesos políticos inacabados, en truncar un proyecto que debe ser de largo alcance, con los espacios necesarios y adecuados para hacer posible las acciones públicas que benefician a todos.

Pensar en grande, imaginar en conjunto, luchar unidos, trabajar en un solo frente, es una tarea fundamental. También es inexcusable enfrentar la difícil situación económica que enfrenta nuestro estado. Dilapidar los recursos del estado, malgastarlo, no está permitido ni es recomendable en esta situación de emergencia financiera.

El compromiso colectivo es trabajar para ser más eficaces y para ser más firmes en los actos públicos, en las acciones institucionales y en todos los procesos de construcción de una sociedad más equitativa. Solo será posible si se establece un gran acuerdo político que trascienda colores y militancias, porque en esta hora de Baja California no caben los disensos sustentados en las visiones parciales de corto plazo.

Baja California actualmente se enfrenta al mayor endeudamiento público de su historia y lo único que hace frente a este endeudamiento es sin lugar a dudas el apoyo de los bajacalifornianos por impulsar la economía de la entidad y esto se puede palpar en su producto interno bruto cuya media según datos del INEGI es del 2.9%, esto es el resultado del trabajo y esfuerzo de los distintos sectores económicos por generar empleos y mantener viva la inversión en el Estado ya que en el 2018 la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 1,741,615 personas, lo que representó el 62.9% de la población en edad de trabajar. Del total de la PEA, el 97.8% está ocupada y el 2.2% desocupada, en contraposición a estas cifras podemos ver que el gobierno del estado del 100% de sus ingresos según el presupuesto de egresos 2019, tan solo el 10.3% son recursos propios y el 89.7% son participaciones federales.

No se debe seguir escribiendo números rojos en el erario público y en el propio futuro de Baja California, la vida democrática de nuestro Estado, se ha expresado mediante la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, este ejercicio democrático ha representado un costo financiero que cada vez ha ido en incremento, y hoy la ciudadanía nos exige hacer reformar la Constitución Política del Estado, ya que ha manifestado en distintos foros, consultas, debates y

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE J  
SUBSECRETARIA DE  
SECCION DE TRAMITE  
CONSTITUCIONAL. E  
INSTITUT



diversos medios de expresión social, que no es posible que en menos de dos años estemos iniciando un nuevo proceso electoral, que lo único que representará, es un golpe a las finanzas públicas, a las instituciones e indudablemente al desarrollo económico de nuestro Estado, y todo, por no querer escuchar lo que el pueblo demanda. y que es, dejar de dilapidar los recursos públicos en un proceso electoral que no representa beneficio alguno para el pueblo y que solo lo alejará de las urnas.

Estas razones nos obligan hacer una pausa y analizar el impacto financiero procesos electorales contemporáneos han tenido en Baja California.

En el año 2007, se celebraron elecciones para el cargo a Gobernador, en dicha elección de acuerdo al presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2007, y publicada en el Periódico Oficial número 54, tomo CXIII de fecha 22, de diciembre de 2006, se destinaron los siguientes recursos:

Al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, le otorgaron la cantidad de \$13,114,504.00 y al Instituto Estatal Electoral de Baja California, le correspondió la cantidad de \$202,319,197.00 entre ambas instituciones el proceso electoral de 2007, donde resulto ganador de la elección el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, se sufragó la cantidad de **\$215'438,701.00**.

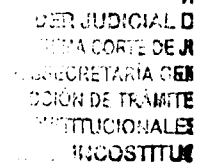
Para la elección del año 2013, el presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2013, y publicado en el Periódico Oficial número 59, tomo CXIX de fecha 31 de diciembre de 2012, precisa que el recurso que correspondió en materia electoral derivado del proceso fue el siguiente:

Al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California le otorgaron la cantidad de \$19,257,722.54 y al Instituto Estatal Electoral de Baja California le correspondió la cantidad de \$276,373,358.80 entre ambas instituciones el proceso electoral de 2013, donde resulto ganador de la elección el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, se sufragó la cantidad de **\$295'631,081.34** esto es **\$80,192,380.34** más que el proceso anterior.

Para el proceso electoral del año 2019, el presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2019, y publicado en el Periódico Oficial número 60, tomo CXXV de fecha 31 de diciembre de 2018, en el que se estableció que el recurso destinado a dicho proceso fue el siguiente:

Al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, le otorgaron la cantidad de \$24,248,823.60 y al Instituto Estatal Electoral de Baja California le

SIN TEXTO





correspondió la cantidad de \$469,654,626.60 entre ambas instituciones el proceso electoral de 2019, donde resulto ganador de la elección el C. Jaime Bonilla Valdez, se sufrago la cantidad total de \$493'903,450.20, esto es \$198,272,368.86, más que el proceso anterior.

En esta elección, el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Baja California en sesión ordinaria el día 02 de mayo de 2019, y con número de decreto 345, otorgó una ampliación de recursos al Instituto Estatal Electoral de Baja California por la cantidad de \$10,047,838.00.

Sumando esta ampliación, el proceso electoral de 2019, tuvo un costo total por la cantidad de \$503'951,288.20 con esto en total de la elección le costo al estado un monto de \$208,320,206.86 que el proceso inmediato anterior.

Tomando en cuenta las cifras anteriores, resulta más que motivado, la exigencia de la ciudadanía respecto a no celebrar elecciones en un periodo tan corto, y es que no se puede seguir pasando por alto el incremento súbito del presupuesto que se ejerce en cada proceso electoral y más aún cuando Baja California es uno de los Estados más endeudados del país, cuando estamos en la época de la austeridad republicana, cuando lo que se necesita es que el recurso público se ejecute en acciones de beneficio tangible para la ciudadanía; por que pensar en celebrar una nueva elección de Gobernador para el año 2021, cuando esto representaría erogar una suma mayor a los quinientos millones de pesos, lo cual pondría a nuestra Entidad en una situación financiera más precaria, sin que medie una razón real y de beneficio social para los bajacalifornianos, los ciudadanos están cansados de la corrupción y de los gastos excesivos.

Resulta imperante ampliar el periodo de duración del encargo del Gobernador, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, ya que de lo contrario no podrían establecerse de forma adecuada el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes regionales, lo cual indiscutiblemente generaría incertidumbre económica, política y social, aunado al gasto extraordinario que conllevaría llevar a cabo elecciones para gobernador en 2021; consecuencia del corto periodo de duración del cargo de Gobernador del Estado, el cual es de 2 años y 10 meses, de conformidad con lo señalado en el transitorio octavo del decreto 112, relativo al artículo 44 de nuestra Constitución Política Local, elecciones que debido al costo económico, resultarían en un duro golpe a las de por si maltrechas finanzas publicas del estado, lo cual se reflejaría de manera inevitable en la economía, los servicios públicos y el bienestar integral de los bajacalifornianos.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE D  
SUBSECRETARIA  
SECCION DE TRA  
CONSTITUCION  
MCOST



La ampliación del periodo de duración del encargo para Gobernador del Estado electo a 5 años en lugar de 2 años 10 meses, resulta idóneo, para satisfacer el propósito constitucional de homologar las elecciones estatales con las elecciones federales del proceso electoral 2024, conforme con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base V y 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La voluntad y el sentir de los bajacalifornianos plasmada en esta iniciativa, se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipulados en la fracción segunda del artículo 105, donde se impuso un periodo de 90 días antes de iniciado un proceso para la promulgación y publicación de leyes electorales y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales, esto ultimo denota la viabilidad de reformar el transitorio octavo del Decreto 112, relativo al artículo 44 de nuestra Constitución Política Local y así poder darle a Baja California un Gobierno que en conjunto con el Gobierno Federal lleven un periodo de gobernabilidad más estable y en benéfico de nuestra entidad.

La presente iniciativa, no es una norma general electoral, pues no tiene injerencia en el régimen normativo de los procesos electorales del Estado, propiamente dicho o en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, pues dicha iniciativa no propone regular aspectos vinculados directa o indirectamente o que deban influir en o con los procesos electorales de una manera o de otra, "como por ejemplo, distritación o redistribución, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas, sus sanciones; mucho menos trastoca o infiere en alguno de los principios de la materia electoral, respecto a las elecciones, sufragio, candidatos y demás; por lo que la presente iniciativa no impacta en aspectos relativos a los procesos electorales, de los previstos por la Constitución Federal.

Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia numero P. XVI/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente:

**NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL. PARA QUE PUEDAN CONSIDERARSE CON TAL CARÁCTER E IMPUGNARSE A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEBEN REGULAR ASPECTOS RELATIVOS A LOS PROCESOS ELECTORALES PREVISTOS DIRECTAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 25/99,**

ORIGINAL TEXT

PODERESORIO  
SUPLENTO  
SUBSIDIARIO  
SECUNDARIO  
CONSTITUCIONAL  
L. 10511





publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 255, con el rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.", sostuvo que las normas electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con tales procesos o que deban influir en ellos. Ahora bien, de los artículos 41, primer y segundo párrafos, 115, fracciones I y VIII, 116, fracción IV, inciso a), y 122, apartado C, bases primera y segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que ésta prevé principios para la elección de determinados servidores públicos, a saber: los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos), lo que implica que a otros niveles puede preverse legalmente la elección de ciertos funcionarios, pero los procesos no se regirán por dichos principios, por lo que si una ley establece que la designación de un servidor público diverso a los señalados debe hacerse mediante elecciones, ello no le confiere el carácter de electoral, porque para tener tal calidad es necesario que regule aspectos relativos a los procesos electorales, que son los previstos por la Constitución Federal.

Aunado a lo anterior, es necesario comentar que esta iniciativa no puede considerarse como una modificación fundamental, tomando como referencia uno de los elementos de procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, el cual se cita a continuación:

DE LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA Y DE ACCIONES  
GENERAL DE ACUERDO  
E DE CONTROVERSIAS  
ES Y DE ACCIONES DE  
CIONALIDAD

"Una modificación a una ley electoral, sin importar su jerarquía normativa, será de carácter fundamental cuando tenga por objeto, efecto o consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, a través de la cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de los actores políticos, incluyendo a las autoridades electorales".

Así, las modificaciones legales no serán fundamentales, aun cuando se reformen preceptos que rigen el proceso electoral, si el acto legislativo no afecta los elementos rectores señalados, de forma que repercuta en las reglas a seguir durante el proceso electoral; por consiguiente, sí las modificaciones tienen como

214 TEXTO



PODERA JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE J  
SUBSECRETARIA DE  
SECCION DE TRAMITE  
CONSTITUCIONAL E  
INCIDENTES



única finalidad precisar y dar claridad a los supuestos normativos correspondientes desde su aspecto formal, la reforma no tendrá el carácter mencionado". (**Acción de inconstitucionalidad 139/2007**)

Como se puede apreciar, esta modificación no altera ninguna de las bases, reglas u otro elemento rector de los procesos electorales, pues no se crean obligaciones nuevas, tampoco introduce nuevas reglas, no trastoca el rubro del financiamiento público, ni mucho menos crea, modifica o elimina derechos a quienes pudieran participar, o bien a los partidos políticos participantes, de igual manera esta iniciativa no genera obligaciones de hacer o no hacer a las autoridades electorales, en este sentido es imperante precisar que existen excepciones las cuales han sentado precedentes en sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de ellas la (**Acción de inconstitucionalidad 139/2007**) que han sido acompañadas por la opinión de la Sala Superior de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual ya se han realizado modificaciones a leyes electorales en procesos ya iniciados, y que a pesar de haber sido controvertidas, resultaron operantes y pudieron aplicarse a los procesos electorales en turno, siendo esto corroborado al consultar en tesis de jurisprudencias, como la que se cita a continuación:

*P./J. 98/2006 del siguiente rubro: "CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO." Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1564, se refirió a dichas modificaciones como aquellas que alteran sustancialmente disposiciones que rigen o integran el marco legal aplicable al proceso electoral; en este orden, si las citadas modificaciones legislativas no son de naturaleza trascendental para el proceso electoral, por ser de carácter accesorio o de aplicación contingente, su realización dentro del proceso electoral no producirá su invalidez o, en su caso, la inaplicación al proceso correspondiente.*



DE LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  
DE CONTROVERSIAS ELECTORALES  
Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

En este mismo sentido y con la finalidad de nutrir la fundamentación legal de esta iniciativa, en lo referente a los alcances a la expresión "modificaciones legales fundamentales" se cita la siguiente tesis:

*P./J.87/2007 del siguiente rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN LA FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105*

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE J  
SUBSECRETARIA GE  
SECCION DE TRAMITE  
CONSTITUCIONALES  
INCOSTITUT



**DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"** El citado precepto establece que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber "modificaciones legales fundamentales". Por otra parte, del procedimiento de creación de dicha norma, se advierte que la intención del Órgano Reformador al establecer tal prohibición fue que, en su caso, las normas en materia electoral pudieran impugnarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ésta resolviera las contiendas antes del inicio del proceso electoral correspondiente, garantizando así el principio de certeza que debe observarse en la materia; sin embargo, la previsión contenida en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede considerarse como tajante, toda vez que admite la realización de reformas a las disposiciones generales en materia electoral ya sea dentro del plazo de 90 días anteriores al inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse o una vez iniciado éste, con la limitante de que no constituyan "modificaciones legales fundamentales".

Por lo anteriormente expuesto, reformar el Decreto No. 112, publicado en el Periódico Oficial Número 50, Sección I, Tomo CXXI, de fecha 17 de octubre de 2014, es totalmente viable, aunado al hecho de que el Congreso del Estado cuenta con la libertad de configuración legislativa, reconocida constitucionalmente, desde esa óptica, la jurisprudencia en materia constitucional ha sido constante, tanto en considerar proscrita la irretroactividad de la ley que irroga perjuicios al gobernado, como en estimar válidas las facultades del legislador para introducir nuevas normas, modificando o derogando las existentes de acuerdo con las necesidades que demande la sociedad.

EL LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
ERAL DE ACUERDO  
DE CONVENIO  
Y DE ACCIONES DE  
JONALIDAD

Con esta iniciativa atendemos al llamado del pueblo bajacaliforniano y al que la propia historia nos convoca por trabajar por la grandeza de Baja California. El futuro nos convoca a sumar esfuerzos y voluntades para ser hijos dignos de este tiempo y es la hora de nuestro pueblo. Baja California tiene destino y ese destino depende de lo que seamos capaces de hacer hoy.

Baja California tiene que construir su futuro con base en actos de ley, con determinación y con conciencia histórica. Nuestro origen y destino es de grandeza. Estamos llamados a sentar las bases para que esto sea una realidad. Esto es, se debe hoy trabajar para que nada se interponga en el acuerdo conjunto de trascender en el tiempo y en la memoria.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE J  
SUBSECRETARÍA GE  
SECCIÓN DE TRAMITE  
CONSTITUCIONALES  
INCOSTITUT



Por las anteriores consideraciones se presenta ante esta Honorable Asamblea, la presente:

**INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 112 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014**

**ARTÍCULO ÚNICO.** - Se reforma el artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante Decreto 112 de fecha 11 de septiembre del año 2014, para quedar como sigue:

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO AL SÉPTIMO.- ....**

**OCTAVO.-OCTAVO.-** Para efecto de la concurrencia de la elección de Gubernatura del Estado con el proceso electoral federal de 2024, la Gubernatura electa en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024.

La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2030. Por única ocasión el Gobernador del Estado electo en el proceso electoral de 2024, iniciará funciones el primero de noviembre de 2024 y concluirá el treinta y uno de agosto del 2030.

**NOVENO AL DECIMO NOVENO.- ...**

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**Primero.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.

**Segundo.-** Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

**Tercero.-** El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y proveerá el debido cumplimiento al presente Decreto.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTES DE  
JUSTICIA FEDERAL  
SECCION ESTABLE  
CONSTITUCIONAL  
MEXICO



La suscrita **Diputada Iraís María Vázquez Aguiar**, Secretaria del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la H. XXII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California

## **CERTIFICA:**

Que el presente documento integrado por diez (10) fojas útiles por un solo lado, es copia fiel y exacta del original que obra en los archivos de esta Soberanía Estatal y corresponde a la **Iniciativa de Decreto que reforma el artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California**, aprobado mediante Decreto número 112 de fecha 11 de septiembre de 2014, misma que fue aprobada en Sesión Extraordinaria Celebrada el 08 de julio de 2019. Se expide en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los ocho días del mes de julio del año dos mil diecinueve. - Doy fe. -----

LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
IERAL DE ACUERDOS  
DE CONTROVERSIAS  
Y DE ACCIONES DE  
NACIONALIDAD



**DIP. DIPUTADA IRAÍS MARÍA VÁZQUEZ AGUIAR**  
**SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA**

Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California; a los 4 días del mes de julio del  
año 2019.

  
Dip. Víctor Manuel Moran Hernández



PODER JUDICIAL  
SUPREMACIA DE  
SUBSECRETARÍA DE  
SECCIÓN DE TRÁMITE  
CONSTITUCIONAL  
INSTITUTO



**EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA HONORABLE VIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA EN EL SALÓN DE SESIONES "LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA", EL DÍA LUNES OCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

**PRESIDENTE, C. DIP. GÓMEZ MACÍAS EDGAR BENJAMÍN**  
**(Asistencia de veintitrés ciudadanos Diputados)**

**SECRETARIA, DIP. VÁZQUEZ AGUIAR IRAÍS MARÍA**

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las veinte horas con seis minutos del día lunes ocho de julio del año dos mil diecinueve, el Diputado Presidente de esta Mesa Directiva da inicio a la Sesión Ordinaria del Tercer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable Vigésima Segunda Legislatura del Estado de Baja California; acto seguido, el Diputado Presidente le solicita a la Diputada Vicepresidenta en funciones de Secretaria, proceda a pasar lista de asistencia, misma que certifica la presencia de los Ciudadanos Diputados: "Agatón Muñiz Claudia Josefina, Arango Pérez José Félix, Arregui Ibarra Alejandro, Bentley Duarte Victoria, Casas del Real José Antonio, Castañeda Pomposo Raúl, Corona Bolaños Cacho Marco Antonio, García Dworak Ignacio, Gómez Macías Edgar Benjamín, Hernández Álvarez Mónica, López Gorosave Rocío, Morán Hernández Víctor Manuel, Montoya Gaxiola Job, Osuna Millán Miguel Antonio, Padilla Muñoz Bernardo, Peñaloza Valdez Alfa, Ríos López Blanca Patricia, Tolento Hernández Sergio, Torres Torres Carlos Alberto, Vaca Chacón María Trinidad

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL O  
OPRENA COMTE DE JL  
URSEGETARIA GEN  
SECCION DE TRAMITE  
CONSTITUCIONALES  
INCOSTITUC



y Zavala Márquez Catalino. Asimismo, se justifica la inasistencia del ciudadano  
Diputado: Núñez Lozano Jorge Eugenio. Estando ausentes los ciudadanos  
Diputados: De la Rosa Anaya Andrés y Vásquez Hernández Eva María.

Enseguida, el Diputado Presidente, toda vez que el orden del día aprobado  
por la Junta de Coordinación Política ha sido distribuido con anticipación a los  
señores Diputados y Diputadas vía electrónica, le solicita al Diputado Secretario  
Escrutador someta a consideración de la asamblea en votación económica la  
dispensa de su lectura y en su caso su aprobación, resultando aprobado por mayoría  
de los Diputados presentes.

Se continua con el apartado del orden del día, que se refiere a: **"Iniciativas"**,  
en donde hace uso de la voz el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández, para  
presentar a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario de MORENA  
la Iniciativa de Decreto por la que se reforma el Artículo Octavo Transitorio de la  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Aprobado  
mediante Decreto Número 112 de fecha 11 de septiembre del año 2014; y de  
conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano  
de Baja California y del artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del  
Estado, solicita se someta a consideración del pleno la dispensa de trámite de la  
presente iniciativa, por calificarse como urgente y de obvia resolución. Asimismo  
solicita que en caso de ser aprobada dicha dispensa de trámite y una vez que sea  
discutida, se someta a votación por cédula dicha iniciativa, de conformidad con el  
artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
PRIMA CORTE DE  
SECRETARIA DE  
REGISTRACION  
CONSTITUCIONAL  
INCOSTITU



Acto seguido la Diputada Vicepresidenta, en funciones de Secretaria, hace constar la presencia de la Diputada Iraís María Vázquez Aguiar.

Enseguida, el Diputado Presidente, en base a lo que establece el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso, declara abierto el debate de la dispensa de trámite de la Iniciativa presentada por el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a los ciudadanos Diputados y Diputadas si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite solicitada; en donde interviene el Diputado Miguel Antonio Osuna Millán, para manifestarse en contra de la dispensa de trámite; enseguida y no existiendo más oradores ni a favor, ni en contra, el Diputado Presidente, solicita al Diputado Secretario Escrutador someta a votación económica dicha dispensa, resultando aprobada con veintiún votos a favor y un voto en contra, de los ciudadanos Diputados presentes.

A continuación, y de nueva cuenta hace uso de la voz el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández, para presentar a nombre propio y en representación de Grupo Parlamentario MORENA, Iniciativa por la que se reforma el Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Aprobado mediante Decreto Número 112 de fecha 11 de septiembre del año 2014; estableciéndose en los siguientes términos:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA

EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D  
SUPREMA CORTE DE J  
SUBSECRETARÍA GEN  
SECCIÓN DE TRAMITE  
CONSTITUCIONALES  
INCONSTITUC





DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA  
CALIFORNIA, APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 112

DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pueblo de Baja California acudió a las urnas confirmando su vocación democrática y su convicción que sólo por las vías pacíficas, institucionales y libres se podrá establecer un sistema de gobierno viable, legítimo y con sustento en el interés colectivo de un estado que construye un destino diferente y está empeñado en acabar con la injusticia social, con la incertidumbre y con los obstáculos que impiden el progreso.

Apegados a derecho, atendiendo el mandato constitucional y, sobre todo, privilegiando el derecho y la libertad de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes, nuestro estado ha realizado un proceso electoral ejemplar, un proceso electoral donde todos los ciudadanos votaron y eligieron un gobierno que permita transitar al desarrollo, a la justicia y equidad.

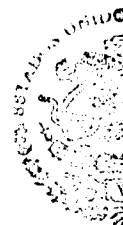
LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
ERAL DE ACUERDOS  
DE CONTROVERSIA  
Y DE ACCIONES DE  
ONALIDAD

Son los procesos democráticos los que legitiman una sociedad y un gobierno empeñados en transformar su realidad por un futuro más digno y más justo. Esto parte de la vocación primaria de nuestro pueblo por construir una entidad fuerte, unida y comprometida.

Nadie puede atentar contra esta aspiración legítima del pueblo de Baja California.

Nadie puede ir contra una decisión soberana de romper ataduras que condenan a

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE  
SUPREMA CORTE DE JU  
SUBSECRETARIA GEN  
SECCIÓN DE TRAMITE  
CONSTITUCIONALES  
INCOSTTUC

los pueblos a vivir en la pobreza, en la injusticia y en la marginación. Es una obligación ver hacia adelante, abrir las puertas de la justicia y establecer las condiciones sociales, democráticas y legales para que el sueño colectivo de dignificación social sea una realidad.

Baja California es hoy una convocatoria social y un reto colectivo. No hay espacio para las exclusiones, no hay tiempo para los debates estériles, no hay motivos para detener la marcha de nuestra historia como pueblo dedicado al trabajo y a la transformación.

El futuro se construye mirando y trabajando hacia adelante, retomando la grandeza de nuestro pasado y estando a la altura de las exigencias y aspiraciones de la sociedad actual y de las nuevas generaciones. Este es el único objetivo que como sociedad y como pueblo organizado nos debe convocar. El llamado es a la suma, es a poner por delante el interés superior de los habitantes de este Estado generoso y noble.

LA FEDERACIÓN  
TICA DE MIRANDA  
RAL DE ACUERDOS  
E CONTROVERSIA  
'DE ACCIONES  
ONALIDAD

Mirando hacia adelante y hacia el futuro que estamos obligados a crear, no se puede pensar en tiempos cortados, en procesos políticos inacabados, en truncar un proyecto que debe ser de largo alcance, con los espacios necesarios y adecuados para hacer posible las acciones públicas que beneficien a todos.

Pensar en grande, imaginar en conjunto, luchar unidos, trabajar en un solo frente, es una tarea fundamental. También es inexcusable enfrentar la difícil situación económica que enfrenta nuestro estado. Dilapidar los recursos del estado,

IN TEXTO



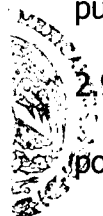
PODER JUDICIAL DE  
PRIMERA CORTA DE JUS  
SUBSECRETARIA GENE  
RACION DE TRAMITE D  
CONSTITUCIONALES Y  
INCOSTITUCION



malgastarlo, no está permitido ni es recomendable en esta situación de emergencia financiera.

El compromiso colectivo es trabajar para ser más eficaces y para ser más firmes en los actos públicos, en las acciones institucionales y en todos los procesos de construcción de una sociedad más equitativa. Solo será posible si se establece un gran acuerdo político que trascienda colores y militancias, porque en esta hora de Baja California no caben los disensos sustentados en las visiones parciales de corto plazo.

Baja California actualmente se enfrenta al mayor endeudamiento público de su historia y lo único que hace frente a este endeudamiento es sin lugar a dudas el arrojo de los bajacalifornianos por impulsar la economía de la entidad y esto se puede palpar en su producto interno bruto cuya media según datos del INEGI es del 2.9%, esto es el resultado del trabajo y esfuerzo de los distintos sectores económicos por generar empleos y mantener viva la inversión en el Estado ya que en el 2018 la



LA FEDERACIÓN  
NACIONAL DE LA NACIÓN  
NACIONAL DE ACUERDOS  
CONVENIENTES  
DE ACCIONES DE  
NACIONALIDAD

Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 1,741,615 personas, lo que representó el 62.9% de la población en edad de trabajar. Del total de la PEA, el 97.8% está ocupada y el 2.2% desocupada, en contraposición a estas cifras podemos ver que el gobierno del estado del 100% de sus ingresos según el presupuesto de egresos 2019, tan solo el 10.3% son recursos propios y el 89.7% son participaciones federales.

No se debe seguir escribiendo números rojos en el erario público y en el propio futuro de Baja California, la vida democrática de nuestro Estado, se ha expresado

UN TEXTO



PODER JUDICIAL D  
SUPREMA CORTE DE J  
SUBSECRETARIA GEN  
SECCION DE TRAMITE  
CONSTITUCIONALES  
INCOSTITTUC



mediante la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, este ejercicio democrático ha representado un costo financiero que cada vez ha ido en incremento, y hoy la ciudadanía nos exige hacer reformar la Constitución Política del Estado, ya que ha manifestado en distintos foros, consultas, debates y diversos medios de expresión social, que no es posible que en menos de dos años estemos iniciando un nuevo proceso electoral, que lo único que representará, es un golpe a las finanzas públicas, a las instituciones e indudablemente al desarrollo económico de nuestro Estado, y todo, por no querer escuchar lo que el pueblo demanda. y que es, dejar de dilapidar los recursos públicos en un proceso electoral que no representa beneficio alguno para el pueblo y que solo lo alejará de las urnas.

Estas razones nos obligan hacer una pausa y analizar el impacto financiero procesos electorales contemporáneos han tenido en Baja California.

En el año 2007, se celebraron elecciones para el cargo a Gobernador, en dicha elección de acuerdo al presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2007, y publicada en el Periódico Oficial número 54, tomo CXIII de fecha 22, de diciembre de 2006, se destinaron los siguientes recursos:

Al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, le otorgaron la cantidad de \$13,114,504.00 y al Instituto Estatal Electoral de Baja California, le correspondió la cantidad de \$202,319,197.00 entre ambas instituciones el proceso electoral de 2007, donde resulto ganador de la elección el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, se sufragó la cantidad de \$215'438,701.00.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D  
SUPREMA CORTE DE J  
SUBSECRETARÍA GEN  
SECCIÓN DE TRÁMITE  
CONSTITUCIONALES  
— INCOSTITUC

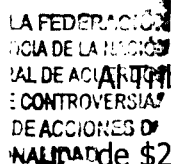




Para la elección del año 2013, el presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2013, y publicado en el Periódico Oficial número 59, tomo CXIX de fecha 31 de diciembre de 2012, precisa que el recurso que correspondió en materia electoral derivado del proceso fue el siguiente:

Al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California le otorgaron la cantidad de \$19,257,722.54 y al Instituto Estatal Electoral de Baja California le correspondió la cantidad de \$276,373,358.80 entre ambas instituciones el proceso electoral de 2013, donde resulto ganador de la elección el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, se sufrago la cantidad de \$295'631,081.34 esto es \$80,192,380.34 más que el proceso anterior.

Para el proceso electoral del año 2019, el presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2019, y publicado en el Periódico Oficial número 60, tomo CXXV de fecha 31 de diciembre de 2018, en el que se estableció que el recurso destinado a dicho proceso fue el siguiente:



LA FEDERACIÓN  
NACIONAL DE LA FISCALÍA  
FEDERAL DE ACUATILAS  
E CONTROVERSIA  
DE ACCIONES DE  
NACIONALIDAD

Al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, le otorgaron la cantidad de \$24,248,823.60 y al Instituto Estatal Electoral de Baja California le correspondió la cantidad de \$469,654,626.60 entre ambas instituciones el proceso electoral de 2019, donde resulto ganador de la elección el C. Jaime Bonilla Valdez, se sufrago la cantidad total de \$493'903,450.20, esto es \$198,272,368.86, más que el proceso anterior.

SIN TEXTO




PODER JUDICIAL DE  
SUPREMA CORTE DE JU  
SUBSECRETARÍA GEN  
SECCIÓN DE TRÁMITE  
CONSTITUCIONALES  
INCOSTITUC

En esta elección, el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Baja California en sesión ordinaria el día 02 de mayo de 2019, y con número de decreto 345, otorgó una ampliación de recursos al Instituto Estatal Electoral de Baja California por la cantidad de \$10,047,838.00.

Sumando esta ampliación, el proceso electoral de 2019, tuvo un costo total por la cantidad de \$503'951,288.20 con esto en total de la elección le costo al estado un monto de \$208,320,206.86 que el proceso inmediato anterior.

Tomando en cuenta las cifras anteriores, resulta más que motivado, la exigencia de la ciudadanía respecto a no celebrar elecciones en un periodo tan corto, y es que no se puede seguir pasando por alto el incremento súbito del presupuesto que se ejerce en cada proceso electoral y más aún cuando Baja California es uno de los Estados más endeudados del país, cuando estamos en la época de la austeridad republicana, cuando lo que se necesita es que el recurso público se ejecute en acciones de beneficio tangible para la ciudadanía; por que pensar en celebrar una nueva elección

The seal of the Baja California State Congress is circular. It features the Mexican coat of arms (an eagle on a cactus) in the center. The text around the border reads "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" at the top and "LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DE BAJA CALIFORNIA" at the bottom.  
LA FEDERACIÓN  
ESTADAL DE GOBIERNO  
RAL DE ACUERDOS  
DE CONTROVERSIAS  
Y DE ACCIONES DE  
ONALIDAD

de Gobernador para el año 2021, cuando esto representaría erogar una suma mayor que quinientos millones de pesos, lo cual pondría a nuestra Entidad en una situación

financiera más precaria, sin que medie una razón real y de beneficio social para los bajacalifornianos, los ciudadanos están cansados de la corrupción y de los gastos excesivos.

Resulta imperante ampliar el periodo de duración del encargo del Gobernador, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, ya que de lo contrario no podrían establecerse de forma adecuada, el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE J  
SUBSECRETARIA G  
ECCION DE TRAMITE  
CONSTITUCIONALE  
INCOSTITUB



regionales, lo cual indiscutiblemente generaría incertidumbre económica, política y social, aunado al gasto extraordinario que conllevaría llevar a cabo elecciones para gobernador en 2021; consecuencia del corto periodo de duración del cargo de Gobernador del Estado, el cual es de 2 años y 10 meses, de conformidad con lo señalado en el transitorio octavo del decreto 112, relativo al artículo 44 de nuestra Constitución Política Local, elecciones que debido al costo económico, resultarían en un duro golpe a las de por sí maltrechas finanzas públicas del estado, lo cual se reflejaría de manera inevitable en la economía, los servicios públicos y el bienestar integral de los bajacalifornianos.

La ampliación del periodo de duración del encargo para Gobernador del Estado electo a 5 años en lugar de 2 años 10 meses, resulta idóneo, para satisfacer el propósito constitucional de homologar las elecciones estatales con las elecciones federales del proceso electoral 2024, conforme con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base V y 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política

LA FEDERACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN  
SECRETARÍA DE ACUERDOS  
SECRETARÍA DE CONTROVERSIAS  
Y DE ACCIONES DE  
CONSTITUCIONALIDAD

La voluntad y el sentir de los bajacalifornianos plasmada en esta iniciativa, se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipulados en la fracción segunda del artículo 105, donde se impuso un periodo de 90 días antes de iniciado un proceso para la promulgación y publicación de leyes electorales y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales, esto último denota la viabilidad de reformar el transitorio octavo del Decreto 112, relativo al artículo 44 de nuestra Constitución

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D  
SUPREMA CORTE DE J  
SUBSECRETARIA GEN  
SECCIÓN DE TRÁMITE  
CONSTITUCIONALES  
— INCSTITUC



Política Local y así poder darle a Baja California un Gobierno que en conjunto con el Gobierno Federal lleven un período de gobernabilidad más estable y en benéfico de nuestra entidad.

La presente iniciativa, no es una norma general electoral, pues no tiene injerencia en el régimen normativo de los procesos electorales del Estado, propiamente dicho o en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, pues dicha iniciativa no propone regular aspectos vinculados directa o indirectamente o que deban influir en o con los procesos electorales de una manera o de otra, "como por ejemplo, distritación o redistribución, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas, sus sanciones; mucho menos trastoca o infiere en alguno de los principios de la materia electoral, respecto a las elecciones, sufragio, candidatos y demás; por lo que la presente iniciativa no impacta en aspectos relativos a los procesos electorales, de los previstos por la Constitución Federal.

LA FEDERACIÓN  
TICIA DE LA NACIÓN  
RAL DE ACUERDO  
E CONTROVERSIAS  
DE ACCIONES DE  
NULIDAD

Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia numero P. XVI/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente:

NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL. PARA QUE PUEDAN CONSIDERARSE CON TAL CARÁCTER E IMPUGNARSE A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEBEN REGULAR ASPECTOS RELATIVOS A LOS PROCESOS ELECTORALES PREVISTOS DIRECTAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D  
SUPREMA CORTE DE J  
SUBSECRETARÍA GEN  
SECCIÓN DE TRÁMITE  
CONSTITUCIONALES  
— INCOSTITUT





tesis de jurisprudencia P./J. 25/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 255, con el rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.", sostuvo que las normas electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con tales procesos o que deban influir en ellos. Ahora bien, de los artículos 41, primer y segundo párrafos, 115, fracciones I y VIII, 116, fracción IV, inciso a), y 122, apartado C, bases primera y segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que ésta prevé principios para la elección de determinados servidores públicos, a saber: los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos), lo que implica que a otros niveles puede preverse legalmente la elección de ciertos funcionarios, pero los procesos no se registran por dichos principios, por lo que si una ley establece que la designación de un servidor público diverso a los señalados debe hacerse mediante elecciones, ello no le confiere el carácter de electoral, porque para tener tal calidad es necesario que regule aspectos relativos a los procesos electorales, que son los previstos por la Constitución Federal.

Aunado a lo anterior, es necesario comentar que esta iniciativa no puede considerarse como una modificación fundamental, tomando como referencia uno de

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE  
SUPREMA CORTE DE JU  
SUBSECRETARÍA GEN  
SECCIÓN DE TRÁMITE  
CONSTITUCIONALES  
INCOSTITUCI

los elementos de procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, el cual se cita a continuación:

"Una modificación a una ley electoral, sin importar su jerarquía normativa, será de carácter fundamental cuando tenga por objeto, efecto o consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, a través de la cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de los actores políticos, incluyendo a las autoridades electorales".

Así, las modificaciones legales no serán fundamentales, aun cuando se reformen preceptos que rigen el proceso electoral, si el acto legislativo no afecta los elementos rectores señalados, de forma que repercuta en las reglas a seguir durante el proceso electoral; por consiguiente, si las modificaciones tienen como única finalidad precisar y dar claridad a los supuestos normativos correspondientes desde su aspecto formal, la reforma no tendrá el carácter mencionado". (Acción de

LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA UNIÓN  
JEFATURA FEDERAL DE ACUERDOS  
DE CONTROVERSIAS  
Y DE ACCIONES DE  
INCONSTITUCIONALIDAD

inconstitucionalidad 139/2007)

Como se puede apreciar, esta modificación no altera ninguna de las bases, reglas u otro elemento rector de los procesos electorales, pues no se crean obligaciones nuevas, tampoco introduce nuevas reglas, no trastoca el rubro del financiamiento público, ni mucho menos crea, modifica o elimina derechos a quienes pudieran participar, o bien a los partidos políticos participantes, de igual manera esta iniciativa no genera obligaciones de hacer o no hacer a las autoridades electorales, en este sentido es imperante precisar que existen excepciones las cuales han sentado

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
SUBSECRETARÍA GENERAL  
SECCIÓN DE TRÁMITE DE  
CONSTITUCIONALES  
— INCOSTITUCIONALES



precedentes en sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de ellas la (Acción de inconstitucionalidad 139/2007) que han sido acompañadas por la opinión de la Sala Superior de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual ya se han realizado modificaciones a leyes electorales en procesos ya iniciados, y que a pesar de haber sido controvertidas, resultaron operantes y pudieron aplicarse a los procesos electorales en turno, siendo esto corroborado al consultar en tesis de jurisprudencias, como la que se cita a continuación:

P./J. 98/2006 del siguiente rubro: "CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO." Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1564, se refirió a dichas modificaciones como aquellas que alteran sustancialmente disposiciones que rigen o integran el marco legal aplicable al proceso electoral; en este orden, si las citadas modificaciones legislativas no son de naturaleza trascendental para el proceso electoral, por ser de carácter accesorio o de aplicación contingente, su realización dentro del proceso electoral no producirá su invalidez o, en su caso, la inaplicación al proceso correspondiente.

En este mismo sentido y con la finalidad de nutrir la fundamentación legal de esta iniciativa, en lo referente a los alcances a la expresión "modificaciones legales fundamentales" se cita la siguiente tesis:

SIN TEXTO



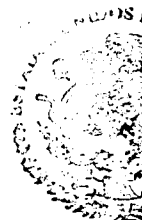
PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE  
SUBSECRETARIA GE  
RECCION DE TRAMIT  
CONSTITUCIONALE  
— INCONSTITU



P./J.87/2007 del siguiente rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN LA FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" El citado precepto establece que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber "modificaciones legales fundamentales". Por otra parte, del procedimiento de creación de dicha norma, se advierte que la intención del Órgano Reformador al establecer tal prohibición fue que, en su caso, las normas en materia electoral pudieran impugnarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ésta resolviera las contiendas antes del inicio del proceso electoral correspondiente, garantizando así el principio de certeza que debe observarse en la materia; sin embargo, la previsión contenida en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede considerarse como tajante, toda vez que admite la realización de reformas a las disposiciones generales en materia electoral ya sea dentro del plazo de 90 días anteriores al inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse o una vez iniciado éste, con la limitante de que no constituyan "modificaciones legales fundamentales".

Por lo anteriormente expuesto, reformar el Decreto No. 112, publicado en el Periódico Oficial Número 50, Sección I, Tomo CXXI, de fecha 17 de octubre de 2014, es totalmente viable, aunado al hecho de que el Congreso del Estado cuenta con la

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
SUBSECRETARIA DE LEY  
REGION DE TRAMITE DE  
CONSTITUCIONALES Y  
INCONSTITUCIONALES





libertad de configuración legislativa, reconocida constitucionalmente, desde esa óptica, la jurisprudencia en materia constitucional ha sido constante, tanto en considerar proscrita la irretroactividad de la ley que irroga perjuicios al gobernado, como en estimar válidas las facultades del legislador para introducir nuevas normas, modificando o derogando las existentes de acuerdo con las necesidades que demande la sociedad.

Con esta iniciativa atendemos al llamado del pueblo bajacaliforniano y al que la propia historia nos convoca por trabajar por la grandeza de Baja California. El futuro nos convoca a sumar esfuerzos y voluntades para ser hijos dignos de este tiempo y es la hora de nuestro pueblo. Baja California tiene destino y ese destino depende de lo que seamos capaces de hacer hoy.

Baja California tiene que construir su futuro con base en actos de ley, con determinación y con conciencia histórica. Nuestro origen y destino es de grandeza.

Estamos llamados a sentar las bases para que esto sea una realidad. Esto es, se

A FEDERACIÓN  
DE LA LEGISLACIÓN  
DE ACUERDO  
CONTRAVENIR  
E ACCIONES DE  
VALIDAD

debe hoy trabajar para que nada se interponga en el acuerdo conjunto de trascender en el tiempo y en la memoria.

Por las anteriores consideraciones se presenta ante esta Honorable Asamblea, la presente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO  
OCTAVO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, APROBADO MEDIANTE

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE JUS-  
TICIA FEDERAL  
SECRETARÍA DE TRÁMITE  
CONSTITUCIONAL  
INSTITUTO



DECRETO NÚMERO 112 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante Decreto 112 de fecha 11 de septiembre del año 2014, para quedar como sigue:

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO AL SÉPTIMO.- ....

OCTAVO.-OCTAVO.- Para efecto de la concurrencia de la elección de Gubernatura del Estado con el proceso electoral federal de 2024, la Gubernatura electa en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024.

La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2030. Por única ocasión

EL LA FEDERACIÓN  
STICIA DE LA NACIÓN  
RAL DE ACUSACIÓN  
DE CONTROVERSIA  
Y DE ACCIONES DE  
ONALIDAD

el Gobernador del Estado electo en el proceso electoral de 2024, iniciará funciones el primero de noviembre de 2024 y concluirá el treinta y uno de agosto del 2030.

NOVENO AL DECIMO NOVENO.- ...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE  
SUPREMA CORTE DE JUST  
SUBSECRETARIA GENE  
SECCION DE TRAMITE DE  
CONSTITUCIONALES Y  
INCOSTITUCIO



Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Tercero.-El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y proveerá el debido cumplimiento al presente Decreto.

Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California; a los 08 días del mes de julio del año 2019.

Dip. Víctor Manuel Morán Hernández

Acto seguido, el Diputado Presidente, en base a lo que establece el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso, declara abierto el debate de la Iniciativa presentada por el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a los ciudadanos Diputados y Diputadas si desean intervenir en contra de la iniciativa en comento; en donde interviene el Diputado Miguel Antonio Osuna Millán, para manifestarse en contra de la misma.

LA FEDERACIÓN  
DE LA NACIÓN  
DE ACUERDO  
CONTRÓVERSIA  
E ACCIONES DE  
AJUDAN

Enseguida y no existiendo ningún otro orador ni a favor, ni en contra, el Diputado Presidente solicita al Director de Procesos Parlamentarios, proceda a distribuir las cédulas de votación a los ciudadanos Diputados; asimismo solicita a la Diputada Secretaria, llamar por orden alfabético a los ciudadanos Diputados, para que emitan su voto en el ánfora: "Agatón Muñiz Claudia Josefina, Arango Pérez José Félix, Arregui Ibarra Alejandro, Bentley Duarte Victoria, Casas del Real José Antonio, Castañeda Pomposo Raúl, Corona Bolaños Cacho Marco Antonio, García Dworak

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
CARREMA COE E DE.  
MINISTERIA GE  
ECONOMIA DE TRAMIT  
CONSTITUCIONAL  
INCOSTITU



Ignacio, Gómez Macías Edgar Benjamín, Hernández Álvarez Mónica, López Goro  
Rocío, Morán Hernández Víctor Manuel, Montoya Gaxiola Job, Osuna Millán Miguel  
Antonio, Padilla Muñoz Bernardo, Peñaloza Valdez Alfa, Ríos López Blanca Patricia,  
Tolento Hernández Sergio, Torres Torres Carlos Alberto, Vaca Chacón María  
Trinidad, Vázquez Aguiar Iraís María y Zavala Márquez Catalino.

Posteriormente el Diputado Presidente, solicita al Diputado Secretario  
Escrutador, llevar a cabo el conteo de las cédulas de votación, resultando 21 votos  
a favor y 1 voto nulo.

Enseguida el Diputado Presidente, procede a declarar aprobada la Iniciativa  
presentada por el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández. Dado en el Salón de  
Sesiones "Lic. Benito Juárez García, en Sesión Extraordinaria de la Vigésima Segunda  
Legislatura, a los 8 días del mes de julio del año 2019.



DE LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
GENERAL DE ACUERDOS  
DE CONTROVERSIA  
Y DE ACCIONES DE  
NACIONALIDAD

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE J  
SUBSECRETARÍA GE  
SECCION DE TRAMITE  
CONSTITUCIONALES  
INCOSTITUC





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019**  
**ACTOR: MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**  
**SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS**  
**SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS**  
**CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE**  
**INCONSTITUCIONALIDAD**

En la Ciudad de México, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve, se da cuenta a la **Ministra Yasmín Esquivel Mossa** y al **Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá**, integrantes de la **Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, correspondiente al primer período de dos mil diecinueve, con el expediente de la controversia al rubro indicada, formado con la promoción respectiva y promovida por Ana Marcela Guzmán Valverde, quien se ostenta como Síndico Procurador del Municipio de Tijuana, Baja California, registrada con el número **27034**. Consta.

Ciudad de México, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve.

Conforme a los artículos 56<sup>1</sup> y 58<sup>2</sup> del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión de Receso que suscribe acuerda:

La Ministra y el Ministro que suscriben, integrantes de la Comisión de Receso designada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de asuntos urgentes, determina que una vez que dé inicio el segundo período de sesiones, correspondiente al año dos mil diecinueve, se envíen los autos a la Presidencia de este Alto Tribunal para que se provea lo relativo al turno de este asunto, sin embargo, durante el período de receso en que se actúa se proveerá lo conducente al trámite que resulte necesario.

LA FEDERACIÓN  
CORTA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS  
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS  
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE  
INCONSTITUCIONALIDAD

**Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**

**Artículo 56.** Entre los períodos de sesiones a que se refiere el artículo 3o. de la Ley Orgánica, funcionará una Comisión de Receso integrada por dos o más Ministros nombrados por el Presidente, previo acuerdo del Pleno.

Dicha Comisión dictará los acuerdos relativos a los asuntos jurisdiccionales cuya instrucción corresponda a la Suprema Corte y proveerá los trámites administrativos de carácter urgente. La actuación será colegiada, pero si por cualquier eventualidad faltare alguno de sus miembros, el o los presentes podrán actuar válidamente.

Las decisiones de la Comisión, actuando colegiadamente, se adoptarán por mayoría de votos y en caso de empate tendrá voto de calidad el Ministro con mayor antigüedad en el orden de su designación, salvo que el Presidente de este Alto Tribunal integre dicha Comisión, en cuyo caso a éste corresponderá el voto de calidad.

El Ministro que disienta de alguna determinación podrá solicitar que los motivos de ello se hagan constar en el acta respectiva, así como formular voto particular.

**<sup>2</sup>Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**

**Artículo 58.** La Comisión de Receso tendrá las siguientes atribuciones en materia jurisdiccional:

I. Las que corresponden al Presidente, en términos de lo establecido en el artículo 14, fracción II, de la Ley Orgánica, en relación con los asuntos previstos en las fracciones I y X del artículo 10 de ese mismo ordenamiento, y

II. Las que corresponden al Ministro instructor en controversias constitucionales, en acciones de inconstitucionalidad, en juicios de anulación de la declaratoria de exclusión de los Estados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y en juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación celebrados por el Gobierno Federal con los Gobiernos de los Estados o el Distrito Federal, en términos de lo previsto en los artículos 10, fracción X, de la Ley Orgánica y 14, 25, 26 y 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

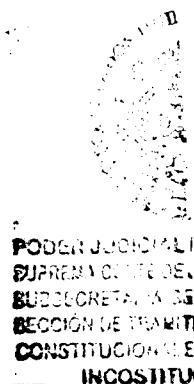
En los supuestos anteriores, cuando hubiere causa urgente que lo exija, la Comisión podrá habilitar días y horas inhábiles, expresando cuál sea aquélla, en términos de lo previsto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente conforme a lo establecido en el artículo 1o. de la referida Ley Reglamentaria.

En atención a lo anterior, agréguese al expediente correspondiente, el escrito de demanda y los anexos de quien se ostenta como Síndico Procurador del Municipio de Tijuana, Baja California; mediante los cuales intenta promover controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de la entidad, de los que se advierte, en principio, que pretende impugnar por esta vía:

*"La omisión del Congreso del Estado de Baja California (XXII LEGISLATURA) de convocar al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a la Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, en la cual aprobaron una dispensa de trámite, con la consecuencia de no convocar a mi representada a los trabajos deliberativos de la misma y teniendo perjuicio tanto en los interés de la autoridad que represento, como en los derechos de los habitantes que representa el municipio respecto de la iniciativa en comento, transgrediendo el estado de derecho.*

...

*Siendo la materia de impugnación en la presente controversia constitucional la omisión, derivada de la indebida dispensa de trámite aprobada del Congreso, de convocar al Ayuntamiento de Tijuana a Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112, pues como se expondrá más adelante, la XXII Legislatura demandada tenía la obligación de celebrar la Comisión de dictaminación de la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio y convocar al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, cuando menos cinco días de anticipación a la fecha de la Sesión, a efecto de que concurren al desahogo de las sesiones si lo estiman conveniente, así como también tenía la obligación de substanciar el proceso legislativo en las fases subsiguientes a dicha dictaminación."*



Al respecto, se tiene por presentada a la Síndica Municipal de Tijuana, Baja California, con la personalidad que ostenta<sup>3</sup>, designando **delegados**, señalando **domicilio** para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; esto, con fundamento en los artículos 11, párrafos primero y segundo<sup>4</sup>, de la Ley Reglamentaria de las

<sup>3</sup> De conformidad con las documentales que exhibe para tal efecto y en términos del artículo 8, fracción I, del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California, que establece:

**Artículo 8.** Del Síndico Procurador.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de contraloría interna, la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento, y vigilar que no se afecten los intereses de los habitantes del municipio, en el ejercicio de las funciones y atribuciones de orden municipal, ostentando en todo caso, las siguientes atribuciones:

I.- Ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios jurisdiccionales, así como en las negociaciones relativas a la hacienda municipal, pudiendo nombrar apoderado legal y delegar sus facultades, con arreglo a las que específicamente el Ayuntamiento le delegue;

**4Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal**

**Artículo 11.** El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 305<sup>5</sup> del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 1<sup>6</sup> de la citada ley reglamentaria.

Por otra parte, a efecto de proveer lo que en derecho procede respecto del trámite de la demanda promovida, se arriba a la conclusión de que debe desecharse, conforme a las consideraciones que se desarrollan a continuación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25<sup>7</sup> de la ley reglamentaria de la materia, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para desechar de plano un medio de control constitucional como el que ahora se analiza, si advierte que en él se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que se corrobora con la jurisprudencia que se cita enseguida:

**"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."<sup>8</sup>

Así, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurren a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. (...).

**<sup>5</sup>Código Federal de Procedimientos Civiles**

**Artículo 305 del.** Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal; para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial.

**<sup>6</sup>Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal**

**Artículo 1.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del código federal de procedimientos civiles.

**<sup>7</sup>Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal**

**Artículo 25.** El ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.

**<sup>8</sup>Tesis P./J. 128/2001.** Jurisprudencia, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, página 803, registro 188643.

forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; en tanto que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la substanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.

En la especie, de la simple lectura de la demanda y sus anexos, es posible advertir que **se actualiza la causa de improcedencia** prevista en el artículo 19, fracción VI<sup>9</sup>, de la referida ley reglamentaria, en virtud de que el acto impugnado se emitió dentro de un procedimiento que no ha concluido.

Esto es así, porque de la lectura integral del escrito inicial de demanda y sus anexos, se desprende que lo pretendido por la promovente es impugnar el proceso legislativo, particularmente: ***"[...] la indebida dispensa de trámite aprobada del Congreso, de convocar al Ayuntamiento de Tijuana a Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112..."***.

Al respecto, este Alto Tribunal ha establecido que del principio de definitividad que rige para la impugnación de actos en controversias constitucionales, se pueden desprender los siguientes supuestos:

1. Que esté prevista legalmente una vía en contra del acto impugnado en la controversia constitucional, que no se haya agotado y a través de la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado y, por tanto, sea apta para la solución del propio conflicto.

2. Que habiéndose interpuesto dicha vía o medio legal, aún no se haya dictado la resolución correspondiente, por la cual pudiera modificarse o nulificarse el acto controvertido a través de aquélla; y,

3. Que el acto impugnado se haya emitido dentro de un procedimiento, que no ha concluido, esto es, que esté pendiente de dictarse la resolución definitiva que pueda ser impugnada en controversia constitucional, en el que la cuestión debatida constituya la materia propia de la controversia constitucional

Por tanto, se advierte que la materia de impugnación en el presente medio de control constitucional constituye un acto del procedimiento legislativo para las adiciones y reformas a la Constitución Política del Estado de Baja California; por lo que dicho acto se encuentra sujeto a las diversas etapas que componen el procedimiento, de tal forma que, su impugnación sólo puede realizarse a partir de que concluye tal procedimiento con la declaratoria correspondiente, pues es hasta ese momento cuando los actos que lo integran adquieren definitividad, constituyendo su publicación el conocimiento del acto.

<sup>9</sup>**Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal**

**Artículo 19.** Las controversias constitucionales son improcedentes: (...).

VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto; (...).



Lo anterior, tiene su fundamento en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Baja California, en la que se establece lo siguiente:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

*"Artículo 33. Las iniciativas adquirirán el carácter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y **Promulgadas por el Ejecutivo**, salvo lo previsto en el artículo 34<sup>10</sup> de esta Constitución. Si la ley no fija el día en que deba comenzar a observarse, será obligatoria en todo el Estado tres días después de la fecha de su **publicación en el Periódico Oficial del Estado**". (Énfasis añadido)*

En relación con lo anterior, resulta relevante tener presente que, como se precisó en párrafos precedentes, la parte actora impugna exclusivamente un acto que forma parte del procedimiento legislativo, de tal suerte que la impugnación no la hace derivar de la publicación de la norma general, sino de un acto dentro del referido procedimiento.

Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la

<sup>10</sup> **Constitución Política del Estado de Baja California**

**Artículo 34.** Si el Ejecutivo juzga conveniente hacer observaciones a un proyecto aprobado por el Congreso, podrá negarle su sanción y devolverlo con sus observaciones a este Poder dentro de los quince días siguientes a aquel en que se le haga saber, o para que tomadas en consideración, se examine y se discuta de nuevo.

**A.** Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no se devuelva con observaciones al Congreso dentro de los mencionados términos. Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo dispondrá de diez días para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente del Congreso ordenará dentro de los quince días siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, si que se requiera refrendo.

**B.** El proyecto de decreto o de ley al que se hubieren hecho observaciones, será promulgado y publicado si el Congreso en un plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a que reciba las observaciones, vuelve a aprobarlo por dos tercios del número total de sus miembros. Vencido este plazo, se tendrá por no ratificado el proyecto de que se trate.

Los proyectos de decreto o de ley que hubieren sido objetados por el Ejecutivo, conforme a esta Constitución, y que hayan sido ratificados por el Congreso en el plazo indicado en el párrafo anterior, deberán ser promulgados y publicados en un término que no exceda de cinco días, contados a partir de la fecha en que hayan sido remitidos nuevamente al Ejecutivo.

**C.** Los proyectos de ley y los decretos aprobados por el Congreso, se remitirán al Ejecutivo firmados por el Presidente y el Secretario del Congreso, en un plazo máximo de diez días a su aprobación. En un plazo similar, se deberán remitir a los Ayuntamientos, las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución, que haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de Diputados, para los efectos previstos en el artículo 112 de esta Constitución.

Las leyes, ordenamientos y disposiciones de observancia general que hayan sido aprobados por el Congreso del Estado y sancionados por el Ejecutivo deberán ser promulgados y publicados en el Periódico Oficial del Estado.

**D.** Si los reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general, no fijan el día en que deben comenzar a observarse, serán obligatorias tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**E.** Las leyes que expida el Congreso del Estado, excepto las de índole tributario o fiscal, podrán ser sometidas a Referéndum, conforme lo disponga la Ley.

**F.** Los asuntos que sean materia de acuerdo, se sujetarán a los trámites que fije la Ley.

**G.** El Gobernador del Estado no podrá hacer observaciones sobre los decretos que manden abrir o cerrar sesiones del Congreso, los emitidos por éste cuando actúe en funciones de Jurado de Sentencia y las reformas constitucionales aprobadas en los términos del artículo 112 de esta Constitución.

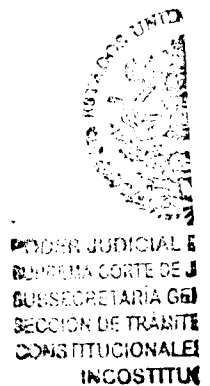
**H.** El Congreso del Estado tendrá facultades plenas para expedir, reformar, adicionar o abrogar la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. Esta Ley o las reformas a la misma no podrán ser sujetas a observaciones, ni necesitarán de sanción, promulgación y publicación del Ejecutivo del Estado para tener vigencia.

norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no es impugnabile cada acto legislativo en lo individual, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma general.

En efecto, los actos que integran el procedimiento legislativo están plenamente vinculados entre sí y forman una unidad en su conjunto, que solamente adquieren definitividad al momento de la publicación de la norma general que ha sido objeto de dicho procedimiento; así, la impugnación de los actos que lo integran sólo puede realizarse a partir de que la norma general emanada de tal procedimiento es publicada, porque es en ese momento cuando los mencionados actos adquieren definitividad.

En congruencia con lo anterior, la ***"indebida dispensa de trámite"*** en el sentido de convocar al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a la ***"Comisión de Dictaminación"*** para que participara con voz en los trabajos legislativos relacionados con la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, con la consecuencia de no convocarlo a los trabajos deliberativos de la misma, no es susceptible de impugnación a través de una controversia constitucional, ya que para poder impugnar ese acto es requisito indispensable que la norma general haya sido publicada, lo que encuentra sustento en las tesis jurisprudenciales cuyos rubros y texto se citan a continuación:

***"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN LA DEMANDA SÓLO SE IMPUGNAN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA GENERAL QUE NO HA SIDO PUBLICADA, DEBE DESECHARSE POR EXISTIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la impugnación de actos en vía de controversia constitucional sólo puede llevarse a cabo dentro de los treinta días, contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acto que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de éste; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de él. En congruencia con lo anterior, si en la demanda de controversia constitucional sólo se impugnan actos del procedimiento legislativo que dio origen a una norma general que no ha sido publicada, es claro que debe desecharse al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 25 de la ley citada, ya que para poder impugnar tales actos, es requisito indispensable que dicha norma esté publicada, porque es hasta ese momento en que los actos que integran el procedimiento legislativo adquieren definitividad."***<sup>11</sup>



***"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS VICIOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL. Si se toma en consideración, por un lado, que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no es posible jurídicamente impugnar cada acto legislativo***

<sup>11</sup>Tesis jurisprudencial P.JJ. 130/2001, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de dos mil uno, página 803, registro 188642.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

individualmente, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma general, y por otro, que tratándose de controversias constitucionales, el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del

Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la impugnación de actos en esa vía puede llevarse a cabo dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acto que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de éste; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de él, resulta inconcuso que la impugnación de los actos que integran el procedimiento legislativo únicamente puede realizarse a partir de que es publicada la norma general emanada de dicho procedimiento, porque es en ese momento cuando los mencionados actos adquieren definitividad."<sup>12</sup>

**"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE NO HA SIDO PROMULGADO NI PUBLICADO.** Si en la demanda de controversia constitucional se impugna el decreto legislativo del presupuesto de egresos para un ejercicio fiscal que aún no ha sido promulgado ni publicado, debe considerarse actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el decreto del presupuesto de egresos constituye un acto formalmente legislativo que se encuentra sujeto a las diversas etapas que componen el procedimiento que le da origen y con el que conforma una unidad indisoluble, de tal forma que su impugnación sólo puede realizarse a partir de que concluye dicho procedimiento con su promulgación y publicación porque es hasta ese momento cuando adquiere definitividad, constituyendo su publicación el conocimiento del acto para efectos del cómputo del término para la promoción de la controversia constitucional, conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria citada y, por tanto, el plazo para la promoción de la controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente a su publicación."<sup>13</sup>

Con lo anterior, a esta Comisión no pasa inadvertido lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de reclamación 36/2012 y de donde se desprendió la tesis de rubro **PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LOS ACTOS QUE LO INTEGRAN TRATÁNDOSE DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL O UNA**

<sup>12</sup>Tesis jurisprudencial P.J. 129/2001, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de dos mil uno, página 804, registro 188640.

<sup>13</sup>Tesis jurisprudencial P.J. 67/2003, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, noviembre de dos mil tres, página 433, registro 182866.



**ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD**,<sup>14</sup> citada por el Municipio actor en su escrito inicial. En el recurso en cita, se planteó la pregunta constitucional consistente en saber si procedía la suspensión en contra de la promulgación de un decreto por el que se expedía una norma jurídica, si se alegaba una violación al derecho de veto del Ejecutivo Federal, previsto por el artículo 72 constitucional. En ese contexto, se sostuvo que, tratándose de una controversia constitucional, era posible atacar los actos concretos que integran las fases del procedimiento legislativo, especificando textualmente que esto ocurría “siempre que lo hagan los poderes legitimados por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y éstos aleguen una transgresión a su ámbito constitucional de competencias asignado”.

En el caso que nos ocupa, es posible extraer que, contrario a lo resuelto en el precedente en cita, no estamos frente a una transgresión del ámbito competencial que el Municipio tiene constitucionalmente asignado, pues, en ese sentido, de una lectura de su demanda no se extrae una violación a su esfera de atribuciones. Si bien el actor pretende anclar sus competencias en la materia del artículo 115, fracción I y fracción III, inciso i), lo cierto es que esta Comisión no encuentra una atribución, equiparable al derecho de veto que corresponde al Ejecutivo Federal en virtud del artículo 72, apartado A y B constitucional, dentro de las funciones y servicios públicos a cargo del orden municipal.

Así las cosas, de la simple lectura de los elementos con que se cuenta en el expediente se advierte que el municipio promovente combate un acto no susceptible de impugnación a través de la controversia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, por lo que lo conducente es desechar la presente demanda de este medio de control constitucional.

Esta conclusión encuentra apoyo en la tesis que a continuación se señala:

**“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO. Si de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia de la controversia constitucional y que, por sus propios caracteres, no son desvirtuables con su tramitación pues nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar esas consecuencias, aquélla debe considerarse notoriamente improcedente y, por ende, procede desecharla de plano.”**<sup>15</sup>

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se acuerda:

**PRIMERO.** Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Municipio de Tijuana, Estado de Baja California.

<sup>14</sup> Tesis 1ª. CCLXVIII/2012., Aislada, Primera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 580, registro 2002365.

<sup>15</sup> Tesis P. LXXI/2004, Aislada, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, página 1122, registro 179954.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**SEGUNDO.** Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido.

Dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, con apoyo en el artículo 282<sup>16</sup> del invocado código federal, se habilitan los días que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este proveído.

**Notifíquese.**

Lo proveyeron y firman conjuntamente la **Ministra Yasmín Esquivel Mossa** y el **Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá**, integrantes de la **Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, correspondiente al primer período de dos mil diecinueve, quienes actúan con **Mónica Fernanda Estevané Núñez**, Secretaria de la Comisión que da fe.

*Juan González Alcántara Carrancá*

*[Firma manuscrita]*

**PROVEÍDO**

A FEDERACIÓN  
CORTA DE LA NACIÓN  
AL DE ACUERDOS  
CONTRAVERSIA  
DE ACCIONES  
NACIONAL

Esta hoja corresponde al proveído diecinueve de julio de dos mil diecinueve, dictado por la **Ministra Yasmín Esquivel Mossa** y el **Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá**, integrantes de la **Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, correspondiente al primer período de dos mil diecinueve, en la controversia constitucional **269/2019**, promovida por el Municipio de Tijuana, Baja California. Conste.

JAE/NAC 01

**A**

<sup>16</sup>**Código Federal de Procedimientos Civiles**

**Artículo 282.** El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.

EL 24 JUL 2019 ; SE NOTIFICÓ POR LISTA A LOS  
INTERESADOS LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE. CONSTE.  
SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN  
VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS, SE TIENE  
POR HECHA LA NOTIFICACIÓN, POR MEDIO DE LISTA. DOY FE.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE J  
SUBSECRETARÍA GEN  
SECCIÓN DE TRÁMITE  
CONSTITUCIONALES  
INCOSTITUT



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE  
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

**CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019**  
**ACTOR: MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**  
**SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS**  
**SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS**  
**CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE**  
**INCONSTITUCIONALIDAD**

**OFICIO 5645/2019 MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

En el expediente citado al rubro, la **Ministra Yasmín Esquivel Mossa** y el **Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá**, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer período de dos mil diecinueve, dictaron un acuerdo que es del tenor literal siguiente:

“Ciudad de México, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve.

Conforme a los artículos 56<sup>1</sup> y 58<sup>2</sup> del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión de Receso que suscribe acuerda:

La Ministra y el Ministro que suscriben, integrantes de la Comisión de Receso designada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de asuntos urgentes, determina que una vez que dé inicio el segundo período de sesiones, correspondiente al año dos mil diecinueve, se envíen los autos a la Presidencia de este Alto Tribunal para que se provea lo relativo al turno de este asunto; sin embargo, durante el período de receso en que se actúa se proveerá lo conducente al trámite que resulte necesario.

En atención a lo anterior, agréguese al expediente correspondiente, el escrito de demanda y los anexos de quien se ostenta como **Síndico Procurador del Municipio de Tijuana, Baja California**; mediante los cuales intenta promover

**<sup>1</sup>Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**

**Artículo 56.** Entre los períodos de sesiones a que se refiere el artículo 3o. de la Ley Orgánica, funcionará una Comisión de Receso integrada por dos o más Ministros nombrados por el Presidente, previo acuerdo del Pleno. Dicha Comisión dictará los acuerdos relativos a los asuntos jurisdiccionales cuya instrucción corresponde a la Suprema Corte y proveerá los trámites administrativos de carácter urgente. La actuación será colegiada; pero, si por cualquier eventualidad faltare alguno de sus miembros, el o los presentes podrán actuar válidamente. Las decisiones de la Comisión, actuando colegiadamente, se adoptarán por mayoría de votos y, en caso de empate tendrá voto de calidad el Ministro con mayor antigüedad en el orden de su designación, salvo que el Presidente de este Alto Tribunal integre dicha Comisión, en cuyo caso a éste corresponderá el voto de calidad. El Ministro que disienta de alguna determinación podrá solicitar que los motivos de ello se hagan constar en el acta respectiva, así como formular voto particular.

**<sup>2</sup>Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**

**Artículo 58.** La Comisión de Receso tendrá las siguientes atribuciones en materia jurisdiccional:

- I. Las que corresponden al Presidente, en términos de lo establecido en el artículo 14, fracción II, de la Ley Orgánica, en relación con los asuntos previstos en las fracciones I y X del artículo 10 de ese mismo ordenamiento, y
- II. Las que corresponden al Ministro instructor en controversias constitucionales, en acciones de inconstitucionalidad, en juicios de anulación de la declaratoria de exclusión de los Estados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y en juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación celebrados por el Gobierno Federal con los Gobiernos de los Estados o el Distrito Federal, en términos de lo previsto en los artículos 10, fracción X, de la Ley Orgánica y 14, 25, 26 y 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En los supuestos anteriores, cuando hubiere causa urgente que lo exija, la Comisión podrá habilitar días y horas inhábiles, expresando cuál sea aquélla, en términos de lo previsto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente conforme a lo establecido en el artículo 1o. de la referida Ley Reglamentaria.

EL LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
IERAL DE ACUERDOS  
DE CONTROVERSIA  
Y DE ACCIONES DE  
INCONSTITUCIONALIDAD

controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de la entidad, de los que se advierte, en principio, que pretende impugnar por esta vía:

*'La omisión del Congreso del Estado de Baja California (XXII LEGISLATURA) de convocar al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a la Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, en la cual aprobaron una dispensa de trámite, con la consecuencia de no convocar a mi representada a los trabajos deliberativos de la misma y teniendo perjuicio tanto en los intereses de la autoridad que represento, como en los derechos de los habitantes que representa el municipio respecto de la iniciativa en comento, transgrediendo el estado de derecho.*

...

*Siendo la materia de impugnación en la presente controversia constitucional la omisión, derivada de la indebida dispensa de trámite aprobada del Congreso, de convocar al Ayuntamiento de Tijuana a Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112, pues como se expondrá más adelante, la XXII Legislatura demandada tenía la obligación de celebrar la Comisión de dictaminación de la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio y convocar al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, cuando menos cinco días de anticipación a la fecha de la Sesión, a efecto de que concurran al desahogo de las sesiones si lo estiman conveniente, así como también tenía la obligación de substanciar el proceso legislativo en las fases subsiguientes a dicha dictaminación.'*

Al respecto, se tiene por presentada a la Síndica Municipal de Tijuana, Baja California, con la personalidad que ostenta<sup>3</sup>, designando **delegados**, señalando **domicilio** para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, esto, con fundamento en los artículos 11, párrafos primero y segundo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 305<sup>4</sup> del Código Federal

<sup>3</sup> De conformidad con las documentales que exhibe para tal efecto y en términos del artículo 8, fracción I, del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California, que establece:

**Artículo 8.** Del Síndico Procurador.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de contraloría interna, la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento, y vigilar que no se afecten los intereses de los habitantes del municipio, en el ejercicio de las funciones y atribuciones de orden municipal, ostentando en todo caso, las siguientes atribuciones:

I.- Ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios jurisdiccionales, así como en las negociaciones relativas a la hacienda municipal, pudiendo nombrar apoderado legal y delegar sus facultades, con arreglo a las que específicamente el Ayuntamiento le delegue;

<sup>4</sup>**Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal**

**Artículo 11.** El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. (...).

<sup>5</sup>**Código Federal de Procedimientos Civiles**

**Artículo 305 del.** Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE  
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 1<sup>6</sup> de la citada ley reglamentaria.

Por otra parte, a efecto de proveer lo que en derecho procede respecto del trámite de la demanda promovida, se arriba a la conclusión de que debe desecharse, conforme a las consideraciones que se desarrollan a continuación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25<sup>7</sup> de la ley reglamentaria de la materia, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para desechar de plano un medio de control constitucional como el que ahora se analiza, si advierte que en él se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que se corrobora con la jurisprudencia que se cita enseguida:

**'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.'<sup>8</sup>

Así, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; en tanto que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la substanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.

En la especie, de la simple lectura de la demanda y sus anexos es posible advertir que **se actualiza la causa de improcedencia** prevista en el artículo 19, fracción VI<sup>9</sup>, de la referida ley reglamentaria, en virtud de que el acto impugnado se emitió dentro de un procedimiento que no ha concluido.

asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial.

**<sup>6</sup>Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal**

**Artículo 1.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del código federal de procedimientos civiles.

**<sup>7</sup>Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal**

**Artículo 25.** El ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.

**<sup>8</sup>Tesis P.J. 128/2001.** Jurisprudencia, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, página 803, registro 188643.

**<sup>9</sup>Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal**

**Artículo 19.** Las controversias constitucionales son improcedentes: (...).

VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto; (...).

Esto es así, porque de la lectura integral del escrito inicial de demanda y sus anexos, se desprende que lo pretendido por la promovente es impugnar el proceso legislativo, particularmente: **'[...] la indebida dispensa de trámite aprobada del Congreso, de convocar al Ayuntamiento de Tijuana a Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112...'**

Al respecto, este Alto Tribunal ha establecido que del principio de definitividad que rige para la impugnación de actos en controversias constitucionales, se pueden desprender los siguientes supuestos:

1. Que esté prevista legalmente una vía en contra del acto impugnado en la controversia constitucional, que no se haya agotado y a través de la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado y, por tanto, sea apta para la solución del propio conflicto.

2. Que habiéndose interpuesto dicha vía o medio legal, aún no se haya dictado la resolución correspondiente, por la cual pudiera modificarse o nulificarse el acto controvertido a través de aquélla; y,

3. Que el acto impugnado se haya emitido dentro de un procedimiento, que no ha concluido, esto es, que esté pendiente de dictarse la resolución definitiva que pueda ser impugnada en controversia constitucional, en el que la cuestión debatida constituya la materia propia de la controversia constitucional

Por tanto, se advierte que la materia de impugnación en el presente medio de control constitucional constituye un acto del procedimiento legislativo para las adiciones y reformas a la Constitución Política del Estado de Baja California; por lo que dicho acto se encuentra sujeto a las diversas etapas que componen el procedimiento, de tal forma que, su impugnación sólo puede realizarse a partir de que concluye tal procedimiento con la declaratoria correspondiente, pues es hasta ese momento cuando los actos que lo integran adquieren definitividad, constituyendo su publicación el conocimiento del acto.

Lo anterior, tiene su fundamento en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Baja California, en la que se establece lo siguiente:

**'Artículo 33. Las iniciativas adquirirán el carácter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y Promulgadas por el Ejecutivo, salvo lo previsto en el artículo 34<sup>10</sup> de esta Constitución.**

<sup>10</sup> **Constitución Política del Estado de Baja California**

**Artículo 34.** Si el Ejecutivo juzga conveniente hacer observaciones a un proyecto aprobado por el Congreso, podrá negarle su sanción y devolverlo con sus observaciones a este Poder dentro de los quince días siguientes a aquél en que se le haga saber, o para que tomadas en consideración, se examine y se discuta de nuevo.

**A.** Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no se devuelva con observaciones al Congreso dentro de los mencionados términos. Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo dispondrá de diez días para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente del Congreso ordenará dentro de los quince días siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin que se requiera refrendo.

**B.** El proyecto de decreto o de ley al que se hubieren hecho observaciones, será promulgado y publicado si el Congreso en un plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a que reciba las observaciones, vuelve a aprobarlo por dos tercios del número total de sus miembros. Vencido este plazo, se tendrá por no ratificado el proyecto de que se trate. Los proyectos de decreto o de ley que hubieren sido objetados por el Ejecutivo, conforme a esta Constitución, y que hayan sido ratificados por el Congreso en el plazo indicado en el párrafo anterior, deberán ser promulgados y publicados en un término que no exceda de cinco días, contados a partir de la fecha en que hayan sido remitidos nuevamente al Ejecutivo.

**C.** Los proyectos de ley y los decretos aprobados por el Congreso, se remitirán al Ejecutivo firmados por el Presidente y el Secretario del Congreso, en un plazo máximo de diez días a su aprobación. En un plazo similar, se deberán remitir a los Ayuntamientos, las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución, que haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de Diputados, para los efectos previstos en el artículo 112 de esta Constitución. Las leyes, ordenamientos y disposiciones de observancia general que hayan sido aprobados por el Congreso del Estado y sancionados por el Ejecutivo deberán ser promulgados y publicados en el Periódico Oficial del Estado.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE  
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

Si la ley no fija el día en que deba comenzar a observarse, será obligatoria en todo el Estado tres días después de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. (Énfasis añadido)

En relación con lo anterior, resulta relevante tener presente que, como se precisó en párrafos precedentes, la parte actora impugna exclusivamente un acto que forma parte del procedimiento legislativo, de tal suerte que la impugnación no la hace derivar de la publicación de la norma general, sino de un acto dentro del referido procedimiento.

Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no es impugnabile cada acto legislativo en lo individual, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma general.

En efecto, los actos que integran el procedimiento legislativo están plenamente vinculados entre sí y forman una unidad en su conjunto, que solamente adquieren definitividad al momento de la publicación de la norma general que ha sido objeto de dicho procedimiento; así, la impugnación de los actos que lo integran sólo puede realizarse a partir de que la norma general emanada de tal procedimiento es publicada, porque es en ese momento cuando los mencionados actos adquieren definitividad.

En congruencia con lo anterior, la *indebida dispensa de trámite* en el sentido de convocar al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a la *Comisión de Dictaminación* para que participara con voz en los trabajos legislativos relacionados con la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, con la consecuencia de no convocarlo a los trabajos deliberativos de la misma, no es susceptible de impugnación a través de una controversia constitucional, ya que para poder impugnar ese acto es requisito indispensable que la norma general haya sido publicada, lo que encuentra sustento en las tesis jurisprudenciales cuyos rubros y texto se citan a continuación:

**CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN LA DEMANDA SÓLO SE IMPUGNAN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA GENERAL QUE NO HA SIDO PUBLICADA, DEBE DESECHARSE POR EXISTIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la impugnación de actos en vía de controversia constitucional sólo puede llevarse a cabo dentro de los treinta días, contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acto que se

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
GENERAL DE ACUERDO  
TE DE CONTROVERSIA  
ES Y DE ACCIONES DE  
CONSTITUCIONALIDAD

- D. Si los reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general, no fijan el día en que deben comenzar a observarse, serán obligatorias tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
- E. Las leyes que expida el Congreso del Estado, excepto las de índole tributaria o fiscal, podrán ser sometidas a Referéndum, conforme lo disponga la Ley.
- F. Los asuntos que sean materia de acuerdo, se sujetarán a los trámites que fije la Ley.
- G. El Gobernador del Estado no podrá hacer observaciones sobre los decretos que manden abrir o cerrar sesiones del Congreso, los emitidos por éste cuando actúe en funciones de Jurado de Sentencia y las reformas constitucionales aprobadas en los términos del artículo 112 de esta Constitución.
- H. El Congreso del Estado tendrá facultades plenas para expedir, reformar, adicionar o abrogar la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. Esta Ley o las reformas a la misma no podrán ser sujetas a observaciones, ni necesitarán de sanción, promulgación y publicación del Ejecutivo del Estado para tener vigencia.

reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de éste; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de él. En congruencia con lo anterior, si en la demanda de controversia constitucional sólo se impugnan actos del procedimiento legislativo que dio origen a una norma general que no ha sido publicada, es claro que debe desecharse al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 25 de la ley citada, ya que para poder impugnar tales actos, es requisito indispensable que dicha norma esté publicada, porque es hasta ese momento en que los actos que integran el procedimiento legislativo adquieren definitividad.<sup>11</sup>

**'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS VICIOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.**

Si se toma en consideración, por un lado, que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no es posible jurídicamente impugnar cada acto legislativo individualmente, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma general, y por otro, que tratándose de controversias constitucionales, el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la impugnación de actos en esa vía puede llevarse a cabo dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acto que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de éste; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de él, resulta inconcuso que la impugnación de los actos que integran el procedimiento legislativo únicamente puede realizarse a partir de que es publicada la norma general emanada de dicho procedimiento, porque es en ese momento cuando los mencionados actos adquieren definitividad.<sup>12</sup>

**'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE NO HA SIDO PROMULGADO NI PUBLICADO.**

Si en la demanda de controversia constitucional se impugna el decreto legislativo del presupuesto de egresos para un ejercicio fiscal que aún no ha sido promulgado ni publicado, debe considerarse actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el decreto del presupuesto de egresos constituye un acto formalmente legislativo que se encuentra sujeto a las diversas etapas que componen el procedimiento que le da origen y con el que conforma una unidad indisoluble, de tal forma que su impugnación sólo puede realizarse a partir de que concluye dicho procedimiento con su promulgación y publicación porque es hasta ese momento cuando adquiere definitividad, constituyendo su publicación el conocimiento del acto para efectos del cómputo del término para la promoción de la controversia constitucional, conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria citada y, por tanto, el plazo para la

<sup>11</sup>Tesis jurisprudencial P./J. 130/2001, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de dos mil uno, página 803, registro 188642.

<sup>12</sup>Tesis jurisprudencial P./J. 129/2001, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de dos mil uno, página 804, registro 188640.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE  
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRO

promoción de la controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente a su publicación.<sup>13</sup>

Con lo anterior, a esta Comisión no pasa inadvertido lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de reclamación 36/2012 y de donde se desprendió la tesis de rubro **PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LOS ACTOS QUE LO INTEGRAN TRATÁNDOSE DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL O UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD**,<sup>14</sup> citada por el Municipio actor en su escrito inicial. En el recurso en cita, se planteó la pregunta constitucional consistente en saber si procedía la suspensión en contra de la promulgación de un decreto por el que se expedía una norma jurídica, si se alegaba una violación al derecho de veto del Ejecutivo Federal, previsto por el artículo 72 constitucional. En ese contexto, se sostuvo que, tratándose de una controversia constitucional, era posible atacar los actos concretos que integran las fases del procedimiento legislativo, especificando textualmente que esto ocurría 'siempre que lo hagan los poderes legitimados por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y éstos aleguen una transgresión a su ámbito constitucional de competencias asignado'.

En el caso que nos ocupa, es posible extraer que, contrario a lo resuelto en el precedente en cita, no estamos frente a una transgresión del ámbito competencial que el Municipio tiene constitucionalmente asignado, pues, en ese sentido, de una lectura de su demanda no se extrae una violación a su esfera de atribuciones. Si bien el actor pretende ampliar sus competencias en la materia del artículo 115, fracción I y fracción III, inciso i), lo cierto es que esta Comisión no encuentra una atribución, equiparable al derecho de veto que corresponde al Ejecutivo Federal en virtud del artículo 72, apartado A y B constitucional, dentro de las funciones y servicios públicos a cargo del orden municipal.

Así las cosas, de la simple lectura de los elementos con que se cuenta en el expediente se advierte que el municipio promovente combate un acto no susceptible de impugnación a través de la controversia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, por lo que lo conducente es desechar la presente demanda de este medio de control constitucional.

Esta conclusión encuentra apoyo en la tesis que a continuación se señala:

**'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO.** Si de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia de la controversia constitucional y que, por sus propios caracteres, no son desvirtuables con su tramitación pues nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar esas consecuencias, aquélla debe considerarse notoriamente improcedente y, por ende, procede desecharla de plano.<sup>15</sup>

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se acuerda:

<sup>13</sup> Tesis jurisprudencial P/JJ. 67/2003, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, noviembre de dos mil tres, página 433, registro 182866.

<sup>14</sup> Tesis 1ª. CCLXVIII/2012., Aislada, Primera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 580, registro 2002365.

<sup>15</sup> Tesis P. LXXI/2004, Aislada, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, página 1122, registro 179954.

**PRIMERO.** Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Municipio de Tijuana, Estado de Baja California.

**SEGUNDO.** Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido.


Dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, con apoyo en el artículo 282<sup>16</sup> del invocado código federal, se habilitan los días que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este proveído.


**Notifíquese.**

Lo proveyeron y firman conjuntamente la **Ministra Yasmín Esquivel Mossa** y el **Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá**, integrantes de la **Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer período de dos mil diecinueve**, quienes actúan con **Mónica Fernanda Estevané Núñez**, Secretaria de la Comisión que da fe. **(Rúbricas).**

Lo que hago de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.

Ciudad de México, a veinticuatro de julio de dos mil diecinueve.

  
**Mónica Fernanda Estevané Núñez**  
Secretaria de la Comisión de Receso de la Suprema  
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer  
período de dos mil diecinueve.  
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION  
SUBSECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION  
SECCION DE TRAMITE DE CONTROVERSIA  
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE  
INCONSTITUCIONALIDAD

  
PODER JUDICIAL DE  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
SUBSECRETARIA GENERAL  
SECCION DE TRAMITE  
CONSTITUCIONALES Y  
INCONSTITUCIONALIDAD

JAE/NAC/AARH

<sup>16</sup> **Código Federal de Procedimientos Civiles**

**Artículo 282.** El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

# CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO

Oficio 5645/2019

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL  
269/2019

MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA  
CALIFORNIA

Calle Nubes Norte 120, Colonia Jardines  
del Pedregal, Delegación Álvaro  
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01900

En la Ciudad de México, a las TRECE horas con  
DIEZ minutos, del VEINTICUATRO de  
JULIO de dos mil diecinueve, el suscrito  
Juan José Morgan Lizárraga, Actuario Judicial  
adscrito a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de  
Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de  
Justicia de la Nación, me constituí en el domicilio de la autoridad al rubro citada y, una  
vez cerciorado de coincidir nomenclatura de la calle, número y colonia, procedo a  
notificar a la autoridad referida el oficio de que se trata.

Anexo entregado: Ninguno.

Persona que recibe, manifiesta llamarse: García Núñez Beatriz Adriana

Se identifica con Credencial para votar con clave de elector

GRNZBT88042709M200

y refiere ser Empleada

Sello y firma de recibido:

Beatriz Adriana García Núñez  
24-7-11072019

El Actuario

SIN TEXTO

PODER JUDICIAL O  
CURRIRIA CONTRA EL  
QUE SE CREIA LA GRAN  
CONSTITUCION DE NUESTRO  
CONSTITUCIONALES  
— INCONSTITUC



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019  
ACTOR: MUNICIPIO DE TIJUANA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS  
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

CERTIFICACIÓN DE PLAZO

En la Ciudad de México, a veinticinco de julio de dos mil diecinueve, **Mónica Fernanda Estevané Núñez**, Secretaria de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer período de dos mil diecinueve, **CERTIFICA** que el plazo de cinco días hábiles previsto en el artículo 51, fracción I<sup>1</sup> en relación con el 52<sup>2</sup> de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la impugnación del proveído de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la presente controversia constitucional, transcurrirá del **dos al ocho de agosto de dos mil diecinueve**, conforme al calendario siguiente:



LA FEDERACIÓN  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS  
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

JULIO 2019						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
		24	25	26	27	28
29	30	31				
AGOSTO 2019						
				1	2	3
4	5	6	7	8		

Esto, toda vez que el proveído se le notificó el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, surtirá efectos el día hábil siguiente, esto es el uno de agosto y comenzará a correr el dos de los mismos mes y año; y de dicho plazo deben descontarse del veinticinco al treinta y uno de julio, así como tres y cuatro de agosto del presente año, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto en el Punto Primero, incisos a), b) y n), del Acuerdo General Plenario **18/2013**<sup>3</sup>, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

<sup>1</sup> **Artículo 51.** El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:  
I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones; [...]  
<sup>2</sup> **Artículo 52.** El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas.  
<sup>3</sup> **PRIMERO.** Para efectos del cómputo de los plazos procesales en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considerarán como días inhábiles:  
a) Los sábados;  
b) Los domingos;  
n) Los demás que el Tribunal Pleno determine como inhábiles.

## CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019

relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los artículos 2<sup>4</sup> y 3<sup>5</sup> de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163<sup>6</sup> de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La presente certificación se expide en cumplimiento a lo ordenado en el proveído de referencia, para los efectos legales. Doy fe.



PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE  
SUBSECRETARÍA DE  
SECCIÓN DE FRAC  
CONSTITUCIONAL  
INCOSITI

JAE/NAC/AARH

<sup>4</sup> **Artículo 2.** Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

<sup>5</sup> **Artículo 3.** Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:

I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;

II. Se contarán sólo los días hábiles, y

III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

<sup>6</sup> **Artículo 163.** En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 14 y 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la Ley.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

78

FORMA A-54

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019  
ACTOR: MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA  
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS  
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS  
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE  
INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a uno de agosto de dos mil diecinueve se da cuenta al **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, con el estado procesal del expediente. Conste.

Ciudad de México, a uno de agosto de dos mil diecinueve.

Visto el estado procesal del expediente, y dado que los integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil diecinueve, por proveído de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, desecharon la controversia constitucional **269/2019**, promovida por el Municipio de Tijuana, Baja California, y se reservaron de proveer lo conducente al turno de este asunto, se designa al **Ministro Javier Laynez Potisek**, como instructor del procedimiento, según el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

Esto, con fundamento en los artículos 24<sup>1</sup> de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81<sup>2</sup> del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

<sup>1</sup> **Artículo 24.** Recibida la demanda, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designará, según el turno que corresponda, a un ministro instructor a fin de que ponga el proceso en estado de resolución.

<sup>2</sup> **Artículo 81.** Los asuntos de la competencia de la Suprema Corte se turnarán por su Presidente entre los demás Ministros, por conducto de la Subsecretaría General, siguiendo rigurosamente el orden de su designación y el cronológico de presentación de cada tipo de expedientes que se encuentren en condiciones de ser enviados a una Ponencia, tanto para formular proyecto de resolución como para instruir el procedimiento.

El Presidente de cada Sala turnará entre sus integrantes, las solicitudes de facultad de atracción presentadas originalmente por parte no legitimada, los recursos de reclamación interpuestos en contra de los acuerdos que emita y los asuntos cuyo proyecto se tenga por desechado en sesión y su retorno se ordene en ésta. Una vez atraído un asunto, se remitirá a la Presidencia de la Suprema Corte para el turno correspondiente entre los Ministros de la Sala respectiva.

Todos los asuntos del mismo tipo se registrarán en el libro correspondiente a cada uno de ellos debidamente autorizado por los titulares de los respectivos órganos encargados de los trámites correspondientes.

Tratándose de asuntos presentados ante la Suprema Corte que por algún motivo se remitan a otros órganos jurisdiccionales y llegaran a reintegrarse a aquélla para que conozca de los mismos se atenderá para su turno, conforme a las reglas anteriores, a la fecha y hora de recepción del nuevo oficio-remisión respectivo.

Cuando el Ministro decano dicte acuerdos de turno como presidente en funciones, si conforme al orden le corresponde el conocimiento de un asunto, deberá turnarlo a su Ponencia.

**Notifíquese.** Por lista y cúmplase.

Lo proveyó y firma el **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, quien actúa con Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.

EL 02 AGO 2019 ; SE NOTIFICÓ POR LISTA A LOS INTERESADOS LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE. CONSTE.

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACIÓN, POR MEDIO DE LISTA. DOY FE



PODER JUDICIAL DE  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS  
SECCIÓN DE TRÁMITE DE  
CONTROVERSIA CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

JAE/NAC/EDBG

El Secretario General de Acuerdos girará las instrucciones que resulten necesarias para el adecuado funcionamiento y supervisión del sistema de turnos establecido en este Reglamento Interior.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA,  
DERIVADO DE LA CONTROVERSIA  
CONSTITUCIONAL 269/2019**

**PROMOVENTE Y RECURRENTE: MUNICIPIO DE  
TIJUANA, ESTADO DE CALIFORNIA**

**SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS**

**SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS  
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE  
INCONSTITUCIONALIDAD**

En la Ciudad de México, a dos de agosto de dos mil diecinueve, se da cuenta al **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, con el escrito de Ana Marcela Guzmán Valverde, Síndico Procuradora del Municipio de Tijuana, Baja California, recibido el treinta de julio del año en curso en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, y registrado con el número 27355. Conste.

Ciudad de México, a dos de agosto de dos mil diecinueve

Con el escrito de cuenta, **fórmese y regístrese** el expediente relativo al recurso de reclamación que hace valer la Síndico Procuradora del Municipio de Tijuana, Baja California, cuya personalidad tiene reconocida en autos de la controversia constitucional citada al rubro, contra el proveído de veintitrés de julio del presente año, dictado por la **Ministra Yasmín Esquivel Mossa y el Ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil diecinueve**, mediante el cual desechó de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de controversia constitucional.

Con fundamento en los artículos 10, fracción I<sup>1</sup>, 11, párrafo segundo<sup>2</sup>, 51, fracción I<sup>3</sup>, y 52<sup>4</sup> de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **se admite a trámite el recurso de reclamación** que hace valer en representación del Municipio de Mexicali, Baja California.

Por otra parte, con apoyo en el artículo 53<sup>5</sup> de la citada ley reglamentaria, **córrase traslado** a las partes con copia del escrito de

**Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

**Artículo 10.** Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia; (...)

<sup>2</sup> **Artículo 11.** (...)

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación **ya prevista en el párrafo anterior**; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recusos previstos en esta ley. (...)

<sup>3</sup> **Artículo 51.** El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:

I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones; (...)

<sup>4</sup> **Artículo 52.** El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas.

<sup>5</sup> **Artículo 53.** El recurso de reclamación se promoverá ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien correrá traslado a las demás partes para que dentro del plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga.

CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE  
INCONSTITUCIONALIDAD

interposición del recurso, del auto impugnado y de la constancia de notificación respectiva, para que **dentro del plazo de cinco días hábiles**, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga o representación corresponda.

Respeto de esto último, por lo que hace a la **Consejería Jurídica del Gobierno Federal**, la vista es con la finalidad de que, si considera que la materia del presente juicio trasciende a sus funciones constitucionales, manifieste lo que a su esfera competencial convenga, de conformidad con el artículo Décimo Séptimo Transitorio<sup>6</sup> del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce y con lo determinado por el Pleno de este Alto Tribunal en su sesión privada de once de marzo del año en curso<sup>7</sup>.

A efecto de integrar debidamente este expediente, agréguese copia certificada de las constancias que obran en la controversia constitucional **269/2019**, a la cual debe añadirse copia certificada de este proveído para los efectos a que haya lugar.

Con apoyo en los numerales 14, fracción II<sup>8</sup>, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 81, párrafo primero<sup>9</sup>, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez concluido el trámite del recurso, **túrnese este expediente al Ministro José Fernando Franco González Salas**, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.



Transcurrido este último plazo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnará los autos a un ministro distinto del instructor a fin de que elabore el proyecto de resolución que deba someterse al Tribunal Pleno.

<sup>6</sup> **Artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal.** Una vez que entren en vigor las disposiciones de este Decreto referidas en el Transitorio anterior, se procederá de la siguiente forma:

I. Los asuntos en los que la Procuraduría General de la República ejerza la representación de la Federación, así como aquellos en que haya ejercitado acciones de inconstitucionalidad en casos distintos a los previstos en el inciso i) de la fracción II, del artículo 105 de esta Constitución que se adiciona por virtud de este Decreto, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el Transitorio anterior, deberán remitirse dentro de los veinte días hábiles siguientes a la dependencia del Ejecutivo Federal que realiza la función de Consejero Jurídico del Gobierno: (...).

<sup>7</sup> Comunicado a esta Sección de Trámite mediante oficio número \$GA/MFEN/237/2019, de once de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario General de Acuerdos, en los términos siguientes: "Hago de su conocimiento que en sesión privada celebrada el día de hoy, el Tribunal Pleno determinó '**Dar vista en los asuntos relativos a las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, en los recursos deducidos de esos expedientes, además de los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, tanto a la Fiscalía General de la República como al Consejero Jurídico del Gobierno Federal**'."

<sup>8</sup> **Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación**

**Artículo 14.** Son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia: (...)

II. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución (...)

<sup>9</sup> **Artículo 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.** Los asuntos de la competencia de la Suprema Corte se turnarán por su Presidente entre los demás Ministros, por conducto de la Subsecretaría General, siguiendo rigurosamente el orden de su designación y el cronológico de presentación de cada tipo de expedientes que se encuentren en condiciones de ser enviados a una Ponencia, tanto para formular proyecto de resolución como para instruir el procedimiento. (...)

RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA, DERIVADO DE LA  
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019

Finalmente, con fundamento en el artículo 287<sup>10</sup> del  
invocado Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase  
la certificación de los días en que transcurre el plazo  
otorgado en este proveído.

**Notifíquese.**

Lo proveyó y firma el **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, quien actúa con **Carmina Cortés Rodríguez**, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.



**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION**

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION**

Esta hoja corresponde al proveído de dos de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, en el recurso de reclamación 138/2019-CA, derivada de la controversia constitucional 269/2019, interpuesta por el Municipio de Tijuana, Baja California. Conste.  
EHC/EDBG

<sup>10</sup>Código Federal de Procedimientos Civiles.

**Artículo 287** En los autos se asentará razón del día en que comienza a correr un término y del en que deba concluir. La constancia deberá asentarse precisamente el día en que surta sus efectos la notificación de la resolución en que se conceda o mande abrir el término. Lo mismo se hará en el caso del artículo anterior. La falta de la razón no surte más efectos que los de la responsabilidad del omiso.

EL 13 AGO 2019 ; SE NOTIFICÓ POR LISTA A LOS  
INTERESADOS LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE. CONSTE  
SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN  
VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS, SE TIENE  
POR HECHA LA NOTIFICACIÓN, POR MEDIO DE LISTA. DOY FE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PODER JUDICIAL  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil diecinueve.  
Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

**CERTIFICA**

Que la anterior es copia fiel del acuerdo de dos de agosto del año en curso, dictado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el **recurso de reclamación 138/2019-CA, derivado de la controversia constitucional 269/2019**, interpuesto por el Municipio de Tijuana, Estado de Baja California; y se expide en dos (2) fojas útiles, debidamente cotejadas, foliadas, selladas y rubricadas, para ser agregada a la citada controversia.  
Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en el citado proveído, dictado por el **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. CONSTE.**

EHC/EAM

*[Handwritten signature]*

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA,  
DERIVADO DE LA CONTROVERSIA  
CONSTITUCIONAL 269/2019  
RECURRENTE: MUNICIPIO DE TIJUANA,  
BAJA CALIFORNIA

PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS  
MINISTRO QUE HIZO SUYO EL ASUNTO: JAVIER LAYNEZ POTISEK  
SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA

Vo. Bo.  
MINISTRO

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema  
Corte de Justicia de la Nación correspondiente al dos de octubre de dos  
mil diecinueve.

VISTOS; Y  
RESULTANDO

**PRIMERO. Presentación de la controversia constitucional.**

Mediante escrito recibido el diecinueve de julio de dos mil diecinueve,  
en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este  
Tribunal, Ana Marcela Guzmán Valverde, en su carácter de Síndico  
Procurador del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, promovió  
controversia constitucional contra la Legislatura del Estado de Baja  
California, por la omisión de convocar al Ayuntamiento de Tijuana a la  
Comisión de Dictaminación, para que participara con voz en los trabajos  
legislativos que debían tener lugar respecto a la iniciativa de reforma al  
artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución Política del  
Estado Libre y Soberano de Baja California.

**SEGUNDO. Auto por el que se desechó la controversia  
constitucional.** En acuerdo de veintitrés de julio de dos mil diecinueve,  
los Ministros Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara  
Carrancá, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte  
de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil  
diecinueve, decretaron el desechamiento de la controversia  
constitucional, al considerar que se actualizaba un motivo manifiesto e  
indudable de improcedencia.

**TERCERO. Interposición del recurso de reclamación y  
trámite.** Contra esa determinación, Ana Marcela Guzmán Valverde,

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA, DERIVADO  
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019**

Síndico Procurador del Municipio de Tijuana, Baja California, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa.

Mediante acuerdo de dos de agosto de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró el asunto con el expediente 138/2019-CA, lo admitió a trámite, ordenó correr traslado a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y turnó los autos a la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

Por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Presidente de esta Segunda Sala determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. Competencia.** Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de reclamación.<sup>1</sup>

**SEGUNDO. Procedencia.** El recurso de reclamación es procedente.<sup>2</sup>

**TERCERO. Oportunidad.** El recurso es oportuno.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> De conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, fracción V, 21, fracción XI, y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, en virtud de que el recurso de reclamación no se ubica en los supuestos de los asuntos cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Pleno.

<sup>2</sup> De conformidad con el artículo 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se interpuso contra el proveído dictado por los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó de plano la controversia constitucional por considerar actualizada una causa manifiesta e indudable de improcedencia.

<sup>3</sup> El acuerdo recurrido se notificó por medio de oficio a la parte recurrente el miércoles veinticuatro de julio de dos mil diecinueve y surtió efectos el jueves uno de agosto siguiente (porque del veinticinco al treinta y uno de julio de este año se encontraba transcurriendo el primer periodo de receso de este Tribunal y no deben considerarse en términos de la fracción III del artículo 3º de la Ley Reglamentaria de la materia); de tal manera que el plazo de cinco días para su interposición previsto en el artículo 52 de la ley reglamentaria de la materia transcurrió del viernes dos al jueves ocho de agosto de dos mil diecinueve, del cual se deben descontar el tres y cuatro de agosto por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto en el Punto Primero, incisos a), b) y n), del Acuerdo General Plenario 18/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, si el escrito de expresión de agravios fue presentado el martes treinta de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su interposición fue oportuna. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 223/2007, de esta Segunda Sala, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU



RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA, DERIVADO  
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CUARTO. Legitimación.** El recurso fue promovido por parte legitimada.<sup>4</sup>

**QUINTO. Acuerdo recurrido.** En el acuerdo recurrido, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil diecinueve, desecharon la controversia constitucional al considerar que se actualizaba un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

Señalaron que de la simple lectura de la demanda y sus anexos, se podía advertir que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, toda vez que el acto impugnado tuvo lugar dentro de un procedimiento que no ha concluido.

En ese sentido, precisaron que el acto cuya invalidez demanda la accionante se encuentra sujeto a las diversas etapas que componen el procedimiento legislativo, por lo que sólo puede impugnarse una vez que éste haya concluido, pues es hasta ese momento en que los actos que lo integran adquieren definitividad.

Al respecto, se apuntó que es criterio de este Tribunal Constitucional que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de éste, de tal forma que no es impugnabile cada acto legislativo en lo individual, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma general.

**SEXTO. Agravios.** La parte recurrente formula los agravios siguientes:

*PRESENTACIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA AUNQUE SE INTERPONGA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO. Del artículo 103 de la Ley de Amparo se advierte que el plazo de 3 días para interponer el recurso de reclamación comenzará a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del acuerdo recurrido. Ahora bien, el recurso interpuesto antes de que inicie ese plazo no puede considerarse extemporáneo, pues dicho precepto sólo pretende que el aludido medio de defensa no se haga valer después de concluido aquél, pero no impide que pueda presentarse antes de que inicie." Datos de localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, pág. 215, registro IUS 170625.*

<sup>4</sup> El recurso fue interpuesto por Ana Marcela Guzmán Valverde, Síndico Procurador del Municipio de Tijuana, Baja California, cuya personalidad tiene reconocida en autos de la controversia constitucional de la que deriva el presente recurso de reclamación.

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA, DERIVADO  
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019**

- No es aplicable el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, invocado en el acuerdo impugnado, porque como se señaló en la demanda de controversia constitucional, no hay medio o recurso legal para modificar, revocar o anular el acto cuya invalidez solicita.
- El acuerdo recurrido se pretende fundamentar en el artículo 72, Apartados A y B, de la Constitución que regulan la figura del veto; sin embargo no es aplicable, ni tiene relación con la Litis en la controversia.
- No se realizó un estudio exhaustivo para el desechamiento de la demanda, ni se argumentó porqué la causa de improcedencia es notoria y manifiesta.
- En atención a la tesis aislada 1a. CCLXVIII/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte, de rubro *"PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE LOS ACTOS QUE LO INTEGRAN TRATÁNDOSE DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL O UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD."*, no existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque este Tribunal Constitucional ya ha analizado controversias constitucionales similares a la presentada por la recurrente, en el sentido de que no se requiere definitividad del acto reclamado, por lo que se puede impugnar cualquier etapa formal en la creación de una norma general y no necesariamente se debe esperar hasta que sea publicada y entre en vigor.
- No se valoró exhaustivamente el interés legítimo del Municipio de Tijuana, para ser actor en la controversia constitucional.
- No se dio cumplimiento al artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- El proceso legislativo que se combate vulnera la esfera de competencia del Municipio en relación con el artículo 115





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA, DERIVADO  
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019

constitucional, porque la Comisión de Dictamen Legislativo no anunció al Ayuntamiento, con al menos cinco días de anticipación, la fecha de sesión de la iniciativa de reforma, a efecto de que participara en los trabajos deliberativos, de tal manera que no se permitió su participación, ni se justificó la dispensa de trámite realizada.

- El artículo 115 constitucional establece que los Estados están obligados a cumplir la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular y que los Municipios forman parte del Estado con competencia para velar y resguardar la forma de gobierno que debe imperar y, en el caso, el acto impugnado lleva implícita una reforma que hace nugatorios los principios de democracia; de que el poder emana del pueblo para el pueblo y el relativo a que todo gobernante solo puede ejercer el cargo por el tiempo para el que fue electo; de ahí que el Municipio sí cuenta con interés legítimo para acudir a la controversia.
- El procedimiento legislativo impugnado no es equivalente a los procedimientos a que se refiere el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de la materia, puesto que en el caso no se emitirá una resolución que le ponga fin; de tal manera que no se actualiza la causa de improcedencia invocada.
- En el caso, se cumplen los supuestos que prevé la tesis aislada 1a CCLXVIII/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte, de rubro "*PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE LOS ACTOS QUE LO INTEGRAN TRATÁNDOSE DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL O UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.*"

**SÉPTIMO. Estudio.** Son infundados los agravios expresados por la parte recurrente, los cuales por razón de técnica, serán analizados en orden distinto al planteado por la inconforme.

De la revisión integral del auto impugnado, de la demanda de controversia constitucional y de sus anexos, esta Segunda Sala advierte que, contrario a lo que señala la recurrente, la determinación tomada

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA, DERIVADO  
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019**

por los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil diecinueve, fue correcta ya que, en el caso, efectivamente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia<sup>5</sup>, en relación con el artículo 25 del propio ordenamiento, por falta de definitividad.

El artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de la materia, establece como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido que la referida causal de improcedencia implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales que involucra dos cuestiones específicas:

1. La existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia y lograr con ello su revocación, modificación o anulación, caso en que la parte afectada está obligada a agotarlo previamente a esta acción, y
2. La existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, es decir, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad, y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento para estar en aptitud de impugnar la resolución, y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio.

Este criterio se sustenta en la tesis jurisprudencial P./J. 12/99, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro ***"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI***

---

<sup>5</sup> Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...)

VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto; (...)



RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA, DERIVADO  
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE  
DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.<sup>6</sup>

En relación con la segunda de las hipótesis señaladas en la invocada tesis, es preciso distinguir entre los supuestos de litispendencia y los de falta de definitividad: los primeros únicamente podrían actualizarse respecto de las controversias que estuvieran promoviéndose ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que no es el caso) y los segundos, ante cualquier instancia que tuviera facultades para pronunciarse sobre el litigio del cual podría conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el presente caso resulta relevante la hipótesis relativa a la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, específicamente de un procedimiento legislativo que no ha concluido.

La cuestión que se plantea en este asunto es qué consecuencias normativas se siguen, para efectos de la procedencia de una controversia constitucional, cuando se impugnan ciertos "actos" o "elementos"<sup>7</sup> que forman parte de un procedimiento de creación normativa que se encuentra pendiente de culminación.

Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, reiteradamente, el criterio de que frente a ese tipo de "elementos", la controversia constitucional es improcedente, ya que se trata de "actos no definitivos" (en sentido lato), como acontece respecto de normas que no hubieren sido publicadas o promulgadas, los dictámenes legislativos o las actuaciones realizadas dentro de los procesos legislativos federales.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Texto: "La causal de improcedencia a que se refiere la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, que involucra dos cuestiones específicas que consisten, una, en la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia y lograr con ello su revocación, modificación o nulificación, caso en el que la parte afectada está obligada a agotarlo previamente a esta acción; otra, la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento, para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio." Datos de localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Abril de 1999, pág. 275, registro IUS 194292.

<sup>7</sup> Se usa el término "elementos" como una expresión genérica y neutral.

<sup>8</sup> Similares consideraciones se sostuvieron en el recurso de reclamación 73/2011-CA, derivado de la controversia constitucional 103/2011, resuelto por la Segunda Sala en sesión de 18 de enero de

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA, DERIVADO  
DE LA CONTROVERSIAS CONSTITUCIONAL 269/2019**

Este criterio se advierte de las tesis siguientes:

- P./J. 129/2001, de rubro *"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONAL. LOS VICIOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL."*<sup>9</sup>
- P./J. 67/2003, de rubro *"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE NO HA SIDO PROMULGADO NI PUBLICADO."*<sup>10</sup>
- P./J. 88/2004, de rubro *"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE IMPUGNAN LOS DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, YA QUE CONSTITUYEN ACTOS QUE FORMAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO Y NO*

2012, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas (Ponente), Luis María Aguilar Morales y Sergio A. Valls Hernández.

<sup>9</sup> Texto: "Si se toma en consideración, por un lado, que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no es posible jurídicamente impugnar cada acto legislativo individualmente, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma general, y por otro, que tratándose de controversias constitucionales, el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la impugnación de actos en esa vía puede llevarse a cabo dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acto que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de éste; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de él, resulta inconcuso que la impugnación de los actos que integran el procedimiento legislativo únicamente puede realizarse a partir de que es publicada la norma general emanada de dicho procedimiento, porque es en ese momento cuando los mencionados actos adquieren definitividad.", Datos de localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, pág. 804, registro IUS 188640.

<sup>10</sup> Texto: "Si en la demanda de controversia constitucional se impugna el decreto legislativo del presupuesto de egresos para un ejercicio fiscal que aún no ha sido promulgado ni publicado, debe considerarse actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el decreto del presupuesto de egresos constituye un acto formalmente legislativo que se encuentra sujeto a las diversas etapas que componen el procedimiento que le da origen y con el que conforma una unidad indisoluble, de tal forma que su impugnación sólo puede realizarse a partir de que concluye dicho procedimiento con su promulgación y publicación porque es hasta ese momento cuando adquiere definitividad, constituyendo su publicación el conocimiento del acto para efectos del cómputo del término para la promoción de la controversia constitucional, conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria citada y, por tanto, el plazo para la promoción de la controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente a su publicación." Datos de localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, pág. 433, registro IUS 182866.



RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA, DERIVADO  
DE LA CONTROVERSI CONSTITUCIONAL 269/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE PONGAN FIN  
A UN ASUNTO.<sup>11</sup>

- P./J. 79/2005, de rubro: "CONTROVERSI CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CUANDO SE IMPUGNA UN ACTO QUE NO ES DEFINITIVO EN EL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL DEL CUAL FORMA PARTE."<sup>12</sup>

En la especie, el Municipio actor impugna la omisión del Congreso de Baja California, de convocar al Ayuntamiento de Tijuana, a la Comisión de Dictaminación, para que participara con voz en los trabajos legislativos que debían tener lugar en relación con la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

<sup>11</sup> Texto: "De los artículos 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 65, 87, 94, 95 y 115 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las Comisiones legislativas son órganos internos de las Cámaras del Congreso de la Unión que contribuyen a que éstas cumplan con sus atribuciones constitucionales, para lo cual analizan los asuntos de su competencia y los instruyen hasta ponerlos en estado de resolución, elaborando un dictamen que contendrá una parte expositiva de las razones en que se funde y otra de proposiciones claras y sencillas que puedan someterse a votación; asimismo, se observa que realizado el dictamen, el cual debe estar firmado por la mayoría de los miembros de la Comisión, debe someterse a discusión y una vez discutido se pone a votación y, en caso de aprobación por el Pleno de la Cámara legislativa, se traduce en un punto de acuerdo. Con base en lo anterior, se concluye que el dictamen es uno de los actos que conforman el procedimiento correspondiente y no constituye una resolución definitiva que en sí misma haya puesto fin al asunto, como sí lo es la aprobación que realiza el Pleno, por lo que al impugnarse dicho dictamen en una controversia constitucional, debe sobreseerse en el procedimiento por no constituir aquél un acto definitivo, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Datos de localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, pág. 919, registro IUS 180675.

<sup>12</sup> Texto: "De los artículos 71, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que para que las reformas y adiciones propuestas en una iniciativa de ley formen parte del orden jurídico nacional es necesario que se agoten todas las etapas contempladas en el proceso legislativo. Ahora bien, si la Cámara Revisora desecha un dictamen sometido a su consideración por la Cámara de Origen para que ésta lo reexamine con base en las observaciones formuladas, es indudable que tal proceso legislativo -incluido el dictamen impugnado- no puede reputarse como definitivo para efectos de la procedencia de la controversia constitucional, pues todavía está pendiente la resolución de la Cámara de Origen, o bien, el resultado del procedimiento previsto en el citado artículo 72, inciso d), de la Constitución Federal y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia." Datos de localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Julio de 2005, pág. 915, registro IUS 178011.

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA, DERIVADO  
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019**

Al respecto, en la demanda de controversia constitucional el Municipio actor hizo valer que, a su consideración, *"(...) el Congreso violó de manera grave el proceso legislativo instituido en la Constitución [local] y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, lo que impidió al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, ejercer su derecho de audiencia para opinar, discutir y hacerse representar en el seno de la Comisión de Dictamen legislativo para analizar dicha iniciativa (...)"*.

Como se advierte, el acto impugnado carece de definitividad por formar parte de un procedimiento que, a la fecha de presentación de la demanda, aún no concluía y que requería agotar las etapas que permitieran arribar a la promulgación y publicación, porque es hasta ese momento en que los actos que integran el procedimiento legislativo adquieren definitividad.

En relación con la regulación del procedimiento legislativo en el Estado de Baja California, el Capítulo III, denominado *"De la Iniciativa y formación de leyes y decretos"*, de la Constitución Política de dicha entidad federativa, se advierte que las iniciativas de las leyes y decretos deberán sujetarse al Dictamen de Comisiones, discusión y votación y adquirirán el carácter de ley, al ser aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo<sup>13</sup>.

Las comisiones de dictamen legislativo anunciarán al Poder Ejecutivo y a los Ayuntamientos, cuando la iniciativa se relacione con asuntos de carácter municipal, la fecha de sesión en que se discutirá un proyecto para que envíe un representante que, sin voto, tome parte en los trabajos. Por su parte, si el Ejecutivo juzga conveniente hacer observaciones a un proyecto aprobado por el Congreso, podrá negarle su sanción y devolverlo a este Poder dentro de los quince días siguientes a aquel en que se le haga saber, o para que tomadas en consideración, se examine y se discuta de nuevo.

En ese orden, se establece que las leyes, ordenamientos y disposiciones de observancia general que hayan sido aprobados por el Congreso del Estado y sancionados por el Ejecutivo, deberán ser promulgados y publicados en el Periódico Oficial del Estado.

---

<sup>13</sup> ARTICULO 33.- Las iniciativas adquirirán el carácter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y Promulgadas por el Ejecutivo, salvo lo previsto en el artículo 34 de esta Constitución.



**RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019**

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

Acorde a lo anterior, la omisión impugnada en la controversia constitucional, se ubica dentro de un procedimiento legislativo que, a la fecha de la presentación de la demanda, no había culminado, al no haberse promulgado ni publicado el decreto respectivo, por lo que la controversia constitucional es improcedente.

Lo anterior demuestra que, contrario a lo que refiere la recurrente, el procedimiento legislativo impugnado sí es equivalente a los procedimientos a que se refiere el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de la materia.

Además, la improcedencia de la controversia constitucional se robustece si se toma en consideración que, de estimar lo contrario, se daría lugar a que se promoviera contra cada uno de los actos que pudieran emitirse dentro de los procedimientos, lo que desnaturizaría su esencia como vía uniinstancial, y desvirtuaría el carácter de este Tribunal como único facultado para resolver sobre la constitucionalidad de actos definitivos de las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, constitucional, que pudieran lesionar su esfera de competencia.

Consecuentemente, en el caso sí se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la Materia.

Aunado a lo anterior, contrario a lo planteado por la recurrente, la causa de improcedencia sí es notoria y manifiesta, derivado de que el Pleno de este Tribunal Constitucional ya ha decidido que la impugnación de los actos que integran el procedimiento legislativo, únicamente puede realizarse a partir de que es publicada la norma general emanada de dicho procedimiento, porque es en ese momento cuando esos actos adquieren definitividad.

Efectivamente, la existencia de los criterios jurisprudenciales citados en párrafos precedentes, que determinan la improcedencia de la controversia constitucional contra actos del proceso legislativo de una norma que no ha sido publicada, son una causa manifiesta e indudable que justifica el desechamiento de la controversia constitucional, pues es inconcuso que si ello ha sido determinado por el Pleno de esta Suprema

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA, DERIVADO  
DE LA CONTROVERSIAS CONSTITUCIONAL 269/2019**

Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia de observancia obligatoria en términos del artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,<sup>14</sup> para todos los órganos de menor jerarquía, no hay posibilidad de que dicho obstáculo, declarado por el Máximo Tribunal para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado.

Es así, porque de conformidad con el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de la materia, cuando las sentencias dictadas en controversias constitucionales sean aprobadas por cuando menos ocho votos, las razones contenidas en los considerandos que funden sus resolutivos serán obligatorias para las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales.

De esta manera, la jurisprudencia es de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, incluidos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, por disposición expresa del artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, obligatoriedad que se extiende a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese sentido, debe considerarse que la existencia de criterios jurisprudenciales de este Tribunal, constituye una inexcusable obligación constitucional de los órganos jurisdiccionales al resolver las controversias sometidas a su conocimiento.

Lo hasta aquí expuesto lleva a demostrar la posibilidad del desechamiento de la controversia constitucional, como causa notoria y manifiesta de improcedencia, cuando se impugnen actos del procedimiento legislativo de una norma general que no ha sido publicada, porque al ser criterio de jurisprudencia emitido por el Pleno de este Tribunal Constitucional, es obligatorio para todas las

---

<sup>14</sup> "ARTICULO 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos de Circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales".





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA, DERIVADO  
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019

77  
FORMA A-55

87

autoridades jurisdiccionales y, en ese sentido, no existe razón lógica para que ésta sea obviada o pueda variar la naturaleza de los actos.

Sostener lo contrario implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio que se dio como resultado de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia, del máximo intérprete constitucional.

Sin que sea óbice a la conclusión alcanzada, el criterio 1ª. CCLXVIII/2012, de rubro **PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE LOS ACTOS QUE LO INTEGRAN TRATÁNDOSE DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL O UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD**<sup>15</sup>, en el que la Primera Sala consideró que en controversia constitucional, las fases del procedimiento legislativo pueden impugnarse sin que pueda alegarse falta de definitividad, ya que en este medio de control no hay limitación a la impugnación de normas generales; lo que permite la impugnación de los actos concretos que integran cada una de las fases del procedimiento legislativo, mientras sean impugnadas por los poderes con legitimación específica en el artículo 105, y estos se encuentren impugnando una transgresión a su ámbito constitucional de competencias asignado.

Lo anterior, toda vez que las consideraciones con base en las cuales la Primera sala de este Tribunal determinó la procedencia de la controversia, de manera alguna son obligatorias para esta Segunda

<sup>15</sup> El texto de la tesis aislada dice: "En la jurisprudencia P./J. 35/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ACTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.", el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que en la acción de inconstitucionalidad los actos integrantes del procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general resultante, por lo que es improcedente impugnar individualmente cada fase de éste, pues no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través de su análisis conjunto con motivo de la publicación de la norma, porque es hasta ese momento cuando los actos adquieren definitividad. Ahora bien, a diferencia de lo anterior, en la controversia constitucional las fases del procedimiento legislativo pueden reclamarse sin que pueda alegarse falta de definitividad, ya que en este medio de control no hay limitación a la impugnación de normas generales, lo que permite atacar actos concretos que integran cada una de las fases del procedimiento legislativo, siempre que lo hagan los poderes legitimados por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y éstos aleguen una transgresión a su ámbito constitucional de competencias asignado". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 580, Registro: 2002365.

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA, DERIVADO  
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019**

Sala, a la cual le resultan obligatorios únicamente los criterios sustentados en los juicios de controversia constitucional cuando son aprobados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de ocho votos.

Bajo esa tesitura, con independencia de que se cumplan los supuestos establecidos en la tesis que cita la recurrente, en cuanto a que sí se ve afectado el ámbito competencial del Municipio y que es uno de los entes previstos en el artículo 105, fracción I, de la Constitución, lo cierto es que se trata de una tesis aislada que no resulta obligatoria, por lo que los agravios formulados en relación con su aplicación y el cumplimiento de los requisitos que establece, son infundados.

Aunado a lo anterior, las tesis jurisprudenciales citadas tanto en el acuerdo recurrido como en la presente ejecutoria, relativas a la definitividad de los actos impugnables en controversia constitucional, no han sido modificadas o superadas por este Tribunal Constitucional, por lo que son de carácter obligatorio y plenamente aplicables al caso como se ha expuesto.

Además, si bien en el acuerdo recurrido los Ministros Integrantes de la Comisión de Receso hicieron referencia al artículo 72, Apartados A y B, de la Constitución, que regulan la figura del veto; ello fue a efecto de justificar por qué, en el caso, no se estaba en el supuesto de la tesis 1ª. CCLXVIII/2012 que el Municipio actor consideraba aplicable.

Por otra parte, resultan infundados los agravios relacionados con que el Municipio actor sí cuenta con interés legítimo para acudir a la controversia constitucional, porque esa no fue la razón del desechamiento de la demanda, sino que, en el caso, se impugna un acto que a la fecha de presentación de la demanda no contaba con definitividad.

Asimismo, resulta infundado el agravio en la parte que refiere que en el acuerdo recurrido no se dio cumplimiento al artículo 41<sup>16</sup> de la Ley

---

<sup>16</sup> ARTICULO 41. Las sentencias deberán contener:

- I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;
- II. Los preceptos que la fundamenten;
- III. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que en su caso se estimaren violados;
- IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA, DERIVADO  
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019

78  
FORMA A-65  
8  
38

Reglamentaria de la materia, puesto que, por una parte, dicho precepto establece los requisitos que deben contener las sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales y, en el caso, se trata de un acuerdo de mero trámite emitido por los Ministros Integrantes de la Comisión de Receso.

Además, en el acuerdo recurrido sí se precisó el acto impugnado, se citaron los preceptos legales aplicables y se formularon las razones por las que se concluyó que la controversia constitucional resultaba improcedente; las cuales esta Segunda Sala considera jurídicamente correctas.

Consecuentemente, al resultar infundados los agravios de la recurrente, procede confirmar el acuerdo de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, dictado por los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil diecinueve, en el que se decretó el desechamiento de la controversia constitucional 269/2019.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

**PRIMERO.** Es infundado el recurso de reclamación.

**SEGUNDO.** Se confirma el acuerdo emitido el veintitrés de julio de dos mil diecinueve por los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil diecinueve, en la controversia constitucional 269/2019.

**Notifíquese;** con testimonio de esta resolución por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada;

V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen;

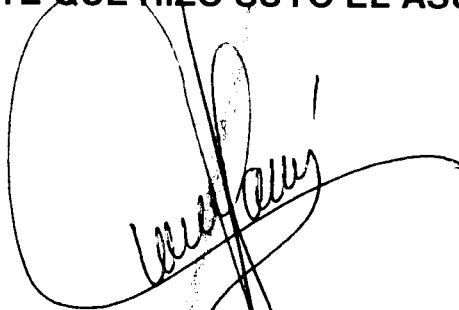
VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación.

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA, DERIVADO  
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019**

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., Yasmín Esquivel Mossa y Presidente Javier Laynez Potisek. Ausente el Ministro José Fernando Franco González Salas (ponente). El Ministro Javier Laynez Potisek hizo suyo el asunto.

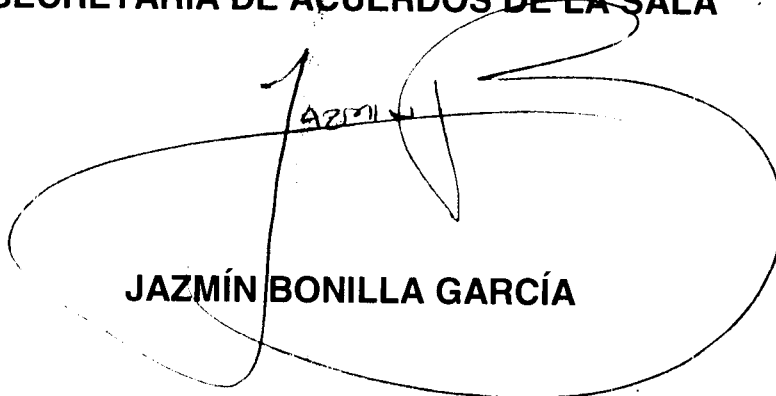
Firman el Ministro Presidente y Ponente que hizo suyo el asunto y la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala, quien autoriza y da fe.

**PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA  
Y PONENTE QUE HIZO SUYO EL ASUNTO**



**MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK**

**SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA**



**JAZMÍN BONILLA GARCÍA**

LA SUSCRITA ADRIANA CARMONA CARMONA **HACE CONSTAR** QUE LAS HOJAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN A LA EJECUTORIA PRONUNCIADA EN SESIÓN DE **DOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE**, EN EL EXPEDIENTE NÚMERO **RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2019-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019**. **RECURRENTE: MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**, LAS CUALES REFLEJAN TANTO LOS AJUSTES ACEPTADOS Y VOTADOS POR LOS MINISTROS EN EL DESARROLLO DE LA SESIÓN, COMO EL SENTIDO DE LA DECISIÓN ADOPTADA EN FORMA UNÁNIME POR LA Y LOS MINISTROS INTEGRANTES DE ESTA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CUYOS PUNTOS RESOLUTIVOS SON: **PRIMERO**. ES INFUNDADO EL RECURSO DE RECLAMACIÓN. **SEGUNDO**. SE CONFIRMA EL ACUERDO EMITIDO EL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE POR LOS MINISTROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RECESO DE LA SUPREMA CORTE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ciudad de México, a veinticinco de octubre de dos mil diecinueve.-----  
Carmina Cortés Rodríguez Secretaria de la Sección de Trámite de  
Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de  
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -----

**C E R T I F I C A**

Que la anterior es copia fiel y exacta de la sentencia de dos de octubre  
de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala de esta Suprema  
Corte de Justicia de la Nación, en el **recurso de reclamación 138/2019-  
CA, derivado de la controversia constitucional 269/2019**, promovido  
por el Municipio de Tijuana, Baja California, y se expide en nueve (9)  
fojas útiles, debidamente selladas, cotejadas y rubricadas, para  
integrarse a la citada controversia constitucional.-----

Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en el proveído de veinticuatro  
de octubre del año en curso, dictado por el **Ministro Arturo Zaldívar  
Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la  
Nación. CONSTE.**-----

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
SECRETARÍA DE LA SECCIÓN DE TRÁMITE DE  
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE  
INCONSTITUCIONALIDAD

*[Firma manuscrita]* / \* L

SUMMIT

THE NATIONAL  
ARCHIVES  
COLLECTION OF  
MANUSCRIPTS  
AND  
LIBRARY



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 269/2019  
ACTOR: MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA  
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS  
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta al **Ministro Javier Laynez Potisek, instructor en el presente asunto**, con lo siguiente:

Constancia	Registro
Copia certificada de la resolución de dos de octubre del año en curso, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de reclamación <b>138/2019-CA</b> .	Sin registro

Documental recibida el veintitrés de octubre del año en curso en la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de este Alto Tribunal. Conste.

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil diecinueve.

Agréguese al expediente, para que surta efectos legales, la copia certificada de la resolución de cuenta, dictada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en el recurso de reclamación **138/2019-CA**, en el que se confirmó el auto recurrido de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, emitido en el presente asunto, por tanto, **se ordena archivar este expediente como asunto concluido**.

Notifíquese.

Lo proveyó y firma el **Ministro instructor Javier Laynez Potisek**, quien actúa con **Carmina Cortés Rodríguez**, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.

*[Firma]*

*[Firma]*

EL 05 NOV 2019 ; SE NOTIFICÓ POR LISTA A LOS  
INTERESADOS LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE. CONSTE,  
SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN  
VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS, SE TIENE  
POR HECHA LA NOTIFICACIÓN, POR MEDIO DE LISTA. DOY FE







